

**Expediente:**  
**Especialista:**  
**Escrito:** Uno  
**Cuaderno:** Principal  
**Materia:** Constitucional  
**Sumilla:** Interponemos demanda de amparo

**SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE CORONEL PORTILLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI:**

**Joel Nunta Valera**, ciudadano peruano, identificado con DNI N°46043909, **presidente de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya**, integrante del pueblo indígena shipibo-conibo, y otros, con domicilio procesal en el jirón Los Pinos, manzana 251, lote 12, urbanización Las Palmeras, en el distrito de Yarinacocha, en la ciudad de Pucallpa, ante usted se presentan respetuosamente y dicen:

Que, al amparo del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 200.2 de la Constitución Política del Estado y del artículo 37 y siguientes del Código Procesal Constitucional, **interponemos demanda constitucional de amparo, en primer término, contra la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali** (en adelante, «DRAU») por haber expedido constancias de posesión a favor de 222 personas ajenas a la comunidad, a través de los que se les reconoce posesión sobre territorios que son territorio indígena ancestral; de igual modo, la presente demanda se dirige contra los títulos de propiedad que, posteriormente, la DRAU entregó a estos mismos sujetos, a espaldas de la comunidad, a pesar son propiedad de la comunidad.

Cabe anotar que, la comunidad solicitó formalmente a la DRAU la ampliación de la titulación de su propiedad ancestral, con el objeto de hacer compatibles su propiedad material y formal; no obstante, la entidad denegó esta petición, con lo cual su propiedad ancestral se mantuvo en indefensión.

De igual modo, **dirigimos la presente demanda de amparo contra la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C.** (en adelante «la empresa») por la celebración de 222 contratos de compraventa, mediante los cuales adquirieron presuntamente propiedad privada tierras

que conforman el territorio ancestral de la comunidad de manos de los 222 colonos, quienes las obtuvieron de forma arbitraria e inconstitucional, como ha sido señalado.

Adicionalmente, la empresa viene ejecutando actos graves de depredación ambiental en bosques y otras formaciones boscosas, que incluyen inclusive bosques primarios. **Esta situación ha generado la degradación y destrucción de los hábitats naturales de la flora y fauna locales, nuevamente, en perjuicio de la comunidad, que depende en altísimo grado de los recursos naturales producidos en la zona para su supervivencia alimentaria y social.**

En este contexto, han sido vulnerados los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la propiedad comunal y la posesión del territorio ancestral, al territorio, a la identidad étnica, a la libre determinación y la elección del propio modelo de desarrollo, a disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado y a los recursos naturales; asimismo, se vulneran los principios de la garantía de la vigencia plena de los derechos humanos y el deber estatal de protección de los sectores que sufren de desigualdad, consagrados en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

## **I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA**

### **1. Legitimación activa**

Los demandantes son **los miembros de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya que firman esta demanda, encabezados por el ciudadano Joel Nunta Valera**, afectados en el presente caso. Por consiguiente, en virtud del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, se encuentra legitimada para interponer la presente demanda de amparo, con la finalidad de requerir a su juzgado la intervención del Estado para que asuma su obligación de protección material y efectiva de los derechos de sus ciudadanos, de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional (Anexo N° 1).

### **2. Legitimación pasiva**

Dirigimos la presente demanda contralas siguientes personas:

- a. El gobernador regional de Ucayali**, Manuel Gambini Rupay, con domicilio en el jirón Raymondi N° 220, en la ciudad de Pucallpa, representado por la Carmen Edith de la Cruz Alayo, **procuradora pública**, con domicilio en el jirón Raymondi N.º 660, cuarto piso, en la ciudad de Pucallpa, a donde deberá ser notificado;
- b. El director general de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali**, Isaac Huamán Pérez, con domicilio en el jirón José Gálvez N° 287, en la ciudad de Pucallpa, representado por Carmen Edith de la Cruz Alayo, **procuradora pública**, con domicilio en el jirón Raymondi N° 660, cuarto piso, en la ciudad de Pucallpa, a donde deberá ser notificado;

- c. **La jefa zonal de la Zona Registral N° VI, sede Pucallpa, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos**, con domicilio en el jirón Progreso N° 150, en la ciudad de Pucallpa, representada por Karen Julia Pineda Higa, procuradora pública, con domicilio en la avenida Arenales N° 1080, en el distrito de Jesús María, ciudad de Lima, a donde deberá ser notificada;
- d. **El gerente general de la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C.**, Antonio Espinoza Rubén, con domicilio en la avenida San Martín N.º 200, en la ciudad de Pucallpa, a donde deberá ser notificado.

### 3. Hechos lesivos

En el caso concreto, son los hechos lesivos:

- a. La omisión, por parte de la DRAU de **ampliar la titulación del territorio ancestral** requerida por la comunidad nativa demandante sobre su territorio ancestral, con el propósito de lograr el reconocimiento oficial de su propiedad comunal.
- b. El **otorgamiento**, por parte de la DRAU, de **constancias de posesión** a favor de 222 colonos dentro del territorio ancestral de la comunidad nativa demandante;
- c. La **aprobación de parte de DRAU de las solicitudes de conversión a propiedad** formuladas por los 222 colonos, sobre la base de las constancias de posesión.
- d. La **inscripción**, por parte del registrador público del Registro de Predios Rurales, de **conversiones a propiedad** de certificados de posesión a favor de 222 colonos dentro del territorio ancestral de la comunidad nativa demandante;
- e. La **suscripción y ejecución** de 222 **contratos de compraventa**, entre los 222 colonos y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C., mediante los cuales se enajenó fraudulentamente la propiedad ancestral de la comunidad nativa demandante;
- f. La ejecución de **actos graves de depredación de bosques y superficies boscosas, relacionados con la plantación de monocultivos de palma aceitera**, en el área enajenada a favor de la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. Estos actos causan la degradación progresiva del medio ambiente; y

### 4. Derechos y principios fundamentales afectados

En el caso concreto, se han afectado los siguientes derechos y principios fundamentales:

- a. **Vulneración del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado**, consagrado en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7.4 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;

- b. **Vulneración del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la propiedad comunal y a la posesión de su territorio ancestral**, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
- c. **Vulneración del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la elección del propio modelo de desarrollo y al proyecto de vida colectivo**, consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad indígena Yayke Akza contra Paraguay;
- d. **Vulneración del derecho fundamental de los pueblos indígenas a los recursos naturales** que aseguren su subsistencia, consagrado en el artículo 15.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
- e. **Vulneración del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la identidad cultural**, consagrado en los artículos 2.19 y 22 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 5 del Convenio 169 de la Organización Inter-nacional del Trabajo;
- f. **Vulneración del principio de garantía de la plena vigencia de los derechos humanos**, reconocido en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado;
- g. **Incumplimiento del deber del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica**, reconocido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- h. **Incumplimiento del deber del Estado de promover el desarrollo sostenible de la Amazonía**, reconocido en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado; y
- i. **Incumplimiento del deber del Estado de protección de los sectores que sufren cualquier exclusión**, reconocido por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado.

## 5. Petitorio

De conformidad con los artículos 1 y 55 del Código Procesal Constitucional, le solicitamos lo siguiente:

1. **Declarar fundada la demanda constitucional de amparo** y, en consecuencia, **ordenar al demandado, director general de la DRAU, reconocer la ampliación de titulación solicitada por la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya**, con el propósito de que se les reconozca, de manera oficial e integral, su propiedad ancestral en los Registros Públicos;
2. Reconocer la inconstitucionalidad de las constancias de posesión y conversiones a propiedad expedidos a favor de 222 colonos, por parte de la DRAU y el Registro de Predios Rurales, declarándoselos nulos, por ser incompatibles con los derechos de los

pueblos indígenas, consagrados en la Constitución Política y normas que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

3. **Reconocer la inconstitucionalidad de 222 contratos de compraventa**, celebrados entre 222 colonos y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C., declarándoselos nulos y, por tanto, carentes de cualesquiera efectos jurídicos, por encontrarse dentro del territorio ancestral de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya;
4. **Cancelar todas las inscripciones y anotaciones hechas en el Registro de Predios Rurales de los Registros Públicos que dispongan de derechos reales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya**, especialmente, de aquellos 222 predios, cuyo titular registral actual es la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. y cuyos titulares anteriores fueron los 222 colonos referidos en la presente demanda.
5. **Ordenar al demandado, gerente general de la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C., el cese inmediato de todas su actividades que causen, directa o indirectamente, la depredación y degradación de bosques y otras superficies boscosas en el territorio de la comunidad nativa demandante**, área que fue el objeto del contrato materia de la presente demanda;
6. Ordenar a los demandados, gerente general la empresa Plantaciones de Pucallpa y director general de la DRAU, **la restauración ambiental inmediata del área depredada por acción de la empresa en el mayor grado posible**, con el propósito de revitalizar los ecosistemas que se han visto intensamente afectados por el desbosque y posterior plantación de cultivos de palma aceitera, así como para restaurar las condiciones de vida de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, y;
7. Ordenar al demandado, director general de la DRAU, en colaboración con las autoridades regionales competentes, **identificar y erradicar con celeridad las plantaciones de palma aceitera no sostenibles, cuyo cultivo ponga en riesgo la integridad ecológica de la región y el país**; en tal sentido, le pedimos ordenar al demandado, en el ámbito de sus competencias, elaborar y ejecutar políticas públicas regionales que tengan por objeto la promoción del desarrollo de actividades económicas sostenibles, alternativas al cultivo agroindustrial de palma aceitera.

## **II. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA**

La presente demanda cumple con todos los requisitos de procedencia que son exigidos por el Código Procesal Constitucional.

1. **Los hechos y el petitorio de la demanda están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados**

Tal como demostraremos, la DRAU y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. han afectado el contenido constitucional protegido de derechos y principios reconocidos en la Constitución Política, así como en normas contenidas en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que han sido suscritos por Perú, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

## **2. No existen vías procedimentales específicas para la protección de los derechos constitucionales vulnerados**

La vía constitucional es la idónea a fin de resolver la controversia en el caso concreto. De conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, «[n]o proceden los procesos constitucionales cuando [...] existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus»; en tal sentido, la vía constitucional es la idónea a fin de resolver la controversia en el caso concreto.

En efecto, la comunidad nativa afectada acude al proceso constitucional de amparo en razón de que no existen otras vías que sirvan de igual o mejor modo para la tutela de sus derechos constitucionales; es decir, no existe una vía igualmente satisfactoria que pueda tutelar sus derechos a un medio ambiente adecuado y equilibrado, a la propiedad comunal, a sus recursos naturales, a la identidad cultural, entre otros. **Asimismo, se trata de una cuestión urgentísima y cuya desatención –o atención mediocre– supone un alto riesgo de irreparabilidad en sus derechos vulnerados.**

Es importante señalar que todas las peticiones administrativas formuladas por la comunidad a la DRAU, referidas al reconocimiento de la ampliación de su territorio titulado, han sido hasta la fecha ignoradas, no habiendo recibido respuesta. Entretanto, la empresa demandada sí ha logrado con celeridad la autorización de las autoridades regionales para su instalación en la zona y, a partir de entonces, ha causado gravísimos daños a la comunidad y al medio ambiente en que habitan.

Dado los hechos ocurridos, la vía administrativa, y contencioso-administrativa, no puede ser considerada igualmente satisfactoria para la tutela efectiva de los derechos de la comunidad, puesto que no satisface las dos posibles perspectivas, objetiva y subjetiva, que el Tribunal Constitucional ha fijado mediante su desarrollo jurisprudencial vinculante<sup>1</sup> para poder considerar una vía *igualmente satisfactoria*.

Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la idoneidad de la vía idónea puede aludir a la *estructura del proceso*, atendiendo a si la regulación objetiva de los procedimientos *permite afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz* (estructura idónea), o a la *idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria*, debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso ius fundamental que se decida poner a su consideración (tutela idónea). Además, visiblemente, este análisis objetivo es independiente a si estamos ante un asunto que merece tutela urgente.

---

<sup>1</sup> STC N.º 03070-2013-AA/TC

Desde la perspectiva subjetiva, una vía ordinaria puede ser considerada idónea si el transitarla no pone en grave riesgo al derecho afectado, para lo que será necesario evaluar si su tránsito puede tornar *irreparable* la afectación alegada (es decir, urgencia como amenaza de irreparabilidad). Igualmente, la vía podrá ser considerada idónea si, pese a que existe un proceso ordinario que pueda considerarse como *vía igualmente satisfactoria*, se evidencia que es necesaria una tutela urgentísima, atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño).

La vía administrativa, así como la contencioso-administrativa, no es la vía idónea a fin de resolver la controversia en el caso concreto, toda vez que no posee la estructura idónea a fin de tutelar derechos de origen constitucional. Igualmente, no es capaz de brindar una tutela idónea a los afectados demandantes, por lo que, en el presente caso, la vía administrativa no satisface la perspectiva objetiva que requiere una vía que pueda considerarse idónea.

En efecto, esta vía no está diseñada para tutelar derechos constitucionales; por otro lado, por causa de su naturaleza, no es lo suficientemente célere. Al respecto, debe recordarse que en el caso concreto se discute la interpretación jurídica de normas jurídicas que forman parte del bloque de constitucionalidad, razones por las que la vía administrativa no puede considerarse idónea para la solución del presente caso.

Por otro lado, la vía constitucional, mediante un proceso de amparo, posee la estructura idónea y la celeridad necesaria que son requeridas por el caso concreto, en concordancia con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, que señala que «[s]on fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales».

Además, del análisis del caso concreto, debe prestarse atención a la naturaleza de las actividades económicas agroindustriales que lleva a cabo la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C., que deforestan el medio ambiente, arruinando el equilibrio biológico, destruyen hábitats, perjudican la supervivencia de la flora y fauna locales y colocan en riesgo directo la supervivencia de la comunidad nativa demandante, pues afectan los recursos naturales de los que disponen para desarrollar sus actividades cotidianas, incluyendo la alimentación.

Esto, como se explicará posteriormente, supone un riesgo por demás evidente de irreparabilidad de los derechos constitucionales cuya vulneración ha sido demandada; es decir, **el presente caso reviste gran urgencia con amenaza de irreparabilidad**, por lo que se trata de un asunto que merece una tutela urgente que permita la vigencia plena de los derechos humanos de la comunidad nativa demandante. En esta situación, el proceso de amparo es el idóneo para lograr el cese de los afectos que vulneran derechos fundamentales.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que podrá recurrirse al proceso de amparo y no a la vía procesal ordinaria «[s]i el tránsito por la vía ordinaria no acarrea el riesgo razonablemente probable que el daño producido o por producirse en la esfera subjetiva del demandante se torne irreparable» (STC Exp. N° 00906-209-AA, f.j. 9). En tal línea, la evaluación de una vía como igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado debe

hacerse en atención a la finalidad del proceso de amparo (y de todo proceso constitucional de la libertad), consistente en la protección de los derechos constitucionales reponiendo las cosas al momento anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional (artículo 1 del Código Procesal Constitucional).

En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto, mediante la RTC N° 00906-2009-AA, que las comunidades nativas son un *grupo social de especial vulnerabilidad* y, consecuentemente, «requiere[n] de una tutela urgente ante la amenaza o lesión de sus derechos constitucionales, fundamentales y colectivos. Por ello este Colegiado considera que el proceso de amparo de acuerdo a lo regulado por el artículo 200, inciso 2, de la Constitución, y el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, resulta idóneo para tal fin» (fundamento 11).

Así, la urgencia en la necesidad de intervención estatal en los hechos lesivos en casos concretos justifica cierta flexibilización en las normas que regulan la procedencia de los procesos constitucionales de amparo, a fin de lograr la protección eficaz de los derechos fundamentales y del orden constitucional. Al respecto, el Tribunal ha señalado:

*Ahora bien, aunque es cierto que a partir de la interpretación antes sustentada del artículo 5° 2 del Código Procesal Constitucional, las alegadas afectaciones de los derechos fundamentales que no requieran una tutela urgente en amparo deberán ser ventiladas en los procesos ordinarios, es cierto también que una aplicación inflexible de este criterio podría dar lugar a que, en algunos de estos casos, la protección de los derechos fundamentales devenga ineficaz. En efecto, este criterio en nada garantiza que en los casos no urgentes de afectación de los derechos fundamentales se dispense debida protección a su contenido constitucionalmente protegido. Ello podría suceder en razón de que en los procesos ordinarios seguidos ante el Poder Judicial se incurra en una indebida interpretación del contenido del referido derecho, sea porque no se protegen ámbitos que deberían considerarse como pertenecientes a él, o porque, a contrario sensu, se han protegido ámbitos que no debieron considerarse tutelados por la Constitución, o cuando el asunto verse sobre la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho que no ha merecido mayor desarrollo jurisprudencial y que, en esa medida, requiere la intervención del Tribunal Constitucional para asegurar su aplicación igualitaria y predecible por parte de la jurisdicción ordinaria (resaltado nuestro) [RTC N° 00906-2009-AA, fundamento 10].*

Así, consideramos que la vía constitucional es la idónea a fin de resolver el presente caso (y no la vía administrativa, por las razones ya expuestas) y, en consecuencia, los afectados demandantes ha cumplido con este requisito de procedencia.

### **3. La violación de los derechos constitucionales de los agraviados es reversible y reparable**

De conformidad con el principio restitutorio, contenido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales solo proceden cuando la violación de derechos es reversible. En este caso, tratándose de la ejecución de actos de depredación de bosques y formaciones boscosas por parte de la empresa demandada, las afectaciones a los derechos



fundamentales de la comunidad nativa demandante subsisten; por lo tanto, son posibles de revertir y reparar, con lo que se cumple con este requisito de procedencia.

Nº obstante, esto además importa la urgencia particular que reviste el presente caso, pues se necesita prontamente la satisfacción de algunas de las piezas que conforman nuestro petitorio para lograr la eficacia de los derechos fundamentales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, especialmente aquella referida a la remediación ambiental de la zona en donde se vienen desarrollando las actividades depredatorias.

#### **4. El plazo para presentar la demanda**

Es importante resaltar que los 222 contratos de compraventa objeto de la demanda, fueron suscritos entre colonos y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. la gran mayoría durante el año 2012. Así, a primera vista pudiera parecer que la demanda debiera declararse improcedente por **extemporánea**, dado que, según el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, el plazo para interponer la demanda de amparo a favor del restablecimiento de los derechos fundamentales del afectado prescribe a los 60 días de ocurrida la afectación. Nº obstante, la propia disposición hace las siguientes precisiones: a) El plazo prescriptorio no podrá computarse si el afectado no tuvo conocimiento del acto lesivo; y b) El plazo prescriptorio no podrá computarse si el afectado no estuvo en posibilidad de interponer la demanda.

En el presente caso, los demandantes se encuentran incursos dentro de la primera de estas precisiones, toda vez que desconocían que colonos invasores hubieron obtenido, irregularmente, derechos sobre su territorio ancestral. Así, no resulta aplicable al presente caso el plazo prescriptorio de 60 días hábiles, pues, al funcionar como castigo al afectado negligente en la protección de sus derechos fundamentales, resultaría absurdo castigarle en un caso en que este ignoraba la lesión. Como señala Castillo Córdova, «si una de las razones para prever un plazo de prescripción en la interposición de la demanda de amparo ha sido precisamente castigar al negligente, no puede hablarse de negligencia cuando el afectado ignoraba que su derecho constitucional había sido vulnerado»<sup>2</sup>.

Por otro, la comunidad nativa demandante ha solicitado la declaración de nulidad de los contratos no solo en base a su suscripción, **sino también a su ejecución**; es decir, los efectos de la suscripción de los 222 contratos de compraventa sobre territorio de pueblos indígenas no solo es inconstitucional en sí misma, sino también en sus efectos a partir de entonces. Así, **la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad nativa demandante es de naturaleza continuada y permanente**, subsistiendo hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, razón por la que resulta indispensable que el juez constitucional se pronuncie respecto a estos hechos, restaurando los derechos de los demandantes hacia el estado anterior a su vulneración.

---

<sup>2</sup> Castillo Córdova, Luis (2006). Comentarios al Código Procesal Constitucional, tomo II. Lima: Palestra Editores, p. 886.

Asimismo, es oportuno señalar que, inclusive si no se tuviese certeza sobre la posibilidad o no del afectado de entrar en conocimiento del acto lesivo, debe privilegiarse la continuación del proceso de amparo, por ser más favorable a la protección de los derechos de la persona, en virtud del principio *pro actione*. Con respecto a este principio, el Tribunal Constitucional ha señalado que «se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo»<sup>3</sup>.

Este principio ha sido recogido por nuestra legislación en el cuarto párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional de la siguiente manera: *Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.*

De igual modo, sirve para resolver esta cuestión el principio *pro homine*, en tanto representa un criterio hermenéutico importantísimo para la interpretación de disposiciones normativas en un sentido favorable a la protección de la persona. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que este consiste en la interpretación extensiva de los derechos humanos, y restrictiva de sus limitaciones<sup>4</sup>. Así, en el presente caso, deben interpretarse las dudas surgidas de las disposiciones sobre la procedencia del amparo en aquel sentido que favorezca más la protección de la persona y sus derechos; en el presente caso, a través de la declaración de procedencia de la presente demanda.

En otro extremo, la demanda se sostiene en la ejecución de actos de depredación en bosques y otras formaciones boscosas dentro del territorio ancestral de la comunidad nativa y sus áreas colindantes, que continúan hasta la fecha, razón por la que se encuentra dentro del plazo establecido para la postulación de la demanda de amparo.

En este sentido, el artículo 44.3 del Código Procesal Constitucional precisa que «[s]i los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución». Al no haber cesado la afectación de los derechos fundamentales de la comunidad nativa demandante, la vulneración de sus derechos es actual y, por tanto, la demanda deberá declararse procedente.

Por último, la demanda también hace mención a la omisión de titular territorio indígena, a partir de las peticiones formuladas reiteradamente por la comunidad nativa demandante, por lo que nos encontramos frente a un acto lesivo de **naturaleza omisiva**, pues está referido a la inacción del Estado en circunstancias determinadas que resultan vulneradoras de derechos fundamentales.

A este respecto, el artículo 44.5 del Código Procesal Constitucional ha establecido que «[s]i el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista», por esta razón, encontrándonos frente a una conducta omisiva, la demanda también deberá declararse procedente en este extremo. En opinión de Castillo Córdova, a propósito de la legislación nacional, en estos casos «la interpretación que se sugiere es mucho más coherente con la

---

<sup>3</sup> STC N° 1049-2003-AA/TC, fundamento 4

<sup>4</sup> Corte IDH. Opinión consultiva N° OC-5/85, párr. 12

definición constitucional de la garantía constitucional de amparo y no perjudica en lo más mínimo la defensa –y consiguiente vigencia– efectiva de los derechos constitucionales»<sup>5</sup>.

## **5. El juez competente**

Presentamos esta demanda ante el Juzgado Mixto de Coronel Portillo, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que usted dirige, pues de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, es competente para conocer del proceso de amparo el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o, en su defecto, donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante. Así, tanto el domicilio de los demandantes como el lugar de afectación de nuestros derechos residen en Coronel Portillo, razón por la que le solicitamos tomar conocimiento de nuestra demanda y, oportunamente, declararla fundada y ordenar a las autoridades emplazadas la adopción de las medidas urgentes indicadas en nuestro petitorio.

## **III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA**

### **A. Antecedentes del hecho lesivo**

#### **1. Información básica sobre la comunidad de Santa Clara de Uchunya**

Con fecha 27 de agosto de 1975, mediante Resolución N° 145-75-OAE-ORAMS-V el Estado peruano reconoció oficialmente a la Comunidad de Santa Clara de Uchunya como pueblo indígena. (Anexo N° 2) y cuenta con 218.52. Con fecha 5 de setiembre de 1986, se aprobó el procedimiento de titulación del territorio de la Comunidad de Santa Clara, a través de la Resolución Ministerial N° 733-86/AG/DR/XIII-UC. (Anexo N° 3). Al momento de su titulación contó con 40 familias. Y según el censo población del 2012, se reporta la presencia de 150 familias.

#### **2. Está acreditada la presencia ancestral de los shipibos en el territorio donde Plantaciones de Pucallpa SAC viene desarrollando sus actividades**

Debemos comenzar por señalar que la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya forma parte del listado de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura<sup>6</sup> (Anexo N° 4), cuya metodología para la identificación de pueblos indígenas se sustenta en lo que establece el Convenio 1069 de la OIT.

Diferentes estudios de expertos han demostrado y acreditado que el territorio donde se encuentra las instalaciones de Plantaciones de Pucallpa SA y zonas aledañas que vienen siendo reclamadas por la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, son territorio ancestral del pueblo indígena shipibo. En definitiva, se acredita la ocupación histórica de los shipibo en el río Aguaytia:

---

<sup>5</sup> Castillo Córdova, op. cit., 890

<sup>6</sup> Buscar en: <http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-comunidades-nativas>.

*Los Shipibo-Conibo forman parte del conjunto lingüístico pano, el cual se extiende a ambos lados de las fronteras entre Perú, Brasil y Bolivia. Si bien este conjunto es bastante homogéneo en términos territoriales y culturales, el mismo se encuentra fragmentado en una miríada de grupos étnicos. Hoy en día existen 42 de ellos, los mismos que representan alrededor de unos 40,000 habitantes (Erikson et al. 1994). Entre los grupos pano, los Shipibo-Conibo son los únicos que tienen una población significativa, la cual representa más de la mitad de la del conjunto<sup>7</sup>.*

**Mapa 1**  
**Territorio shipibo-conibo en el valle del Ucayali**



<sup>7</sup> Fernando Santos y Frederica Barclay editores, Guía Etnográfica de la Alta Amazonía, Volumen III, Smithsonian Tropical Research Institute y Ediciones Abya Yala, 1998, pág. 279

Más adelante se precisa que:

*En la región de selva baja, entre los grados 6 y 10 de latitud sur, se encuentra el territorio shipibo-conibo. Situado a 150 metros sobre el nivel del mar, el mismo se halla conformado por el valle del río Ucayali y algunos de sus afluentes, tales como el Cushabatay, el Pisqui, el Aguaytía y el Pachitea en la margen izquierda; y el Maquía, el Cashiboya, el Roabillo, el Callería, el Tamaya y el Sheshea en la derecha. A orillas de estos ríos se hallan dispersas más de un centenar de comunidades shipibo y conibo<sup>8</sup>.*

*El río Ucayali, que nace de la confluencia del Urubamba y el Apurímac, comprende según Faura (1962: 285) dos zonas: el alto Ucayali, que se extiende desde la confluencia hasta la desembocadura del Pachitea, y el bajo Ucayali, al norte de este límite hasta llegar al río Maraón, con el que forma el Amazonas. Varios autores (Chirif et al.1977; Cárdenas Timoteo 1989) afinan esta distinción introduciendo una zona intermedia: el medio Ucayali, la cual comprendería el área desde la desembocadura del Pachitea hasta Contamana. El importante desarrollo en la década de 1960 de la ciudad de Pucallpa, ubicada en el corazón de esta última zona, justifica ciertamente esta subdivisión. En efecto, ha sido allí donde las comunidades shipibo-conibo han resultado más afectadas por los embates de la modernidad<sup>9</sup>. Ver el siguiente mapa<sup>10</sup>.*

### **3. Mapa antiguo acredita indiscutiblemente presencia de shipibos en zona en disputa**

Como puede verse en la leyenda del mapa que se adjunta como anexo (Anexo N° 5), se trata del *Plan del Curso del Río Huallaga y Ucayali y de la Pampa del Sacramento*, levantado por el P. Fray Manuel Sobreviela, guardián del Colegio de Ocopa del año 1799, el mismo que ha sido corregido y añadido en 1830, según las noticias, apuntes y diarios más nuevos por Amadeo Chaumette des Fosses, cónsul general de Francia en el Perú y, según señala el mapa, individuo de varias academias y sociedades literarias, comendador y caballero de varias órdenes.

Este mapa, que data de fines del siglo XVIII, ya reconoce la presencia de los shipibos en la región geográfica materia de la presente demanda. Cabe señalar que su presencia es mucho más antigua, anterior a la propia colonización española; no obstante, resulta bastante gráfica la incorporación oficial de este pueblo indígena en la vieja cartografía nacional. N° habiendo dudas de la presencia de los shipibos en el curso del río Aguaytía, debe considerarse dicha extensión geográfica como parte de su territorio ancestral.

### **4. La comunidad de Santa Clara de Uchunya ha pedido se titule su territorio**

Con fecha 25 de setiembre de 2015, diferentes autoridades de la Comunidad Nativa de Santa de Uchunya solicitaron al GRU la ampliación de su territorio titulado, explicando la situación en que se encontraba su comunidad; no obstante, dicha petición no fue atendida (Anexo N° 6).

---

<sup>8</sup> Fernando Santos y Frederica Barclay editores, *Guía Etnográfica de la Alta Amazonía*, Volumen III, Smithsonian Tropical Research Institute y Ediciones Abya Yala, 1998, pág.282..

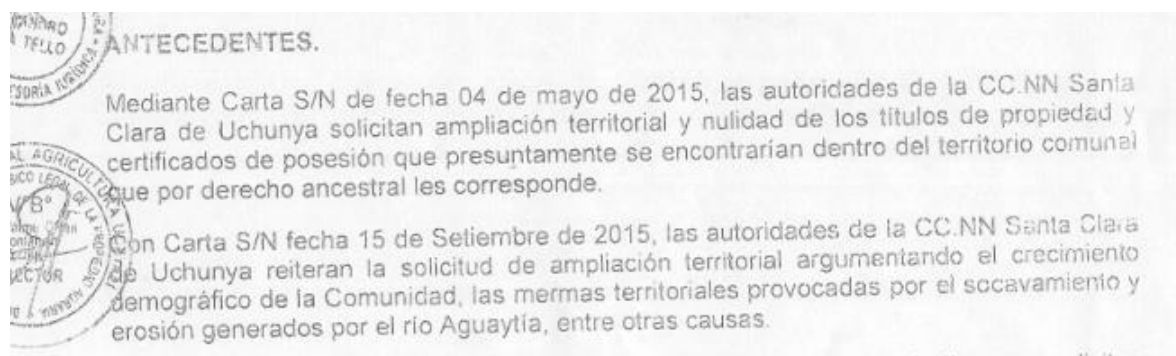
<sup>9</sup> *Ibídem*.

<sup>10</sup> *Ibídem*, pág. 283.

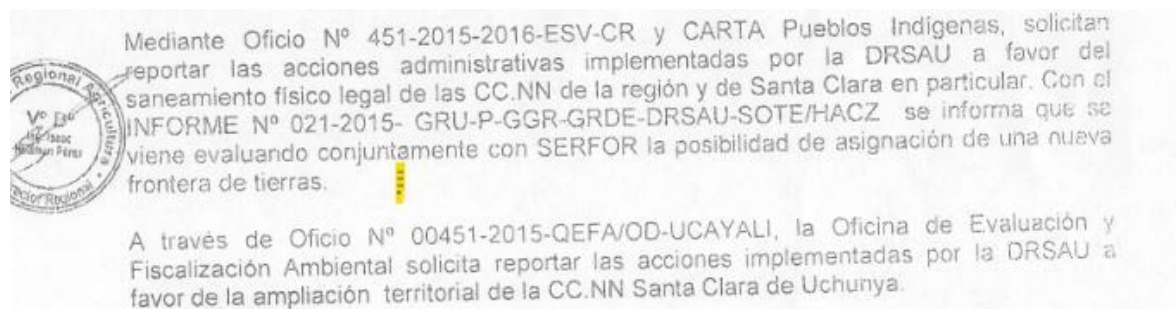
## 5. Gobierno Regional Ucayali ha reconocido derecho de la comunidad de Santa Clara de Uchunya sobre sus territorios ancestrales

Se trata de la Resolución Directoral Regional N° 591-2015-GRU-DRA (Anexo N° 7). En esta resolución se ordena iniciar el procedimiento de reconocimiento y titulación de la ampliación territorial de la Comunidad Nativa Santa Clara de parte de su territorio ancestral. Asimismo, adviértase que la GRU resuelve iniciar proceso para titular un terreno de 757 hectáreas para la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Sin embargo, también reconoce que se otorga 496 hectáreas a pobladores del centro poblado, a los cuales sabemos todos se les acaba de entregar constancias de posesión.

Asimismo, adviértase que resuelve iniciar proceso para titular un terreno de 757 hectáreas para la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Varias son las cosas que quedan claras en esta resolución. Primero, que la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya ha solicitado se amplíe su territorio. Es decir, el Estado no puede negar que había una petición de un pueblo indígena que reclama propiedad sobre sus territorios ancestrales. N° puede alegar que desconocía esta pretensión. A continuación algunos párrafos de dicha resolución que explican lo que decimos:




La consecuencia práctica es que el GRU debía adoptar medidas concretas para evaluar si estaban ante la posesión ancestral, y ante la posible titulación en caso que esta quede acreditada.



Esta misma resolución da cuenta que atendiendo este pedido, el GRU procedió a realizar acciones de campo, incluso con las autoridades de la comunidad nativa Santa Clara de

Uchunya. Esto revela que el pedido de titulación no es una exigencia irrazonable o descabellada, sino que estamos ante una exigencia legítima y razonable.



Con fechas 27/10/15 y 03/11/15, la DRS AU promueve dos (02) inspecciones oculares a la CC.NN Santa Clara de Uchunya y al escenario solicitado para la ampliación comunal con la participación personal del Director Regional de Agricultura. Las jornadas se desarrollaron, además, en compañía de los dirigentes de la CC.NN y el Consejero miembro de la comisión de CC.NN y Campesinas (Sr. Javier Bonilla Pomachari). Las inspecciones oculares generaron, elementos de evaluación de campo y permitieron actualizar y corregir nuestra base catastral.

Sin embargo, llama la atención el razonamiento del GRU de la resolución objeto de comentario. En él se precisa que se intenta impulsar una política de distribución de las tierras de libre disponibilidad del Estado. El criterio utilizado es:

*La DRS AU viene impulsando el servicio de saneamiento de los territorios de libre disponibilidad, asumiendo el compromiso de democratizar la distribución de la tierra entre los actores con mayores limitaciones de tierras, pretendiendo contribuir de esta manera al impulso del desarrollo humano rural, con los criterios de equidad y sostenibilidad económica/socialmente/ambiental, así como el desarrollo de cultivos que impulse el desarrollo económico y agroindustrial de la Región.*

Sin embargo, llama la atención la total ausencia de criterios jurídicos referidos a los pueblos indígenas, más aún cuando estamos ante territorios reclamados como suyos por comunidades nativas shipibas. En concreto sorprende en demasía la ausencia de la regla establecida en el artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En concreto se cometen dos graves errores, primero que las comunidades nativas son propietarias de las tierras que tradicionalmente han ocupado, en consecuencia, no todo terreno sin título será del Estado, pudiendo ser de comunidades nativas en su condición de pueblos indígenas. En segundo lugar, si esos terrenos no son del Estado sino de las comunidades nativas, el Estado, y en concreto el GRU no puede disponer de territorios que son ajenas sino solo de los que es propietario. A continuación el párrafo materia de comentario:

Las jornadas de inspección ocular nos permitió constatar que el escenario sujeto a evaluación se caracteriza por la presencia de actores aledaños que ejercen presión y reclaman tener derechos a la adjudicación de tierras: parceleros del Centro Poblado Nueva Esperanza y CC.NN Santa Clara de Uchunya, verificándose también que la empresa agroindustrial PLANTACIONES DE PUCALLPA es propietaria de predios titulados. En este marco la DRS AU viene impulsando el servicio de "saneamiento" de los territorios de libre disponibilidad, asumiendo el compromiso de democratizar la distribución de la tierra entre los actores con mayores limitaciones de tierras, pretendiendo contribuir de esta manera al impulso del Desarrollo Humano Rural, con criterios de equidad y sostenibilidad económica/ social/ambiental, así como el desarrollo de cultivos que impulsen el desarrollo económico y agroindustrial de la Región.



Insistimos en un punto N° se trata de territorios de libre disponibilidad de los pueblos indígenas como dice la resolución, sino de territorios ancestrales, propiedad de las comunidades ahí asentadas desde tiempo inmemoriales.

Las inspecciones oculares y el análisis de los antecedentes registrales, de poseedores en nuestra base catastral y de la capacidad de uso mayor (ZEE regional) nos permite determinar que el área está configurada por dos predios de libre disponibilidad de 496 Hás 3,207.76 m<sup>2</sup> (Lote A) y 757 Hás 2,608.93 m<sup>2</sup> (Lote B), ambos de vocación agropecuaria según el sistema de clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, cuyas colindancias se detallan en los planos y memorias descriptivas adjuntas (Anexo 01).

También queda en evidencia, que a pesar que la DGU es consciente el rol del Gobierno Regional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, tal como se reconoce en el siguiente párrafo, queda claro la falta de medidas concretas de protección del derecho de propiedad de la comunidad de Santa Clara, y en tal sentido, la GRU falta a su obligación de debida diligencia. Es decir, reconocen que es labor del Estado resolver controversias y salvaguardar derechos territoriales de los pueblos indígenas pero luego no hacen nada concreto.

El Estado tiene la obligación de resolver las controversias suscitadas entre los administrados que reclaman derechos posesorios adquiridos por el transcurso del tiempo, salvaguardando los derechos a la autodeterminación y la existencia cultural de los Pueblos Indígenas y, al mismo tiempo, garantizando la optimización de los sistemas de producción.

Dirección Regional de Agricultura  
Documento Autenticado

También queda claro que a pesar de los pedidos de ampliación por parte de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, el Gobierno Regional sigue entregando territorios ancestrales de la comunidad nativa a parceleros particulares de forma inconstitucional. Esto también revela ausencia de criterios jurídicos claros consonantes con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en relación con la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales

Queda claro que existe una solicitud al GRU de ampliación del territorio de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Asimismo, el GRU no la niega, con lo cual reconoce la legitimidad de esta exigencia. Asimismo, adviértase que resuelve iniciar proceso para titular un terreno de 757 hectáreas para la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Sin embargo, también reconoce que se otorga 496 hectáreas a pobladores del centro poblado, a los cuales sabemos todos se les acaba de entregar constancias de posesión. N° obstante, en esta resolución se recomienda continuar con la evaluación a favor de la ampliación territorial de la comunidad.

Consideramos este documento de mucha importancia. En él queda en evidencia una falta de debida diligencia del GRU para salvaguardar los territorios indígenas y falta de capacidad para respetar derechos territoriales de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, una vez que recibieron el pedido de esta, pues continúan entregando terrenos a terceros que son territorios ancestrales de la comunidad de Santa Clara. También demuestra que hay una falta de criterios para respetar derechos territoriales indígenas, toda vez que hablan de la necesidad de



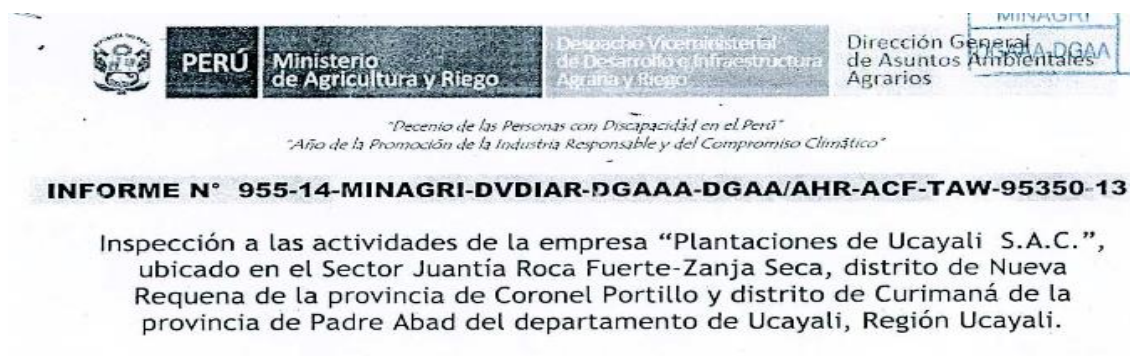
promover políticas sobre seguridad alimentaria en la zona como justificación para seguir con la parcelación, mientras al mismo tanto hay un reconocimiento del territorio indígena. En otras palabras, están tratando a los derechos a la tierra de los colonos como si fuera igual al derecho al territorio indígena.

#### **6. Lo realizado por Plantaciones de Pucallpa fue antes realizado por las empresas Plantaciones de Ucayali y Cacao Norte, ambos propiedad de grupo Melka**

Un antecedente importante para evaluar a la Compañía Plantaciones de Pucallpa SAC es analizando el funcionamiento de la Empresa Plantaciones Ucayali SAC, ambas de un Grupo comercial conocido localmente como el Grupo Melka. Plantaciones de Pucallpa es una de las empresas registradas en el Perú con conexiones a una red corporativa compleja, aparentemente controlada por Dennis Melka, un empresario de EEUU, que se conoce colectivamente en el Perú como el Grupo Melka. El Señor Melka fundó la agroempresa Asian Plantations en Malasia. Empresas del Grupo Melka en el Perú, entre ellas Cacao del Perú N°rte SAC y Plantaciones de Ucayali SAC y sus empresas matrices United Cacao Ltd y United Oils Ltd, han provocado denuncias similares de deforestación ilegal y conflictos territoriales<sup>11</sup>.

##### **a. El primer pronunciamiento del MINAGRI sobre la ilegalidad de las actividad de Plantaciones Ucayali S.A.C. : El informe 955-2014- MINAGRI**

Plantaciones de Ucayali del Grupo Melka opera al margen del ordenamiento jurídico, pues realiza sus actividades sin antes haber obtenido los permisos necesarios. Para entender la forma como el Grupo Melka opera es importante revisar el Informe N° 955-14-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA/AHR-ACF-TAW-95350-13 (Anexo N° 8), emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, del Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego.



<sup>11</sup> Ver <http://www.servindi.org/actualidad-noticias/04/03/2016/deforestacion-no-cesa-incluyen-dennis-melka-en-investigaciones>

## VI. CONCLUSIONES

- 6.1 El Gobierno Regional ha adjudicado el predio adquirido por la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, sin contar con un estudio de suelos aprobado por la DGAAA, que es la parte interpretativa de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.
- 6.2 El estudio denominado "Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, Sector Juntia-Rocafuerte" no fue gestionado ante la DGAAA para su evaluación y aprobación, en su condición de autoridad competente.
- 6.3 De acuerdo al estudio mencionado en el ítem 6.2, las 4,759.77 hectáreas transferidas a la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., tienen la clasificación de tierras de aptitud agropecuaria.
- 6.4 La empresa no solicitó autorización de cambio de uso. *minuta*
- 6.5 El Gobierno Regional aprobó un proyecto de inversión de palma aceitera sobre la totalidad superficial del predio vendido, sin exigir la reserva del 30% de bosque, ni la aprobación de un estudio de impacto ambiental ante la DGAAA y sin dejar establecido que los cultivos permanentes, no son permitidos en tierras de aptitud natural para pastos.
- 6.6 La escritura pública se celebró el 03 de diciembre de 2012, por lo que la actividad agrícola agroindustrial es reciente y no una actividad en curso.
- 6.7 Existe un comercio libre de certificados de posesión y un incentivo a su proliferación ante la ausencia de su prohibición.
- 6.8 Se ha constatado presencia de pequeñas áreas dispersas con cultivos permanentes y de pastos que indicarían presencia de anteriores poseedores.
- 6.9 En el área del predio de Plantaciones de Ucayali SAC, no se ha constatado actividades de tumba, rozo y quema y las que se observaron eran parcelas de poseedores externos al predio de la empresa.
- 6.10 No existe una norma que desarrolle un Flujo de Procesos (mapeo de procesos) para establecer el orden a seguir cuando la administración pública adjudica tierras en favor de particulares, lo que no permite claridad en la determinación de procedimientos.
- 6.11 Existen varios modos de adquirir la propiedad en la Amazonia y generan la necesidad de contar con un flujo de procesos para cada uno de ellos.

## VII. RECOMENDACIÓN

Como puede advertirse de acuerdo al MINAGRI, Plantaciones Ucayali SAC está actuando sin los permisos legales correspondientes, pues se carece del estudio de suelos, y este no ha sido gestionado ante la DGAAA. Es más, nunca solicitó el cambio de uso. Finalmente MINAGRI denuncia que hay un tráfico de tierras a través de las constancias de posesión, cuando sostiene que hay *"un comercio libre de certificados de posesión y un incentivo a su proliferación ante la ausencia de prohibición"*.

### **b. Informe N° 2017-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA/REA-95350-13 da cuenta del impacto en el medio ambiente de Plantaciones Ucayali SAC**

Asimismo, el MINAGRI acredita el impacto en el medio ambiente (Anexo N° 9).





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoDespacho Viceministerial  
de Desarrollo e Infraestructura  
Agraria y RiegoDirección General  
de Asuntos Ambientales  
Agrarios

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú  
Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático"

**INFORME N° 1204 -2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA/REA-95350-13**

**PARA** : Katherine Riquero A.  
Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios

**ASUNTO** : Informe de Instrucción Preliminar sobre **Supervisión Especial a la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C.**

**FECHA** : 05 de diciembre de 2014

**I. ANTECEDENTES**

Las conclusiones del informe son contundentes:

**VIII. CONCLUSIONES**

- 8.1. La Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., se encuentra realizando actividades agrícolas para la producción de palma aceitera, en el predio denominado Fundo Zanja Seca, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, colindante con el distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente, transgrediendo lo establecido en el artículo 3° de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, que señala que "no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicio ni comercio (...) y ninguna autoridad nacional, sectorial regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente", concordante con lo señalado en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 019-2012-AG.
- 8.2. La Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. viene generando impactos ambientales negativos, producto de las actividades de desbosque para la instalación del cultivo de palma aceitera en campo definitivo, como el impacto a la cobertura vegetal debido al desbroce y limpieza de los terrenos (eliminación de cobertura).
- 8.3. Producto del análisis multitenporal de imágenes satelitales se tiene información en relación al porcentaje de desbosque respecto del área total del Fundo Zanja Seca de la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. (4 759.77 ha), evidenciándose que para la instalación de cultivo de palma aceitera a campo definitivo comenzaron el desbosque con intensidad a fines del mes de julio de 2012, teniendo al 22 de agosto de 2014 un desbosque de 4 593 hectáreas aproximadamente, que representa el 96.50% del área total.
- 8.4. Ante la ausencia del estudio de suelo que sustente la Clasificación de Tierra por su Capacidad de Uso Mayor, existe la probabilidad de que la Empresa Plantaciones Ucayali S.A.C se encuentre realizando actividades agrícolas en zonas de protección y/o forestales.

La situación descrita en el párrafo precedente, podría generar que como consecuencia, del desbosque para la instalación de monocultivos, estaría afectando al patrimonio forestal de la nación, cuyos impactos ambientales son: degradación de erosión de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats e impacto en la población, costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque como el secuestro de carbono, contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio climático.

Como puede advertirse, Plantaciones Ucayali no cuenta con certificación ambiental. Además el propio Ministerio reconoce que esta empresa está generando impactos en el medio ambiente, como consecuencia del desbosque para plantar palma aceitera. Se cuenta de la deforestación de grandes extensiones de territorio. De igual manera no hay un estudio de suelo que sustente la clasificación de la tierra. La conclusión del MINAGRI es que se está afectando al recurso forestal como consecuencia de la degradación y erosión de la tierra. Pero el Ministerio de Agricultura va más allá. En efecto, el Ministerio de Agricultura señala en este informe N° 1207-MINAGRI señala los siguientes impactos negativos:

### **6.3. Respetos a los Impactos Negativos que implica la instalación del cultivo de palma aceitera**

La instalación de cultivo de palma aceitera en gran intensidad y extensión vienen generando impactos negativos significativos al ambiente, debido a que estos se vienen instalando en campo definitivo, sin ningún estudio de suelo que sustente que su capacidad de uso mayor es para tal fin; asimismo, sin contar con criterios de sostenibilidad y estándares socioambientales, permitiendo el desbosque y trayendo como consecuencia el cambio de uso de tierras, instalación de monocultivos, cuyos impactos ambientales son: la deforestación, la degradación de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, contaminación de suelos y aguas por usos de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats e impacto en la población y en los recursos hidrobiológicos, trayendo consigo problemas sociales ambientales.

Asimismo, el mantenimiento del cultivo de palma aceitera en grandes áreas requiere de prácticas agronómicas intensivas (labranza, abono, poda, cosecha, fumigación, uso de agroquímicos), control de las condiciones ambientales (agua, luz, nutrientes, etc.) para lo cual requiere de la intervención del hombre; generando impactos negativos significativos al ambiente como son: aire, suelo y agua.

Además de ello, genera los siguientes impactos ambientales como son:

- Contribuye al aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir de la pérdida del carbono almacenado en la biomasa, por encima y por debajo del suelo, cuando se elimina la cobertura boscosa.

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú  
Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático"

- El establecimiento de cultivos de palma aceitera en áreas donde se reemplaza el bosque contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio climático.
- Costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque, como el secuestro de carbono.
- Los cultivos de palma aceitera son pobres substitutas a los sistemas de bosques tropicales nativos.
- Afectan la biodiversidad de hábitats adyacentes, debido a la fragmentación.

Ante estas evidencias, la autoridad recomienda adoptar medidas preventivas para evitar la degradación del territorio.



## IX. RECOMENDACIONES

De cumplimiento de carácter obligatorio.

Habiéndose detectado que la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. no cuenta con la correspondiente Certificación Ambiental del Instrumento de Gestión Ambiental, aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios a la fecha de emisión del presente informe y habiéndose evidenciado, la alta probabilidad que se produzca un impacto significativo de degradación del recurso suelo, debido al desarrollo de operaciones de la Empresa en el predio - al haberse producido el desbosque de una superficie aproximada de 4 593.00 hectáreas correspondiente al 96.50% del total del predio-, y teniendo en consideración adicionalmente que no existe una Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor aprobada por la autoridad competente que determine que las tierras en donde se encuentra operando la Empresa en cuestión tienen aptitud agrícola, resulta necesario la disposición de medidas preventivas, a fin de evitar que la degradación del suelo se siga incrementando.

Es el propio Ministerio de Agricultura el que reconoce el grave impacto en el medio ambiente, y recomienda medidas preventivas.

### c. Resolución Directoral N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA, que suspende actividades de Plantaciones Ucayali

En el marco del seguimiento de las actividades de la empresa Plantaciones Ucayali SAC, el 9 de Diciembre 2014 el MINAGRI ordenó la suspensión de las actividades de esta empresa. (Anexo N° 10)

## VIII. CONCLUSIONES

- 8.1. La Empresa PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C., se encuentra realizando actividades agrícolas para la producción de palma aceitera, en el predio denominado Fundo Zanja Seca, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, colindante con el distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente, transgrediendo lo establecido en el artículo 3° de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, que señala que "no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicio ni comercio (...) y ninguna autoridad nacional, sectorial regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente", concordante con lo señalado en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 019-2012-AG.
- 8.2. La Empresa PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C. viene generando impactos ambientales negativos, producto de las actividades de desbosque para la instalación del cultivo de palma aceitera en campo definitivo, como el impacto a la cobertura vegetal debido al desbroce y limpieza de los terrenos (eliminación de cobertura).
- 8.3. Producto del análisis multitemporal de imágenes satelitales se tiene información en relación al porcentaje de desbosque respecto del área total del Fundo Zanja Seca de la Empresa PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C. (4 759.77 ha), evidenciándose que para la instalación de cultivo de palma aceitera a campo definitivo comenzaron el desbosque con intensidad a fines del mes de julio de 2012, teniendo al 22 de agosto de 2014 un desbosque de 4 593 hectáreas aproximadamente, que representa el 96.50% del área total.
- 8.4. Ante la ausencia del estudio de suelo que sustente la Clasificación de Tierra por su Capacidad de Uso Mayor, existe la probabilidad de que la Empresa PLANTACIONES UCAYALI S.A.C. se encuentre realizando actividades agrícolas en zonas de protección y/o forestales.

La situación descrita en el párrafo precedente, podría generar que como consecuencia, del desbosque para la instalación de monocultivos, estaría afectando al patrimonio forestal de la nación, cuyos impactos ambientales son: degradación de erosión de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats e impacto en la población, costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque como el secuestro de carbono, contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio climático".



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Ordenar, como medida preventiva, a la empresa **PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C.** la paralización de sus actividades agrícolas, que se vienen desarrollando en el predio denominado Fundo Zanja Seca, ubicado en el Fundo Zanja Seca, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo y colindante con el distrito de Curimaná de la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, a 12 kilómetros de la carretera de ingreso al caserío Los Ángeles, en tanto no presente a esta Dirección General la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, correspondiente a la zona del citado fundo.

**Artículo 2°.-** Ordenar como mandato de carácter particular que la empresa **PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C.**, en el plazo de hasta noventa (90) días hábiles, computados a partir de la notificación de la presente Resolución, remita a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Para tal efecto, dentro de los primeros cinco (5) días del plazo otorgado, la empresa deberá presentar el respectivo Cronograma de Trabajo que especifique cuáles serán las acciones que adoptarán para dar cumplimiento al mandato dispuesto en el presente artículo.

**Artículo 3°.-** Notificar a la empresa **PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C.** la presente Resolución a efectos que proceda a dar cumplimiento inmediato y estricto de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 precedentes.

**d. La Resolución Directoral N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA ordena suspender las actividades de la Empresa Cacao del Norte**

Al igual que ocurrió en el caso de Plantaciones Ucayali SAC tenemos el Caso de la Empresa Cacao Norte SAC. (Anexo N° 11). Adviértase los graves impactos al medio ambiente que esta empresa ha generado como consecuencia del cultivo de cacao.

**6.3 Respecto a los Impactos Negativos que implica la instalación del cultivo de cacao**

*La instalación de cultivo de cacao en gran intensidad y extensión vienen generando impactos negativos significativos al ambiente, debido a que estos se vienen instalando en campo definitivo, sin ningún estudio de suelo que sustente que su capacidad de uso mayor es para tal fin; asimismo, sin contar con criterios de sostenibilidad y estándares socioambientales, permitiendo el desbosque, cuyos impactos ambientales son: la deforestación, la degradación de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, contaminación de suelos y aguas por usos de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats e impacto en la población y en los recursos hidrobiológicos, trayendo consigo problemas sociales ambientales.*

*Asimismo, el mantenimiento del cultivo de cacao en grandes áreas requiere de prácticas agronómicas intensivas (labranza, abono, poda, cosecha, fumigación, uso de agroquímicos), control de las condiciones ambientales (agua, luz, nutrientes, etc.) para lo cual requiere de la intervención del hombre; generando impactos negativos significativos al ambiente como son: aire, suelo y agua.*

*Además de ello, genera los siguientes impactos ambientales como son:*

- Contribuye al aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir de la pérdida del carbono almacenado en la biomasa, por encima y por debajo del suelo, cuando se elimina la cobertura boscosa.
- El establecimiento de cultivos de cacao en áreas donde se reemplaza el bosque contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio climático.
- Costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque, como el secuestro de carbono.
- Los cultivos de cacao son pobres substitutas a los sistemas de bosques tropicales nativos.
- Afectan la biodiversidad de hábitats adyacentes, debido a la fragmentación.

MINAGRI también denuncia que esta empresa carece de certificación ambiental.

10002

## VIII. CONCLUSIONES

8.1 La Empresa CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C., se encuentra realizando actividades agrícolas para la producción de plantas de cacao en el predio denominado Fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito Fernando Lores, provincia de Maynas, departamento de Loreto, sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente, transgrediendo lo establecido en el artículo 3° de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, que señala que "no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicio ni comercio (...) y ninguna autoridad nacional, sectorial regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente", concordante con lo señalado en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 019-2012-AG.

8.2 La Empresa CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C. viene generando impactos ambientales negativos, producto de las actividades de desbosque para la instalación del cultivo de

cacao en campo definitivo, como son: (i) impacto a la cobertura vegetal debido al desbroce y limpieza de los terrenos (eliminación de cobertura), (ii) inadecuada disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, (iii) impactos negativos al suelo por la remoción de tierras, (iv) erosión de suelo por falta de cobertura vegetal producto de la escorrentía, y (v) impacto al suelo por compactación producto del desplazamiento de maquinarias pesadas; tal como se evidencia en el panel fotográfico.

8.3 Producto del análisis multitemporal de imágenes satelitales se tiene información en relación al porcentaje de desbosque respecto del área total del Fundo Tamshiyacu de la Empresa CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C (3 097.41 ha), evidenciándose que para la instalación de cultivo de cacao a campo definitivo comenzaron el desbosque con intensidad a fines del año 2012, teniendo al 31 de agosto de 2014 un desbosque de 1949.36 hectáreas aproximadamente, que representa el 63% del área total.

8.4 Ante la ausencia del estudio de suelo que sustente la Clasificación de Tierra por su capacidad de uso mayor, existe la probabilidad de que la Empresa CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C se encuentre realizando actividades agrícolas en zonas de protección y/o forestales.

La situación descrita en el párrafo precedente, podría generar que como consecuencia, del desbosque para la instalación de monocultivos, estaría afectando al patrimonio forestal de la nación, cuyos impactos ambientales son: degradación de erosión de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats e impacto en la población, costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque como el secuestro de carbono, contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio climático".

Ante todas estas evidencias, MINAGRI ordena también la suspensión de las actividades de esta empresa del grupo Melka.





**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Ordenar, como medida preventiva, a la empresa **CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C.** la paralización de sus actividades agrícolas, que se vienen desarrollando en el predio denominado Fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito Fernando Lores, provincia de Maynas, departamento de Loreto, a la altura del kilómetro 11 de la carretera denominada Tamshiyacu-Mirín, en tanto no presente a esta Dirección General la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, correspondiente a la zona del citado fundo.

**Artículo 2°.-** Ordenar como mandato de carácter particular que la empresa **CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C.**, en el plazo de hasta noventa (90) días hábiles, computados a partir de la notificación de la presente Resolución, remita a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Para tal efecto, dentro de los primeros cinco (5) días del plazo otorgado, la empresa deberá presentar el respectivo Cronograma de Trabajo que especifique cuáles serán las acciones que adoptarán para dar cumplimiento al mandato dispuesto en el presente artículo.

**Artículo 3°.-** Notificar a la empresa **CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C.** la presente Resolución a efectos que proceda a dar cumplimiento inmediato y estricto de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 precedentes.



**Regístrese y comuníquese**



**Katherine Riquero Antúnez**  
Directora General

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios  
Ministerio de Agricultura y Riego

**e. SERFOR denuncia a la opinión pública de los actos de depredación de bosques de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. en el Caso Tamshiyacu**

Producto de la actividad depredatoria ejercida por la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. y dada la comunicación emitida por la empresa United Cacao Limited SEZC, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) expresó claramente su posición a favor de la protección del medio ambiente. La entidad estatal denunció que la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. no cuenta con certificación ambiental aprobada por la Dirección General de Asuntos Ambientales, ni con un Plan de Manejo Ambiental (PAMA) o cualquier otro tipo de instrumento de gestión ambiental (Anexo N° 19).

De forma similar, SERFOR fue enfático en señalar que entre los años 2012 y 2013, la empresa causó la disminución de la cobertura boscosa, que pasó de 63.16 hectáreas a 1,963.91 hectáreas. Es decir, áreas extensas de bosques primarios destruidos por la actividad empresarial que atenta contra el orden constitucional del Estado.



**f. Mecanismo de certificación internacional de sostenibilidad de las empresas de Palma aceitera al nivel mundial ordena la suspensión de las actividades de Plantaciones de Pucallpa SAC<sup>12</sup>**

El 25 de abril el panel de quejas de la RSPO<sup>13</sup> (Mesa redonda sobre aceite de palma sostenible) aplicó una orden preliminar de **detener trabajos** a Plantaciones de Pucallpa SAC, uno de sus miembros peruanos, cuyas operaciones están afectando el territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (Anexo N° 12)

La orden se emitió después de que la comunidad de Santa Clara de Uchunya presentó una queja formal en diciembre de 2015 contra Plantaciones de Pucallpa SAC por la destrucción de más de 5 mil hectáreas de su bosque ancestral. La queja cita los impactos devastadores para los ríos y la ecología forestal de la que dependen los comuneros para la subsistencia, la destrucción de casas de la comunidad y las restricciones impuestas a los comuneros que quieren entrar al bosque.

El panel de quejas se concentró en áreas claves en las que pueden haber sido infringidos los principios de la RSPO. Estos incluyen: el no respetar los derechos territoriales consuetudinarios que son una obligación legal en el Perú, la deforestación de bosque primario que está estrictamente prohibido por la legislación peruana y los procedimientos de la RSPO, y la deforestación sin los permisos que exige la ley peruana.

Más aún, el Panel de Quejas resaltó que sus Procedimientos para Nuevas Plantaciones (PNP) han sido claramente violados, ya que la RSPO no fue notificada antes del inicio de las actividades. Los PNP también requieren que antes del inicio de las actividades las empresas realicen estudios del impacto ambiental, una evaluación de las áreas consideradas con Alto Valor de Conservación e inicien procesos para lograr el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas. La queja inicial estableció claramente que la empresa no ha realizado ningún proceso de CLPI con la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

El panel de quejas también recordó a Plantaciones de Pucallpa que la intimidación de comunidades está estrictamente prohibida. Este punto final es bienvenido dado que los

---

<sup>12</sup> N°ta de prensa: RSPO ordena a compañía de palma aceitera detener trabajos en territorio Shipibo en la Amazonía Peruana, disponible en: <http://www.forestpeoples.org/es/topics/agronegocios/news/2016/04/nota-de-prensa-rspo-ordena-compania-de-palma-aceitera-detener-traba>.

<sup>13</sup> La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro compuesta por las partes interesadas de los siete sectores de la industria de aceite de palma - productores de aceite de palma, procesadores o comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales de conservación del medio ambiente o de la naturaleza y organizaciones no gubernamentales sociales o de desarrollo – establecida para desarrollar e implementar estándares mundiales para el aceite de palma sostenible. La RSPO fue creada en 2004 en respuesta al urgente llamamiento mundial para la producción sostenible de aceite de palma. Los miembros productores del RSPO deben producir su aceite de palma de acuerdo con sus Principios, Criterios y Procedimientos y posteriormente pueden lograr una certificación. Existe un Panel de quejas que procesa quejas presentadas sobre las acciones de los miembros. Esta queja es la primera de este tipo a presentarse en el Perú donde actualmente solo hay cuatro miembros de la RSPO, entre los cuales se encuentra Plantaciones de Pucallpa.

dirigentes de las comunidades han recibido múltiples denuncias legales infundadas de parte de Plantaciones de Pucallpa. Mientras tanto, otros activistas locales han recibido amenazas anónimas de muerte en los últimos meses a raíz de su oposición abierta a las operaciones de la empresa.

El Panel de Quejas da a Plantaciones de Pucallpa 14 días para demostrar que han cumplido con las obligaciones, entre ellas: “1. Demuestre que ha cumplido con todos los requerimientos legales en la adquisición, tala y siembra del área de concesión y 2. Demuestre que al establecer la plantación no ha talado el bosque primario u otra área de Alto Valor de Conservación. Mientras tanto, el panel prohíbe a Plantaciones de Pucallpa que lleve a cabo cualquier actividad de tala y siembra en espera de la resolución de esta queja. Apenas unos días antes, en otra carta a la RSPO, las autoridades de la comunidad de Santa Clara reiteraron su queja y explicaron que: “Desde que presentamos la queja, la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC siguen ocupando la zona en cuestión que ahora está rodeada por una cerca de alambre de púas y controlado por un puesto de control impidiendo la entrada de nuestros comuneros a nuestro territorio... Además, nuestras autoridades y miembros están siendo denunciados ante las autoridades judiciales por operadores de esta compañía por oponerse a la deforestación y por defender nuestro territorio y de ninguna manera vamos a renunciar nuestros derechos a la vida y el territorio.”

## **7. Noveno Juzgado Constitucional de Lima declara fundada medida cautelar y ordena suspensión<sup>14</sup>**

Con fecha 28 de agosto de 2015, se interpuso ante el 9° Juzgado Constitucional de Lima una demanda de amparo contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI y contra el Gobierno Regional de Loreto, con el objetivo de que no se emita, al amparo de la Resolución Directoral N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, algún acto administrativo, certificación ambiental, clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor o autorización de cambio de uso, en favor de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., que pueda convalidar de forma ex post la deforestación ilegal de 3,097.41 hectáreas de boques para el desarrollo de actividades agroindustriales en el fundo Tamshiyacu, actualmente en proceso de investigación fiscal, así como la presunta comisión de otros delitos también comprendidos en diversos procesos de investigación penal. (Anexo N° 13)

En el marco de dicha demanda de amparo, el día 4 de setiembre de 2015 se solicitó una medida cautelar con el objeto de que se ordene a la DGAAA del MINAGRI y al Gobierno Regional de Loreto, que se abstengan de aprobar mediante acto administrativo directa o indirectamente cualquier certificación ambiental o clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor o cambio de uso de tierras en favor de Cacao del Perú Norte S.A.C. que permita el desarrollo de proyectos o actividades agroindustriales en el fundo Tamshiyacu.

En respuesta a la citada solicitud de medida cautelar, el día 4 de marzo de 2016, el 9° Juzgado Constitucional de Lima ha declarado fundada la solicitud de medida cautelar y ordena: *“Mantener las medidas preventivas de paralización de las actividades agrícolas que venía desarrollando la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., en el predio denominado Fundo*

---

<sup>14</sup> Ver nota de prensa Nota de Prensa N° 001-2016 en: <http://keneamazon.net/nota-de-prensa-001-2016.html>.

*Tamshiyacu, ubicado en el distrito Fernando Lores, provincia de Maynas, departamento de Loreto, dispuestas en la Resolución de Dirección General N° 462-2014 -MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de fecha 09 de diciembre de 2014 confirmada por Resolución Ministerial N° 0236-2015-MINAGRI de fecha 15 de mayo de 2015 hasta la conclusión de la presente acción constitucional”<sup>15</sup>.*

El mandato dispuesto por el 9° Juzgado Constitucional de Lima ratifica en sede cautelar la orden administrativa de paralización de las actividades de Cacao del Perú Norte SAC, pero a diferencia de lo dispuesto en la Resolución de Dirección General N° 462-2014 -MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, la orden de paralización estará vigente hasta que culmine el proceso de amparo iniciado ante el 9° Juzgado Constitucional de Lima.

En tal sentido, la medida cautelar previene que el MINAGRI y el Gobierno Regional de Loreto aprueben mediante acto administrativo, directa o indirectamente, cualquier certificación ambiental o cambio de uso de tierras que valide ex post las infracciones cometidas. Complementariamente, el proceso de amparo busca dejar sin efecto el extremo final del artículo 1° de la Resolución N° 462-2014, el cual establece que la medida preventiva de paralización de actividades de Cacao del Perú Norte SAC esté vigente solo temporalmente, “*en tanto la empresa no presente la Clasificación de Tierras por capacidad de uso mayor*” del fundo Tamshiyacu. El carácter temporal de esta medida preventiva, posibilitaba que bastaría que la empresa presente un estudio unilateral y de parte de clasificación de tierras, para que se levante la medida de paralización, y eventualmente se apruebe el PAMA, deviniendo en un acto inconstitucional, y facilitando una mayor deforestación.

De otro lado, la medida cautelar no cuestiona la paralización dispuesta por la DGAAA, ni suspende sus funciones establecidas en el Art. 65° del DS N° 008-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego del MINAGRI. Por el contrario, habiéndose dado apertura en el años 2013 a la carpeta fiscal N° 2506015200-2013-234-0, en la cual la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas - Loreto investiga de oficio a representantes de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. por supuestos delitos contra los recursos naturales, corresponde que, en el marco de dicha investigación, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego como autoridad sectorial competente, emita opinión fundamentada sobre el incumplimiento de la legislación ambiental y forestal por la empresa Cacao del Perú Norte, toda vez que la deforestación ha sido consumada.

A ello se añade que, independientemente de los resultados de los estudios de clasificación de tierras, el mencionado fundo presentaba bosques primarios, como ha quedado acreditado en la Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Por tanto, al haberse producido una tala rasa completa, se configuró la infracción al artículo 287° del Reglamento de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente en ese momento, que dispone que la tala de los árboles y el cambio de uso de tierras con cobertura boscosa requieren la autorización previa de cambio de uso, requisito que no fue cumplido por la

---

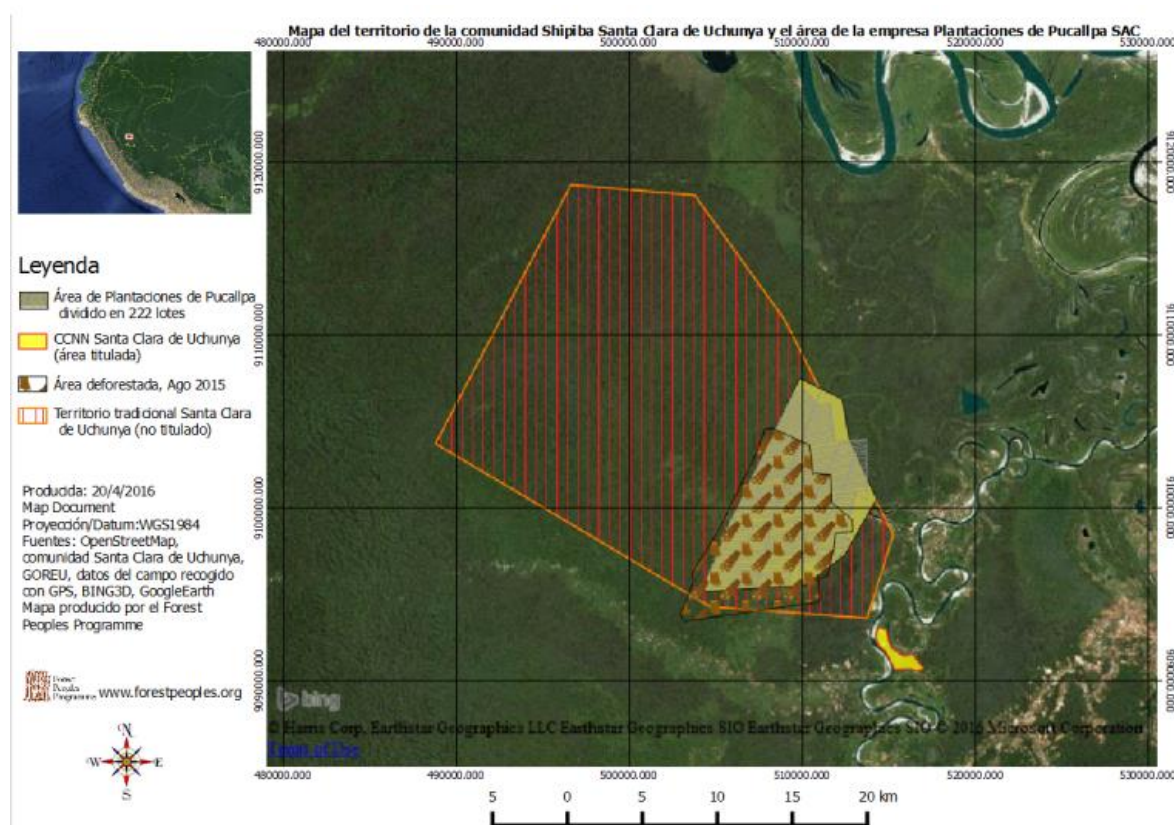
<sup>15</sup> Ver <http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/I.pdf>.

empresa. Adicionalmente, en caso el estudio de clasificación de tierras determinara que las tierras de fundo Tamshiyacu son de producción o protección forestal, también se configura la infracción a los artículos 2° y 7° de la Ley N° 27308. En ambos casos, se ha evidenciado el incumplimiento de las normas forestales. Por tanto, no existe justificación alguna para que la autoridad sectorial competente se abstenga de emitir opinión fundamentada sobre la comisión de las infracciones cometidas.

## B. Hecho lesivo

### 1. Mapa de la comunidad

A continuación se puede ver en el mapa las distintas zonas. La zona color amarillo es el actual territorio de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya. La zona en rayas es el territorio ancestral propiedad de la comunidad nativa. La zona con manchas en tipo de ramas es la deforestada y el área color pastel es la zona donde están los 222 títulos de propiedad, que han sido despojados a la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya (Anexo N° 14-A). De igual forma, este corresponde al espacio geográfico histórico del pueblo shipibo (Anexo N° 14-B).



### 2. Mapa de la deforestación de la Empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. del Grupo Melka

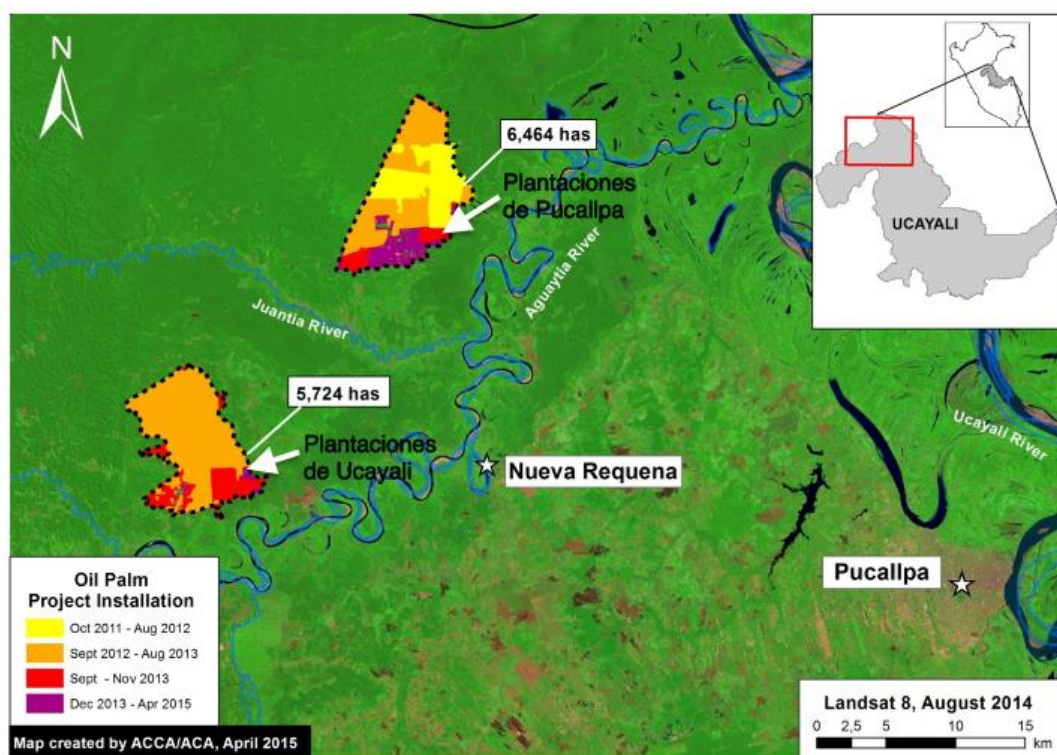
A continuación presentamos unos mapas que dan cuenta del impacto ambiental de Plantaciones de Pucallpa SAC y de Plantaciones Ucayali SAC. Estos mapas son producidos



por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina<sup>16</sup> (MAAP), que es un portal web dedicado a la presentación de información técnica novedosa y de análisis sobre una de las regiones más importantes del planeta: la Amazonía andina (definida aquí como las secciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dentro de la cuenca del Amazonas). (Anexo N° 15)

El aporte de MAAP es la presentación de datos y mapas relacionados con un nuevo sistema de monitoreo de la deforestación en tiempo casi real basado en el análisis de imágenes satelitales. El objetivo final de MAAP es distribuir información técnica importante en el momento oportuno y en un formato fácil de entender. El público objetivo son los responsables políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general.

**La Imagen de la Semana #4 muestra la expansión de dos plantaciones a gran escala de palma aceitera en las cercanías del poblado de Nueva Requena en la Amazonia peruana central (departamento de Ucayali). Los proyectos se iniciaron a fines de 2011 y en la actualidad, en abril de 2015, el área deforestada cubre casi 12.200 hectáreas (ha). Nuestro análisis revela que, de ellas, 9.400 ha se han habilitado por deforestación de bosques primarios, mientras que 2.350 ha por remoción del bosque secundario.**



**Imagen de la Semana 4a. Dos plantaciones a gran escala de palma aceitera en las cercanías de Nueva Requena, en la Amazonia peruana central (departamento de Ucayali), se iniciaron a fines de 2011. Actualmente cubren casi 12.200 ha. Fuentes clave de datos: USGS.**

<sup>16</sup> MAAP es un proyecto de Amazon Conservation Association (<http://www.amazonconservation.org>) y ACCA-Conservación Amazónica (<http://www.acca.org.pe>). Ha recibido el apoyo del Fondo Internacional para la Conservación de Canadá, World Resources Institute's Global Forest Watch Small Grant Fund, Gordon and Betty Moore Foundation y la Iniciativa de la USAID para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA). Las Imágenes de la Semana son validadas por los miembros peruanos de la Articulación Regional Amazónica (ARA).

### Descripción del mapa:

**El mapa de fondo** es una imagen satelital Landsat 8 (con una resolución de 30 metros) tomada en agosto de 2014. El color verde oscuro indica la cobertura boscosa. El color verde claro indica la vegetación más joven o secundaria. El color azul indica los cuerpos de agua. Los datos provienen de USGS.

Las **líneas negras discontinuas** indican el contorno de los dos plantaciones a gran escala de palma aceitera, uno de ellos conocido como "Plantaciones de Ucayali", a partir de abril de 2015.

Los colores indican la manera en que la deforestación e instalación de las plantaciones se dieron, conforme avanzaba el tiempo para los dos proyectos, según nuestro análisis de las imágenes Landsat.

Entre octubre de 2011 y agosto de 2012, el desmonte a gran escala e instalación (indicado en **amarillo**) se inició en el proyecto del norte.

Entre septiembre de 2012 y agosto de 2013, el desmonte a gran escala e instalación de plantaciones (indicado en **anaranjado**) continuó en el proyecto del norte, mientras que se inició en el proyecto del sur.

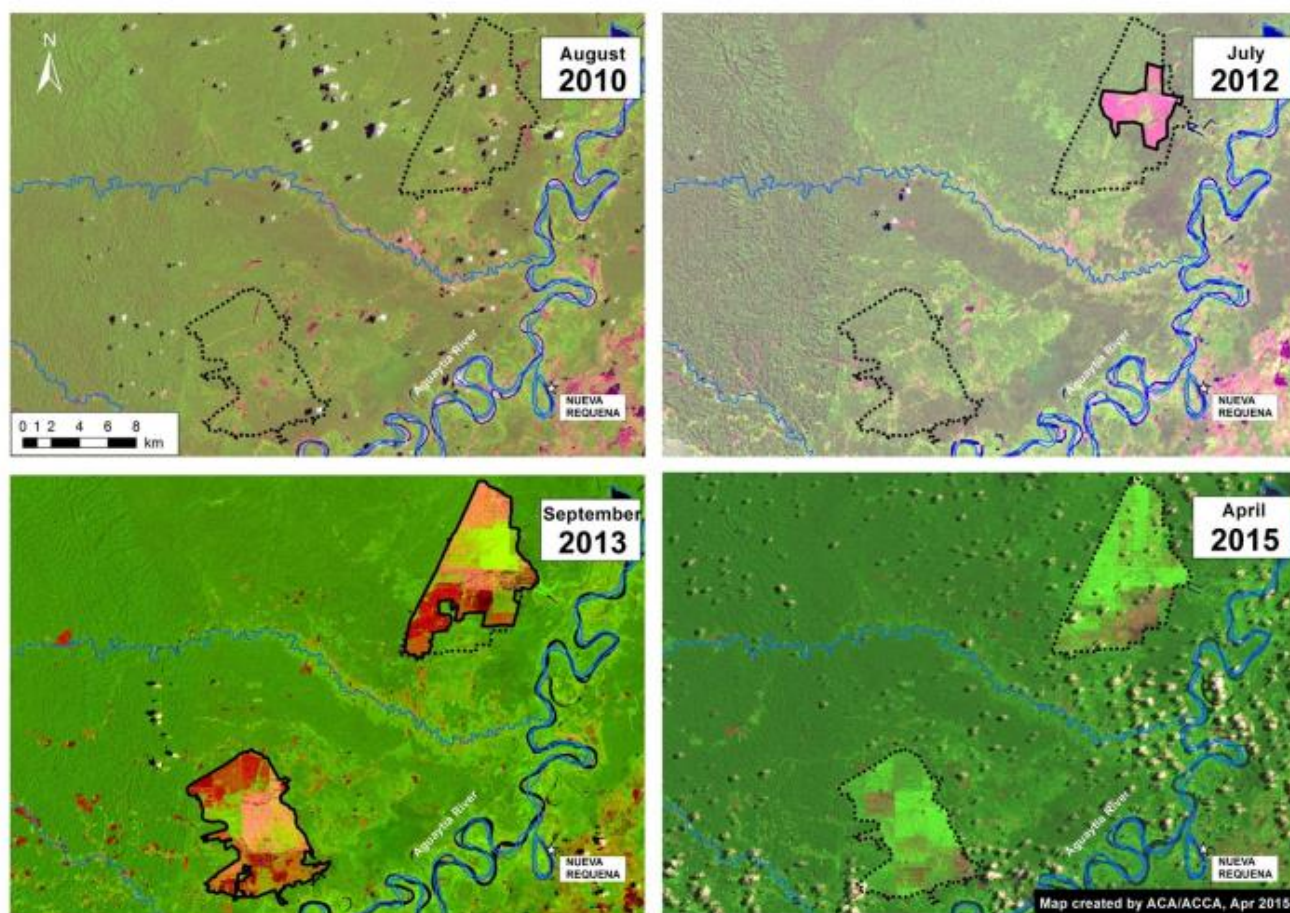
Entre septiembre y noviembre de 2013, el desmonte e instalación de plantaciones (indicado en **rojo**) continuó en la parte sur de ambos proyectos.

Recientemente, entre diciembre de 2013 y abril de 2015, el desmonte e instalación de plantaciones (indicado en **morado**) continuó en la sección sur del proyecto del norte.

Para abril de 2015 los dos proyectos se extienden sobre un área de 12.188 ha.

Para abril de 2015 los dos proyectos se extienden sobre un área de 12.188 ha.

### Serie Temporal Landsat 2010 – 2015





***Imagen 4b. Serie temporal Landsat (2010-2015) para ambas plantaciones de palma aceitera a gran escala cerca de Nueva Requena. Fuentes clave de datos: USGS.***

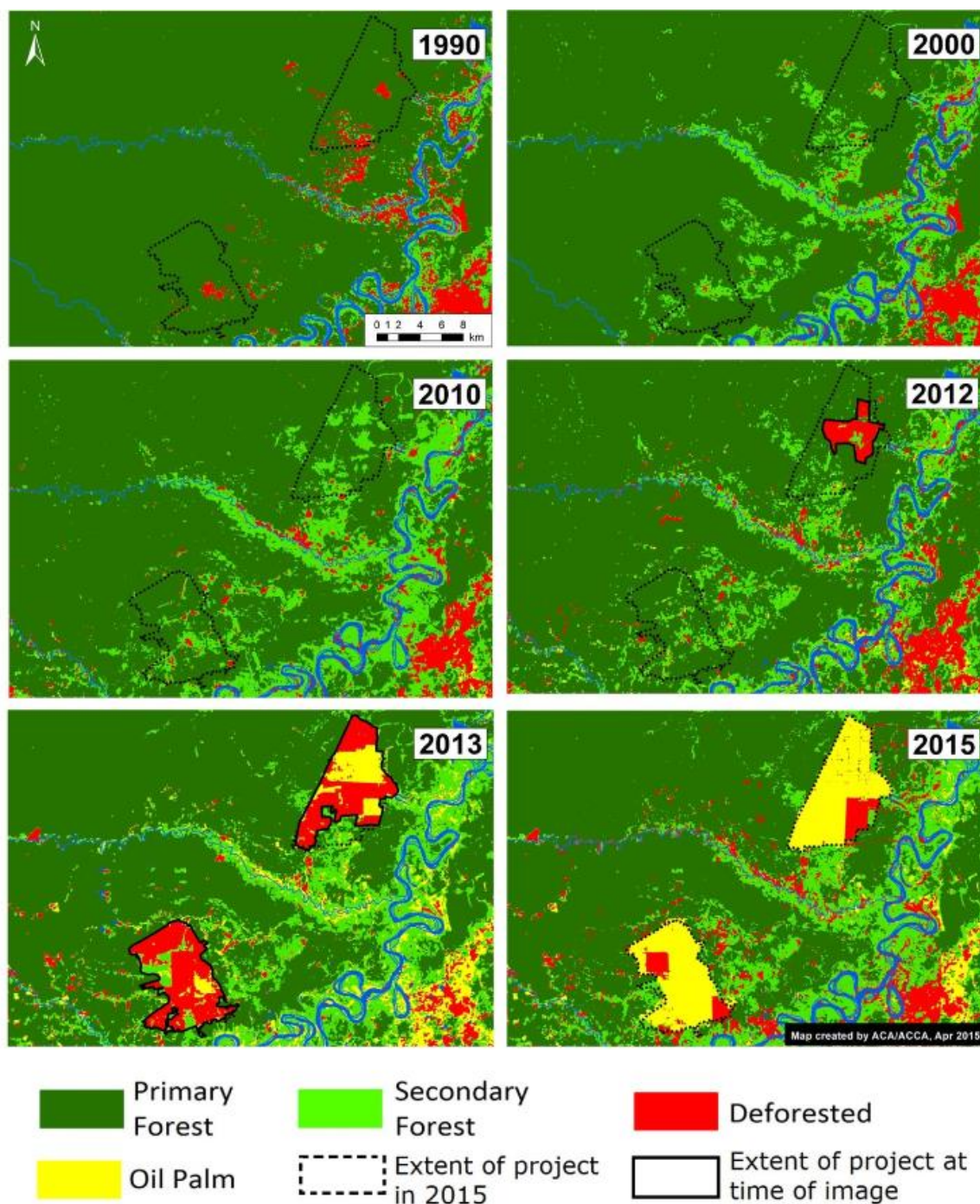
La Imagen 4b corresponde a una serie de imágenes Landsat que muestran los cambios a lo largo del tiempo para ambas plantaciones de palma aceitera. En las imágenes, el color verde oscuro indica la cobertura boscosa, el color verde claro la vegetación secundaria y las plantaciones de palma aceitera, el color rosado indica la tierra expuesta (por lo tanto, un indicador clave de la deforestación reciente), mientras que las manchas dispersas en blanco y negro indican las nubes y sus sombras.

La primera imagen, Landsat 5, de agosto de 2010, muestra el área final deforestada (indicada por las líneas negras discontinuas) inmediatamente antes del comienzo del proyecto en 2011.

La segunda imagen, Landsat 7, de julio de 2012, muestra el inicio del desmonte a gran escala en la parte norte del área del proyecto.

La tercera imagen, Landsat 8, de septiembre de 2013, muestra la rápida expansión del desmonte en ambos proyectos. También muestra el inicio de la plantación de palma aceitera en el proyecto del norte (indicado por el color verde brillante).

La cuarta imagen, Landsat 8, de abril 2015, es la más reciente sin nubes del área del proyecto. Muestra la expansión continua del proyecto del norte y las siembras extensivas en las plantaciones de palma aceitera de ambos proyectos.

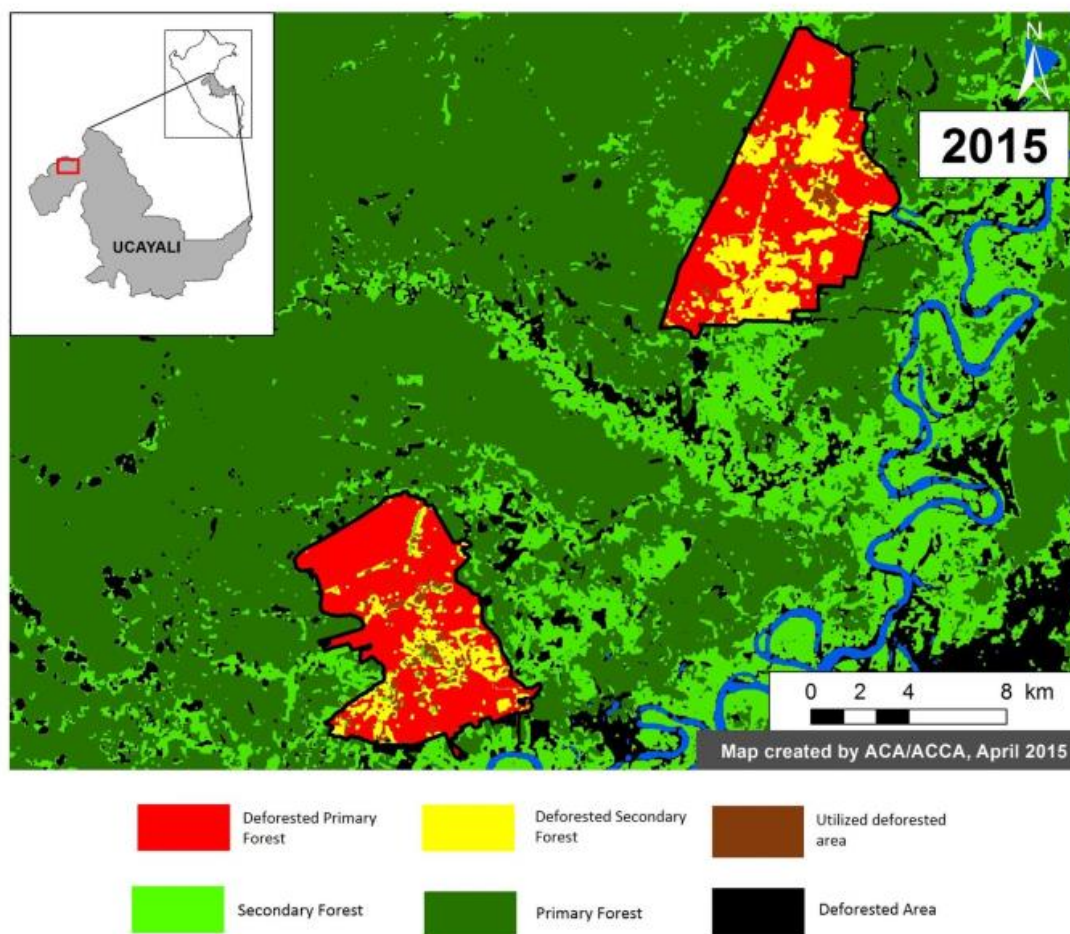


**Imagen 4c. Serie temporal Landsat (1990-2015) para ambas plantaciones a gran escala de palma aceitera cerca de Nueva Requena. Fuentes clave de datos: USGS.**

Realizamos otro análisis de serie temporal Landsat, pero retrocediendo aún más en el tiempo (hasta 1990), para así poder llegar a un mejor entendimiento del estado de los bosques que fueron desmontados para el proyecto. Para cada imagen, determinamos si el área correspondía a bosque primario, bosque secundario, bosque deforestado o plantación de palma



## La Deforestación del Bosque Primario



**Imagen 4d. Clasificación de los usos de la tierra antes del inicio de las actividades de establecimiento de plantaciones de palma aceitera. Fuentes clave de datos: USGS.**

Por último, utilizamos los resultados del análisis de la serie temporal Landsat para clasificar los usos de la tierra antes de las actividades de establecimiento de las plantaciones.

Como conclusión, se ha determinado que de las 12.188 ha deforestadas en los dos proyectos de plantaciones de palma aceitera, **un total de 9.040 ha (el 77%) correspondieron a zonas donde existía bosque primario antes de la instalación del proyecto. Eso equivale a unos 7.000 campos de fútbol. Las otras 2.350 ha (el 19%) fueron bosques secundarios.** Un dato interesante es que solo 434 ha (el 4%) se encontraban deforestadas al inicio del proyecto.

Se define bosque primario como el área que desde la primera imagen Landsat disponible, en este caso 1990, estaba caracterizada por una cobertura boscosa de dosel cerrada y densa.

### 3. Constancias de posesión y títulos de propiedad

Se adjunta a la presente demanda la relación de 222 colonos con derechos sobre el territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, donde se detalla la fecha en que estos

adquirieron irregularmente derechos de posesión y propiedad, así como los contratos de compraventa celebrados con la empresa Plantaciones de Pucallpa (Anexo N° 17).

#### **4. Ministerio de Agricultura acredita el daño ambiental que está generando Plantaciones de Pucallpa SAC del Grupo Melka: Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA**

Se trata de la Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA que suspende actividades de Plantaciones de Pucallpa, luego de acreditar el daño que esta ocasiona al medio ambiente. (Anexo N° 16)

El Ministerio de Agricultura, en tal sentido, concluye:

##### **9.- CONCLUSIONES**

- 9.1.- *Como resultado de la Supervisión Especial y del análisis de la denuncia presentada, efectuada en los predios de propiedad de PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C., se ha detectado que esta empresa se encuentra realizando actividad agrícola intensiva para la siembra de palma aceitera en el predio localizado en los caseríos Naranjal y Unión Progreso, pertenecientes al distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.*
- 9.2.- *La empresa PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C. no cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, de acuerdo con la normatividad vigente, lo que implica que su actividad agrícola intensiva transgrede las normas generales que regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como el Reglamento de Gestión Ambiental Agraria, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2012-AG.*
- 9.3.- *El análisis multitemporal de imágenes satelitales, la empresa PLANTACIONES DE PUCALLPA ha iniciado de manera intensiva la actividad agrícola en 6,845.43 hectáreas para realizar la siembra de palma aceitera, tal como se aprecia en las imágenes satelitales LANDSAT del Anexo 3 del presente informe. De acuerdo con dichas imágenes, hasta el 25 agosto del presente año (dos días antes de la supervisión realizada por la DGAAA), la referida empresa había desboscado casi la totalidad del predio de su propiedad, llegando a un 99.69%, que significa un total de 6824.39 hectáreas.*
- 9.4.- *Las tierras desboscadas por la empresa PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C., no cuentan con Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, que demuestren que viene realizando la actividad agrícola en suelos apropiados para este uso.*
- 9.5.- *Existe una alta probabilidad que la actividad agrícola intensiva de PLANTACIONES DE PUCALLPA se venga desarrollando en suelos que tienen capacidad de uso mayor forestal o de protección; generando con ello su degradación y reduciendo su capacidad actual, así como, la pérdida de la biodiversidad de hábitats (flora y fauna), debido a su fragmentación, así como el costo de oportunidad de la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque como el secuestro y almacenamiento de carbono, contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero y, por ende, al cambio climático.*
- 9.6.- *Considerando los peligros ambientales que podría generar la realización de la actividad agrícola intensiva sin contar certificación ambiental, y que estas vienen desarrollándose probablemente en tierras con capacidad de uso mayor forestal o de protección, y a fin de evitar que siga realizando el daño y/o degradación del recurso natural suelo, se debería ordenar, en calidad de medida preventiva, que PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C. paralice sus actividades agrícolas en los predios de su propiedad ubicados en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; hasta que presente la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor de dichas tierras, aprobados por la autoridad competente, en donde acredite que viene realizando su actividad en suelos cuya Capacidad de Uso Mayor sea agrícola".*

Sobre el impacto en el medio ambiente de Plantaciones de Pucallpa SAC la resolución del MINAGRI precisa lo siguiente:



**Respecto de los impactos negativos de realizar actividad agrícola sin contar con certificación ambiental**

- 8.7.- Como ya se mencionó, **PLANTACIONES DE PUCALLPA no cuenta con certificación ambiental**. Esta situación no permite identificar y determinar los posibles impactos negativos producidos por su actividad agrícola intensiva, y de esta manera adoptar las medidas adecuadas de mitigación que permitan prevenir, controlar, mitigar, reducir y compensar dichos impactos.

Pudiendo generar los siguientes impactos ambientales negativos de carácter significativo:

- ✓ Contribución al aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir de la pérdida del carbono almacenado en la biomasa, por encima y por debajo del suelo, cuando se elimina la cobertura boscosa.
- ✓ Costo de oportunidad por la pérdida de los servicios ambientales que prestaba el bosque, como el secuestro de carbono y también como almacén de carbono.
- ✓ Los cultivos de palma aceitera son pobres substitutas a los sistemas de bosques tropicales nativos.
- ✓ Afectación a la biodiversidad de hábitats (flora y fauna), debido a la fragmentación.
- ✓ Degradación de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria
- ✓ Contaminación de suelos y aguas por el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos.

- 8.8.- Del mismo modo, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación de Recursos Naturales de la DGAAA a través del Memorandum N° 137-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DERN, actualmente no existe una Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor de los predios de propiedad de PLANTACIONES DE PUCALLPA, ubicados en las coordenadas de la Tabla N° 1 del presente informe.

- 8.10.- No obstante lo acotado, de manera referencial e ilustrativa se puede tomar en cuenta el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Ucayali 2008 – 2012, el señala que "en la región Ucayali la mayor superficie territorial presenta tierras con aptitud forestal y de protección. Así el 72.6% corresponde a **tierras forestales** y el 8.2% a tierras dedicadas a la agricultura, tanto cultivos en limpio como permanentes". Según dicho Plan Estratégico, la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor de Tierras en la Región Ucayali, sería el siguiente:

- 8.27.- Según el Cuadro N° 2, cerca del 85% del suelo en la Región Ucayali no es apto para la actividad agrícola, puesto que son suelos con aptitud forestal (72.6%) y de protección (12.4%), lo que significaría que existe una gran posibilidad que PLANTACIONES DE PUCALLPA se encuentre realizando las actividades agrícolas de siembra de palma aceitera en tierras no aptas para esta actividad, lo cual, tal como se verá más adelante, no está permitido por el ordenamiento legal vigente.

- 8.28.- En tal sentido, considerando que la actividad agrícola se viene realizando en grandes extensiones de terreno, sin contar con la certificación ambiental y sin tener en consideración cuál es la capacidad de uso mayor de la tierra - por lo señalado en los numerales precedentes- existe la alta probabilidad que dichas actividades se estén realizando en suelos con aptitud forestal o de protección, que además de la degradación irreversible de dicho recurso no podría ser destinados al uso agrícola, tal como se viene desarrollando a la fecha.

Dicho de otro modo, los predios de la citada empresa, no cuentan con Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, que demuestren que viene realizando la actividad agrícola intensiva en suelos apropiados para este uso.

Sobre esta base, el MINAGRI ordena la paralización de esta medida.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Ordenar, como medida preventiva, a la empresa **PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C.** la paralización de sus actividades agrícolas intensivas, que viene desarrollando en los predios que se encuentran dentro de los vértices georeferenciales de la Tabla N° 1 de la presente resolución, ubicados en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en tanto no presente la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por la autoridad competente, correspondiente a dicha área.

**Artículo 2°.-** Ordenar como mandato de carácter particular que la empresa **PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C.**, en el plazo de hasta noventa (90) días hábiles, computados a partir de la notificación de la presente Resolución, remita a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

**Artículo 3°.-** Notificar a la empresa **PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C.** la presente Resolución, a efectos que proceda a dar cumplimiento inmediato y estricto de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 precedentes.



## 5. MINAGRI acredita mediante análisis satelital destrucción de bosques primarios

Es importante advertir que en la misma Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA que suspende actividades de Plantaciones de Pucallpa, se da cuenta del análisis satelital del mismo MINAGRI sobre el área de Plantaciones de Pucallpa.

### 8.- ANÁLISIS

#### Respecto del análisis multitemporal de imágenes

8.4.- Haciendo un análisis multitemporal de imágenes satelitales sobre el avance de la actividad agrícola intensiva en los campos de propiedad de la referida empresa en el distrito de Nueva Requena con el consecuente desbosque, las cuales se anexan al presente informe, se obtienen los siguientes resultados:

**Cuadro N° 1**  
**Superficie desboscada**

Año	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2013	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2015
Fecha	11/08/2010	14/08/2011	04/05/2012	16/06/2013	19/08/2013	07/11/2013	22/08/2014	03/04/2015	25/08/2015
Área aproximada del Terreno (has)	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43	6845.43
Área desboscada acumulada (has)	1522.81	1550	1561.06	4976.59	5707.33	6035.51	6352.9	6685	6824.39
Porcentaje de superficie desboscada acumulada (%)	22.25%	22.64%	22.80%	72.70%	83.37%	88.17%	92.80%	97.66%	99.69%

Fuente: Imágenes Satelitales LANDSAT  
Elaboración: DGAA-DGAAA

8.5.- Se puede inferir que, la empresa PLANTACIONES DE PUCALLPA ha iniciado de manera intensiva la actividad agrícola en el año 2013, después de haber adquirido la propiedad de los predios, tal como se aprecia en las imágenes satelitales LANDSAT del Anexo 3 del presente informe. De acuerdo con dichas imágenes, hasta el 25 agosto del presente año (dos días antes de la supervisión realizada por la DGAAA), la referida empresa había desboscado casi la totalidad del predio de su propiedad, llegando a un 99.69%, que significa un total de 6824.39 hectáreas.

de Asuntos A.

Lo resaltante es que MINAGRI ha reconocido que la empresa Plantaciones de Pucallpa ha realizado actos de desbosques en el territorio indígena de la comunidad, por una extensión superior a las 6,824.39 hectáreas.

## 6. Video acredita que Plantaciones de Pucallpa incumple orden del MINAGRI

Según información difundida por FECONAU<sup>17</sup> y proporcionada por las autoridades de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, en cuyo territorio ancestral la empresa Plantaciones de Pucallpa realiza sus actividades, “funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali efectuaron una diligencia el 5 de mayo de 2016, en el área que de acuerdo a la base de datos oficial está en la tierra que pertenece a Plantaciones de Pucallpa SAC. Además, registraron también evidencia que las operaciones han seguido en contravención de la orden de suspensión de septiembre del año 2015 emitido por el Ministerio de Agricultura”.

<sup>17</sup> Ver: <https://www.facebook.com/notes/federaci%C3%B3n-de-comunidades-nativas-de-ucayali-y-afluentes-feconau/pese-a-la-orden-de-suspension-autoridades-fiscales-y-minagri-constatan-que-plant/514662708732358>

Se aprecia en el vídeo que personal de seguridad privada y los trabajadores de la plantación, indican que la tierra pertenece a su empleador, que según ellos es un particular, y no a la empresa Plantaciones de Pucallpa. El funcionario del Ministerio de Agricultura, que estuvo presente en la diligencia el 5 de mayo de 2016, explica sin embargo, que de acuerdo a la base de datos oficial esta tierra pertenece a Plantaciones sde Pucallpa y que dicha empresa ha seguido con sus operaciones en contravención de la orden de suspensión de septiembre de 2015, emitida por el Ministerio de Agricultura.

*"Todo esto confirma lo que sabemos ya", dijo Jamer Agustin dirigente de FECONAU. "Esta es una prueba más del modus operandi de empresas como Plantaciones de Pucallpa y evidencia actos de corrupción de nuestras propias autoridades. Primero que promueven la ocupación de la tierra, luego obtienen los certificados que falsifican que estas tierras han sido utilizadas y ocupadas históricamente por estas personas y en base a esto consiguen los títulos de propiedad. Eventualmente, estas empresas compran estas tierras y sus títulos de propiedad y afirman que las tierras ya han sido deforestadas para evitar las restricciones a la conversión de bosques primarios".*

FECONAU y Santa Clara de Uchunya están exigiendo medidas urgentes por parte de las autoridades peruanas, en primer lugar, para garantizar la integridad física de los líderes de la comunidad y de Washington Bolívar y Robert Guimaraes. También instan una acción urgente por parte de las autoridades peruanas para hacer cumplir su orden de suspensión y que se anulen las 17 constancias de posesión adjudicadas sobre el territorio de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Finalmente, exigen que se restituya la propiedad y posesión del territorio ancestral de la comunidad en conformidad con sus derechos como pueblos indígenas y las obligaciones legales del Estado.

Puede descargar el vídeo siguiendo este enlace: <https://wsi.li/McQkjZyGCa3y/280858>

## **7. Impactos ambientales de proyectos agroindustriales en la Amazonía: un análisis técnico**<sup>18</sup>

El Perú tiene la segunda área forestal más grande de América Latina, con un potencial enorme para capturar carbono, mitigar el cambio climático, promover el ecoturismo, establecer estrategias sólidas de conservación, y también buenas posibilidades de desarrollo de nuevos productos medicinales, de salud e industriales<sup>19</sup>.

Sin embargo, áreas extensas del bosque amazónico natural están siendo deforestados para el establecimiento de proyectos agroindustriales. A continuación, realizamos un resumen del informe elaborado por la Environmental Investigation Agency (EIA) sobre las consecuencias ambientales de la deforestación impulsada por empresas como Plantaciones de Pucallpa, el cual adjuntamos a la presente demanda (Anexo N° 18).

---

<sup>18</sup> Traducción del cuadro en páginas 18-19 del informe sobre el impacto de la palma aceitera en la Amazonia Peruana: Deforestación por definición, EIA, Abril 2015. Disponible en: [http://eia-global.org/images/uploads/150325.1\\_EIA\\_Peru\\_Palm\\_Report\\_P06-WEB.pdf](http://eia-global.org/images/uploads/150325.1_EIA_Peru_Palm_Report_P06-WEB.pdf).

<sup>19</sup> Perú: País Mega diverso. Comisión Nacional de Diversidad Biológica.

## CLIMA.

### *Microclima*

El proceso de la deforestación para la agroindustria afectará el microclima local que se regula naturalmente por la cobertura forestal<sup>20</sup>. El bosque tiene un microclima único comparado con otros tipos de vegetación<sup>21</sup>. Además pueden existir múltiples microclimas en un mismo bosque; los espacios de aire entre los troncos de los árboles tienen un clima propio que es distinto al de las áreas abiertas y el suelo del bosque<sup>22</sup>.

Para tratar de entender el impacto ambiental de la tala sobre el microclima<sup>23</sup>, podemos empezar pensando en el impacto de un claro para el microclima forestal. Los claros se forman por la caída natural o la tala intencional de un árbol o parte de un árbol, y desencadenan una serie de reacciones biológicas de *silvigénesis*, es decir todos los procesos de sucesión ecológica y dinámicas biológicas que llevan al establecimiento de la selva madura<sup>24</sup>. Un claro se considera pequeño cuando mide 40m<sup>2</sup> y grande cuando mide entre 150 y 400m<sup>2</sup>.

Es importante tomar en cuenta que la creación de claros afecta el microclima del bosque al alterar la radiación solar en él. La radiación solar regula la temperatura de suelos y aire, además de la humedad del aire. Cuando se crea un claro, todas estas condiciones se alteran hasta más de 10m del borde del claro<sup>25</sup>. Si un claro provoca estos cambios en el microclima del bosque, es fácil imaginarse el alcance del impacto de una área deforestada para un proyecto agroindustrial, dadas las dimensiones del área afectada.

Además, un área deforestada y reemplazada por una planta industrial se vuelve un claro permanente. Si el área es reemplazada por una plantación de palma aceitera, ya solo tendrá dos estratos de vegetación (kudzu y palma aceitera) en lugar de los muchos estratos del bosque tropical.

## AGUA

### *Cantidad y calidad de agua superficial*

Un proyecto agroindustrial puede provocar cambios en la calidad del agua superficial si las actividades de construcción no toman medidas de precaución cuando mueven suelos y en el manejo de desechos y aguas residuales<sup>26</sup>. La cantidad de agua superficial también se ve afectada por un uso inadecuado de pozos entubados para abastecer de agua al proyecto. De acuerdo a las quejas de residentes locales, dos proyectos del Grupo Romero han mostrado

---

<sup>20</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Manítí.

<sup>21</sup> Uribe de Camargo, A. (1981). Microclima del bosque. Actualidades biológicas, 10(36).

<sup>22</sup> *ibíd.*

<sup>23</sup> A una compañía se le puede otorgar una propiedad de 10 mil hectáreas para un proyecto agroindustrial, y se le pueden entregar varios lotes colindantes.

<sup>24</sup> Proceso de construcción, reconstrucción, rejuvenecimiento y formación del bosque.

<sup>25</sup> L. Orozco, C. Brumér, D. Quirós. (2006). Aprovechamiento de impacto reducido en bosques latifoliados húmedos tropicales – Turrialba, CR: CATIE.

<sup>26</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agroindustrial de Palmas de Manítí



grados inusitados de mal manejo de agua. En 2009 los residentes del área de influencia del proyecto Palmas de Oriente acusaron a Palmas de Oriente de desviar el flujo de quebradas, haciendo que se secaran varias cuencas y apropiándose del enorme lago de “Cocha Muerta”<sup>27</sup>.

En noviembre de 2014 FREDESAA alega que el proyecto Palmas del Shanusi contaminó las quebradas de Ushpayacu y Yanayacu y le pidió al gobierno que investigara y sancionara a la empresa<sup>28</sup>.

### *Calidad de agua subterránea*

Los proyectos agroindustriales también afectan la calidad del agua subterránea. Esto puede suceder como consecuencia de la mala construcción de pozos entubados<sup>29</sup>, el derrame accidental de aceites y lubricantes o el uso excesivo de agroquímicos que llegan al manto freático<sup>30</sup>.

Los proyectos agroindustriales usan fertilizantes como el superfosfato triple (SFT) y cloruro de potasio (KCl); herbicidas como Gesapax, Glifosato y Gramocil (un compuesto de paraquat and diurón); fungicidas como Benopoint 50PM (Benomilo) y Dithane (Mancozeb); y pesticidas como Gusadrin 2.5% (Diazinón) y Sanpifos (Clorpirifos)<sup>31</sup>. Mientras que estos agroquímicos están permitidos bajo la legislación actual del Perú, se deben tomar precauciones especiales en la aplicación de estas sustancias, dada la intensidad de las operaciones agroindustriales. Las dosis y las medidas de seguridad del personal en la aplicación de sustancias químicas son particularmente importantes.

Esta lista indica los efectos tóxicos potenciales de estos agroquímicos y las consecuencias para la salud humana, según lo demuestran varios estudios:

- Los fertilizantes pueden contaminar fuentes de agua; su uso excesivo puede provocar la eutrofización de aguas superficiales y la contaminación de los mantos freáticos con nitrógeno<sup>32</sup>.
- Gesapax contiene el ingrediente activo ametrina, que está en la lista de sustancias prohibidas y estrictamente restringidas de la Unión Europea<sup>33</sup>. Una investigación en 2015 concluyó que la ametrina afecta negativamente los testículos y puede poner en peligro la supervivencia y fertilidad de los animales<sup>34</sup>.

---

<sup>27</sup> Barranquita resiste. (2009). en [http:// cordilleraescalera.wordpress.com/2009/12/18/ barranquita-resiste/](http://cordilleraescalera.wordpress.com/2009/12/18/barranquita-resiste/)

<sup>28</sup> Decreto de Huelga N°. 001-2014-CD/FREDESAA. (2014).

<sup>29</sup> Los pozos entubados capturan agua para extraer el aceite palma de la fruta en las plantas de extracción.

<sup>30</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Maní.

<sup>31</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Maní

<sup>32</sup> La eutrofización es un aumento intenso y acumulación excesiva de microalgas y otras plantas que sucede en algunos sistemas acuáticos como consecuencia de la entrada excesiva de fósforo y nitrógeno de la cuenca. N Mazzeo, J Clemente, J García-Rodríguez et al Eutrofización: Causas, consecuencias y manejo – Iguá, Uruguay: Grupo de Ecología y Rehabilitación de Sistemas Acuáticos Someros. Sección Limnología, Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de la República.

<sup>33</sup> Directiva del Consejo N°. 91/414/EEC relativa a la comercialización de los productos fitosanitarios (1991). Dantas et al, 2015

<sup>34</sup> Ibid.

- El Glifosato, un herbicida eficiente y conocido, ha sido objeto de varios estudios que en general concluyen que es una sustancia “devastadora para los embriones anfibios”<sup>35</sup>, que puede causar alteraciones endocrinas en las células que penetra<sup>36</sup>, e interrumpe el proceso de encimas para sintetizar hormonas esteroides cuando se inserta en sitios activos de la aromatasas en células mamíferas<sup>37</sup>. Además, los ingredientes inactivos que contribuyen a la estabilidad y absorción de los ingredientes activos del Glifosato, pueden alterar la permeabilidad de las células humanas y aumentar la toxicidad del Glifosato, que provoca la muerte celular y de tejidos vivos<sup>38</sup>.
- Paraquat ha demostrado efectos hepatotóxicos en experimentos con ratones<sup>39</sup>.
- Diurón es un agroquímico permitido en la Unión Europea<sup>40</sup>, pero solo se puede aplicar como herbicida en cantidades menores a 0.5kg por hectárea<sup>41</sup>. Además, las personas encargadas de la aplicación de Diurón deben usar equipo de protección y cerciorarse de proteger los organismos acuáticos y las plantas que no son objeto de la aplicación<sup>42</sup>. En un estudio de dos años se detectó que el Diurón provoca altos índices de cáncer de vejiga en ratones expuestos a dosis altas (2.500ppm)<sup>43</sup>.
- El Benomilo ha sido identificado como un factor de riesgo para la alteración endocrina que causa cáncer de pecho<sup>44</sup>.
- En un estudio de 2014 se vio que, incluso en dosis bajas, el Mancozeb puede afectar el equilibrio de la tiroides y la reproducción<sup>45</sup>. Otro estudio de 2014 encontró pruebas de que el Mancozeb puede dañar la integridad del ADN de los organismos expuestos<sup>46</sup>.

---

<sup>35</sup> Aranda, Dario. Andres Carrasco. Disponible en: [http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Andres\\_Carrasco.doc](http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Andres_Carrasco.doc).

<sup>36</sup> Mesnage R, Bernay B, Seralini GE. (2013). Ethoxylated adjuvants of glyphosate-based herbicides are active principles of human cell toxicity. *Toxicology*, 313(2-3), p. 122-128.

<sup>37</sup> Richard S, Moslemi S, Sipahutar H, Benachour N, Seralini G. (2005). Differential effects of glyphosate and roundup on human placental cells and aromatase. *Environmental Health Perspectives*, 113(6), 716-720.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Nakagawa I, Suzuki M, Imura N, Naganuma A. (1995). Enhancement of paraquat toxicity by glutathione depletion in mice in vivo and in vitro. *J Toxicol Sci*, 20(5), 557-564.

<sup>40</sup> La UE tiene reglas muy meticulosas para la evaluación, autorización, comercialización y control de productos fitosanitarios y sus ingredientes activos.

<sup>41</sup> Directiva del Consejo N°. 91/414/EEC relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (1991) y 2008/91/CE [modificación para incluir el Diurón].

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Da Rocha MS, Arnold LL, De Oliveira ML, et al. (2014). Diuron-induced rat urinary bladder carcinogenesis: mode of action and human relevance evaluations using the International Programme on Chemical Safety framework. *Crit Rev Toxicol*, 44(5), 393-406.

<sup>44</sup> Kawaratani Y, Matsuoka T, Hirata Y et al. . (2015). Influence of the carbamate fungicide benomyl on the gene expression and activity of aromatase in the human breast carcinoma cell line MCF-7. *Environ Toxicol Pharmacol*, 39(1), 292-299.

<sup>45</sup> Pandey SP, Mohanty B. (2015). The neonicotinoid pesticide imidacloprid and the dithiocarbamate fungicide mancozeb disrupt the pituitary-thyroid axis of a wildlife bird. *Chemosphere*, 60(4), 227-234.

<sup>46</sup> Goldoni A, Klauck CR, Da Silva ST, Da Silva MD, Ardenghi PG, Da Silva LB. (2014). DNA damage in Wistar rats exposed to dithiocarbamate pesticide mancozeb. *Folia Biol (Praha)*, 60(4), 202-204.



- El Diazinón induce la peroxidación de lípidos en los testículos de las ratas, que puede causar daños celulares que llevan a la mutación y la proliferación de células carcinógenas<sup>47</sup>.

## *SUELOS*

### *Calidad del suelo*

La calidad del suelo se ve afectada por la acumulación de desechos de los campamentos de trabajadores, la maquinaria y el cavado de zanjas. Además, es probable que los trabajadores —que tienen poca educación en asuntos ambientales— no tomen precauciones en el manejo de desechos sólidos, cuya acumulación puede cambiar las condiciones del suelo<sup>48</sup>. La calidad de suelos también se ve afectada por derrames o descargas accidentales de lubricantes, gas y aceites o por la aplicación de sistemas de mantenimiento inadecuados de equipos y vehículos<sup>49</sup>.

### *Erosión*

En áreas designadas de uso agroindustrial, la cobertura de árboles se eliminará. Esto conlleva un riesgo mayor de erosión, especialmente dada la alta precipitación de esta zona<sup>50</sup>. La deforestación también elimina la hojarasca o mantillo depositada sobre el suelo, que contribuyen a retener la humedad y protegen el suelo de la erosión<sup>51</sup>. La erosión se define como remoción, transporte y acumulación de partículas de tierra, materia orgánica y nutrientes solubles. La erosión se manifiesta con intensidad variable, y puede con frecuencia volverse irreversible, de manera que altera el equilibrio en puntos clave de las cuencas hidrográficas<sup>52</sup>.

La erosión es un factor importante porque elimina la capa orgánica superior del suelo, reduce los niveles de material orgánico en la tierra y destruye la estructura del suelo. En este proceso, la erosión generalmente crea un ambiente menos favorable para el crecimiento de la vegetación. Además, los sedimentos erosionados pueden obstruir o llenar los cuerpos del agua, y estos sedimentos dañan el hábitat de los peces y reducen la calidad de agua en estos lugares. Las partículas de suelos erosionados quedan suspendidos en el aire y, transportados como polvo, también pueden afectar la salud humana a gran escala<sup>53</sup>.

### *Cambios en la estructura del suelo*

---

<sup>47</sup> La peroxidación de lípidos o la degradación oxidativa de lípidos puede causar daños celulares cuyos resultado final puede ser mutagénico o carcinógeno. Rahimi Anbarkeh F, Nikraves MR, Jalali M. (2014). Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin E. Iran J Reprod Med, 12(11), 731-736.

<sup>48</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Manítí.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ministerio del Ambiente (2000). Mapa de Deforestación de la Amazonia Peruana 2000: Capítulo 4 Causas de la Deforestación. Disponible en línea: <http://sinia.minam.gob.pe/modsinia/public/docs/173.pdf>

<sup>52</sup> Ministerio de Agricultura y Riego, Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Erosion. Disponible en línea: <http://dgaaa.minag.gob.pe/index.php/degradacion-de-suelos-temat/erosion>

<sup>53</sup> Ibid.

Las actividades de construcción para proyectos agroindustriales requieren el uso de maquinaria pesada que compacta el suelo en toda la zona del proyecto<sup>54</sup>. Los suelos compactados no absorben el agua de lluvia; que entonces escurre por la superficie del terreno, llevándose partículas del suelo y causando erosión<sup>55</sup>. Además, la compactación de suelos no permite la regeneración de la vegetación<sup>56</sup>.

## PLANTAS

### *Diversidad y abundancia de especies*

Las zonas donde los proyectos agroindustriales de palma aceitera se están estableciendo en el Perú son zonas con bosques naturales<sup>57</sup> de alta biodiversidad. Esta pérdida de áreas con vegetación reduce los hábitats y densidad de especies de plantas<sup>58</sup> and llevará a la pérdida de especies maderables y no maderables<sup>59</sup>. Si la zona del proyecto incluye especies de plantas vulnerables o en peligro, el riesgo para éstas es aún más crítico. Bien podría ser el caso, dado que la Contraloría General de la República determinó en 2012 que la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre no tiene el mapa forestal y de suelos actualizado, “generando un riesgo potencial sobre el aprovechamiento de los recursos forestales, debido a que podrían estarse extrayendo especies forestales de bosques que deberían mantenerse en reserva para su futura habilitación o de superficies que deberían estar destinadas para la protección”<sup>60</sup>.

## ANIMALES

### *Diversidad y abundancia de especies*

Los proyectos agroindustriales requieren la remoción de vegetación, que fragmenta los hábitats y reduce las fuentes de alimento de la fauna de la zona, generando mayor competencia entre las especies y la posible migración de algunas<sup>61</sup>. Además, algunos trabajadores cazan animales silvestres en el área del proyecto y zona circundante<sup>62</sup>; las especies particularmente vulnerables a la captura para venta como mascotas son guacamayos, monos y víboras, mientras que el majaz (un roedor), el pecarí y el lagarto se buscan para vender a restaurantes turísticos de la región<sup>63</sup>. Estos factores crean un gran riesgo de pérdida

---

<sup>54</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Maniti

<sup>55</sup> Ministerio del Ambiente. (2000). Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000: Chapter 4 Causas de la Deforestación.

<sup>56</sup> *Ibíd.*

<sup>57</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Maniti.

<sup>58</sup> *Ibíd.*

<sup>59</sup> *Ibíd.*

<sup>60</sup> Contraloría General de la República (2012). Informe N°. 313- 2012-CG/MAC-AG: Auditoría de Gestión Ambiental al Ministerio de Agricultura “Control sobre la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre”

<sup>61</sup> Informe N° 674-13-MINAGRI-DGAAA-DGAA/WSG-129553- 12: Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Agro-industrial de Palma Aceitera “Maniti”.

<sup>62</sup> Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Agro-industrial de Palmas de Maniti

<sup>63</sup> *Ibíd.*

de diversidad y abundancia de especies animales<sup>64</sup>. Si la zona del proyecto incluye especies vulnerables o en peligro, el riesgo para estas especies animales es aún más crítico.

## *ECOSISTEMA*

### *Fragmentación de los hábitats*

Cuando un hábitat grande y continuo se divide en dos o más fragmentos, se habla de la fragmentación del hábitat<sup>65</sup>. Este fenómeno puede ocurrir cuando se deforesta un área de bosque para conversión a otro uso de suelos, y también cuando un proyecto de infraestructura divide el área<sup>66</sup>. La fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales, el “efecto barrera” y el “efecto borde”<sup>67</sup>.

El efecto barrera se crea cuando la movilidad de los organismos o sus prácticas reproductivas se ven impedidas, lo cual restringe la dispersión y colonización de estos organismos<sup>68</sup>. Muchas especies de insectos, pájaros y mamíferos no pueden cruzar las barreras que fragmentan sus hábitats tradicionales, y por lo tanto se ve afectada también la distribución de plantas cuyas semillas son dispersadas por estos animales<sup>69</sup>. Además, las fuentes de alimentos de los animales se restringen si las barreras separan las especies que comían<sup>70</sup>. El efecto borde se refiere a una situación en la que un ecosistema es fragmentado y se alteran las condiciones bióticas y abióticas de cada fragmento y del ecosistema circundante<sup>71</sup>. La consecuencia es que la distribución y abundancia de especies cambia, lo cual altera la estructura vegetal y el cambio a la vegetación provoca un cambio en las fuentes de alimentos de las especies animales<sup>72</sup>. En el contexto de la producción de aceite de palma, la fragmentación se da cuando se deforesta para crear un espacio para el cultivo de la palma aceitera. Entonces, la especie nueva (la palma aceitera) se introduce en este espacio abierto entre el ecosistema fragmentado. Estos cambios afectan en primera instancia a las especies cuyo ecosistema ha sido fragmentado, mientras que la especie nueva puede que prospere en condiciones que favorecen su supervivencia y reproducción<sup>73</sup>.

### *Emisiones de carbono*

Donde se han destruido los bosques naturales para sembrar cultivos de biocombustibles, se calcula que las emisiones que resultan de esta deforestación a mediano plazo son mayores que los que se producirían si continuáramos usando combustibles fósiles. El tiempo que toma restablecer el carbono que se emitió durante el establecimiento de una plantación de palma aceitera es un factor crítico para determinar cuánto carbono se emite. En algunos ecosistemas,

---

<sup>64</sup> *Ibíd.*

<sup>65</sup> *Ibíd.*

<sup>66</sup> *Ibíd.*

<sup>67</sup> *Ibíd.*

<sup>68</sup> *Ibíd.*

<sup>69</sup> *Ibíd.*

<sup>70</sup> *Ibíd.*

<sup>71</sup> *Ibíd.*

<sup>72</sup> *Ibíd.*

<sup>73</sup> *Ibíd.*

se calcula que toma 420 años que las plantaciones de biocombustible compensen las emisiones de carbono que se liberó durante el establecimiento de la plantación<sup>74</sup>.

#### IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

##### A. *La fuerza normativa de las normas que reconocen los derechos de comunidades nativas en su condición de pueblos indígenas*

##### 1. La fuerza normativa de la Constitución y de las normas de rango constitucional

Es necesario precisar la fuerza normativa de la Constitución y de todas las normas de rango constitucional que forman parte del parámetro de control constitucional como por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT. En primer término debemos de reconocer el carácter vinculante de la Constitución Política<sup>75</sup>. Si bien la Constitución Política es una norma política en la medida que organiza y limita el ejercicio de poder, es también y fundamentalmente una norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos y para los propios particulares sin excepción alguna<sup>76</sup>. Señala Prieto Sanchís que la Constitución no es un catecismo político o una guía moral sino una norma con la pretensión de que la realidad se ajuste a lo que ella prescribe<sup>77</sup>.

En segundo lugar debemos de reconocer la supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de fuentes. Es decir, la Constitución no sólo es una norma jurídica, sino que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, es la norma de mayor importancia en el sistema de fuente del Derecho, cuyos efectos irradia a todo el ordenamiento jurídico. De ahí que Prieto Sanchís señale con propiedad que ella condiciona la validez de todos los demás componentes del orden jurídico, y que representa un criterio de interpretación prioritario<sup>78</sup>. Ello solo es posible, gracias “a la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria”<sup>79</sup>.

En tercer lugar, una lógica consecuencia de los dos elementos antes predicados de la Constitución Política, es la eficacia y aplicación inmediata de ésta. Negarle dicha

---

<sup>74</sup> Edgar Kaeslin, Ian Redmond & Nigel Dudley. (2013). La fauna silvestre en un clima cambiante. Capítulo 4: Consecuencias del cambio climático. (pp. 33-60). Rome: UN Food and Agriculture Organization.

<sup>75</sup> Seguimos el esquema desarrollado por Prieto Sanchis cuando caracteriza los elementos caracterizadores de lo que él llama un constitucionalismo fuerte. Ver: Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pág. 116.

<sup>76</sup> El Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente el principio según el cual ningún poder puede estar exento del control constitucional, pues lo contrario significaría que el poder constituyente está por encima del poder constituido. Así por ejemplo en la sentencia recaída en el exp. 00006-2006-CC/TC, f.j. 44, señala que “En un Estado Constitucional Democrático los poderes constituidos no están por encima de la Constitución, sino que están sometidos a ella”. Esto implicaría en los hechos la pérdida o la limitación de la eficacia normativa de la Constitución. Ver por ejemplo Luis Castillo Córdova, La inexistencia de ámbitos exentos de vinculación a la Constitución, en: Gaceta Jurídica, julio 2007, año 13, pág. 73 y siguientes.

<sup>77</sup> Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pág. 116.

<sup>78</sup> Ibídem.

<sup>79</sup> Ibídem, pág. 117.

característica implica regresar al Estado Legislativo de derecho en el cual la Constitución no vinculaba a los poderes públicos. En efecto, si la Constitución es una verdadera norma suprema, ello supone que no requiere su desarrollo legislativo para desplegar su fuerza vinculante. En tal sentido, en la medida en que los preceptos constitucionales sean relevantes en un proceso cualquiera, su aplicación resultará obligatoria<sup>80</sup>. Esto es muy importante pues no todos los derechos del Convenio 169 de la OIT y de la propia Constitución tienen desarrollo legislativo o reglamentario.

Un cuarto elemento es la garantía jurisdiccional de la Constitución<sup>81</sup>. La denominada garantía jurisdiccional o judicial no es otra cosa que la exigibilidad en sede jurisdiccional de la Constitución. Esto significa que la primacía de la Constitución, como la de cualquier otra normatividad, es jurídicamente imperfecta si carece de una garantía jurisdiccional y, concretamente, si la constitucionalidad de las decisiones y actos de los poderes públicos no es enjuiciable por órganos distintos de aquellos que son sus propios actores<sup>82</sup>.

Un quinto elemento del Estado Constitucional de derecho es el denso contenido normativo. Este es quizá uno de los principales rasgos que diferencian el Estado de Derecho o también llamado el Estado Legislativo de Derecho, del Estado Constitucional de Derecho. A diferencia del primero, el segundo está caracterizado por un denso contenido normativo que está formado por principios, derechos y directrices, más o menos precisos, aplicables a los casos concretos, siempre que resulten relevantes<sup>83</sup>. Estos vinculan no solo a los poderes públicos sino a todos los ciudadanos. Ciertamente, el Estado Constitucional de Derecho tiene más elementos, pero para efectos de lo que analizaremos, estos resultan relevantes y significativos.

Finalmente un último elemento de la Constitución elemento es la rigidez constitucional. Esto quiere decir que solo se puede modificar la Constitución y las normas de rango constitucional, a través de procedimientos formales complejos, caracterizados por su dificultad, toda vez que requieren procesos de consenso, muy elevados y rígidos. Nos referimos en concreto al proceso de reforma de la Constitución. La finalidad de ello es impedir que las Constituciones sean modificadas a cada rato. En consecuencia, es esta la fuerza normativa de los derechos que han sido desconocidos cuando se expiden constancias de posesión en favor de colonos, sobre territorios tradicionales de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.

## **2. La doble dimensión de los derechos fundamentales: son derechos subjetivos y obligaciones objetivas del Estado de ineludible cumplimiento**

Los derechos fundamentales representan en su dimensión objetiva principios objetivos del ordenamiento jurídico y de la sociedad y, por otra parte, constituyen manifestación concreta del principio de dignidad humana de la persona<sup>84</sup>. Es decir, el derecho fundamental a la

---

<sup>80</sup> Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pág. 116.

<sup>81</sup> Este tema ha sido desarrollado por Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

<sup>82</sup> Manuel García Pelayo, "El status del Tribunal Constitucional". Revista Española de Derecho Constitucional N° 1. Madrid, 1981, pág. 18.

<sup>83</sup> Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pág. 117.

<sup>84</sup> Mijail Mendoza, op. Cit., pág. 118.

propiedad sobre la tierra y el derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, tienen una doble dimensión, es decir, no solo implican el derecho subjetivo de los pueblos a reclamar y exigir judicialmente su cumplimiento objetivo, sino también implica la obligación de todo funcionario y ente público y, en especial de todo magistrado, del deber jurídico de su respeto y observancia material.

Estamos ante el deber jurídico constitucional de respetar el territorio, cuyo cumplimiento en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede estar supeditado –y menos condicionado– a la exigibilidad por parte del titular del derecho fundamental. En otras palabras, se debe respetar este derecho porque es una exigencia de la Constitución y no porque haya un pedido expreso del titular del derecho. El fundamento de esto tiene que ver con la naturaleza de los derechos fundamentales y con la teoría institucional<sup>85</sup> abrazada por el TC en su jurisprudencia.

En efecto, tanto los derechos fundamentales como los procesos constitucionales poseen un doble carácter y una doble dimensión que se corresponde mutuamente. En relación con los derechos fundamentales, debemos decir que son derechos subjetivos líquidos y concretos, de otro lado, los derechos fundamentales son -al mismo tiempo- instituciones objetivas, es decir, un conjunto de valores que informan todo el ordenamiento jurídico<sup>86</sup>.

La cobertura constitucional del doble carácter de los derechos fundamentales la encontramos en la propia Constitución Política. La dimensión subjetiva de los derechos fundamentales está recogida en el catálogo de derechos fundamentales del artículo 2 y en los derechos procesales del artículo 139. En todos estos casos, lo que se reconoce son derechos exigibles por los particulares. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales la encontramos en los artículos 1, 44, 45 y 51 de nuestra Carta Política, los que señalan respectivamente que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, “Son deberes primordiales del Estado: ... garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen” y “La Constitución prevalece sobre toda norma legal”.

Esta teoría “institucional” recogida por la jurisprudencia del TC es doblemente relevante en el caso del derecho a la propiedad sobre sus territorios<sup>87</sup> y en el caso del derecho al medio

---

<sup>85</sup> Cesar Landa Arroyo, Estudios sobre Derecho procesal Constitucional, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2006, pág. 124.

<sup>86</sup> Según Giovanni Priori el derecho fundamental a la tutela judicial “tiene una doble naturaleza, pues por un lado desarrolla una función en el plano subjetivo actuando como garantía del individuo; y por el otro, desarrolla una función en el plano objetivo, asumiendo una dimensión institucional al constituir uno de los presupuestos indispensables de un Estado Constitucional”. Ver en: Para Giovanni Priori, la tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso, en: Revista Ius et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Año XIII N° 26, pág. 282.

<sup>87</sup> El origen de esta teoría se encuentra en la doctrina alemana y su autor es Peter Haberle. Para él, los derechos fundamentales tienen un doble carácter: el aspecto de derecho individual y el aspecto institucional. Presentan un aspecto de derecho individual pues son los derechos de la persona, cuyos titulares son los individuos. De otro lado, caracterizados por un aspecto institucional, ellos representan la garantía constitucional de esferas de vida reguladas y organizadas según principios de libertad. Ver Peter Haberle, La Libertad Fundamental en el

ambiente. Primero pues significa que este derecho tiene una doble dimensión, una subjetiva cuyo titular son los pueblos indígenas en el primer caso, y todas las personas en el segundo caso, derechos que le asignan la facultad de reclamar y exigir el cumplimiento de la misma, y de otra parte, una dimensión objetiva, que implica un deber del juez, de respetar la propiedad de las comunidades campesinas y nativas y el medio ambiente respectivamente. Sin embargo, en el juez no se agota la responsabilidad del Estado, esta alcanza por ejemplo al Poder Ejecutivo (art. 118 inciso 9 de la Constitución) y al TC.

Esta doctrina ha sido también recogida por nuestro TC e incorporada a nuestro ordenamiento constitucional, cuando señala que “detrás de la constitucionalización de procesos como el de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, nuestra Constitución ha reconocido la íntima correspondencia entre la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los derechos fundamentales y la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los procesos constitucionales, siendo que las dos vocaciones del proceso constitucional son interdependientes y se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte la violación del otro”<sup>88</sup>.

### **3. La fuerza normativa de los tratados internacionales de derechos humanos**

De igual modo, también forman parte del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado peruano, y su desarrollo jurisprudencial por tribunales internacionales, a cuya jurisdicción el Estado peruano se ha sometido como la Corte Interamericana de Derecho Humanos. La cobertura constitucional de la incorporación de estos instrumentos al parámetro constitucional son el artículo 3, 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución<sup>89</sup>.

La incorporación de los tratados internacionales de derecho humanos en el bloque de constitucionalidad implica en buena cuenta, la ampliación del contenido normativo de la constitución, constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual exige en los operadores jurídicos la aplicabilidad directa de los estándares

---

Estado Constitucional, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1987, pág. 163-164; En esa misma línea, para el actual presidente del Tribunal Constitucional los derechos fundamentales tiene un doble carácter constitucional: “como derechos subjetivos de la persona y como fundamento valorativo del orden institucional. De modo que los derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos. Ahora bien es, precisamente mediante la actuación estatal, aunque también de los particulares, que los derechos pueden ser desconocidos, desvirtuados o vaciados de contenido, ya sea por acción o por omisión”. Ver Cesar Landa Arroyo, Estudios sobre Derecho procesal Constitucional, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2006, pág. 125.

<sup>88</sup> Sentencia del TC recaída en el exp. N° 04853-2004-AA/TC, f.j. 33.

<sup>89</sup> “Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. “Artículo 55°. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. “Cuarta DFT. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

internacionales, y en buena cuenta, la ampliación del sistema de fuentes con las fuentes internacionales de producción de derecho.

Las consecuencias prácticas de esto será el reconocimiento del rango constitucional del Convenio 169 de la OIT en su condición de tratado internacional de derechos humanos. Según precisa el TC, *“habiéndose aprobado el Convenio N° 169 [...] su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”*. (STC N° 03343-2007-PA/TC, f. j. 31)

#### **4. La fuerza normativa de las sentencias del Tribunal Constitucional**

Este punto es sumamente importante para efectos de esta pedido de nulidad toda vez que los derechos de rango constitucional violados por las constancias de posesión, han sido desarrollados por las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo, las que desarrollan el derecho al territorio y a la propiedad de los pueblos indígenas.

Tres normas fundamentan la fuerza normativa de las sentencias del TC. Tenemos en primer lugar el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, el que señala de forma clara y precisa que *“Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación”* (subrayado nuestro).

En segundo lugar, los párrafos 2do y del 3er párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional, disposiciones que desarrollan la doctrina jurisprudencial, *“Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”*. (Subrayado nuestro).

En tercer lugar tenemos el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual desarrolla y regula los precedentes vinculantes, que si bien no han sido utilizados para casos de derechos de pueblos indígenas, no podemos obviar que constituye jurisprudencia constitucional con la mayor y más intensa fuerza normativa vinculante.

El TC al interpretar una disposición constitucional, está precisando el alcance de su naturaleza jurídica, y con ello está creando una norma constitucional que es concreción de la disposición constitucional. Está creando pues derecho constitucional, y sus sentencias, que contienen esas concreciones de los derechos constitucionales se convierten en fuente de



derecho constitucional<sup>90</sup>. Todo ello nos lleva a concluir que el desarrollo de los derechos constitucionales realizado a través de sus sentencias tiene rango constitucional<sup>91</sup>. Esta posición ha sido respaldada por el TC cuando precisa que *“Así, las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado”* (Exp. N.º 1333-2006-PA/TC, f.j. 11).

El fundamento de esta fuerza vinculante de las sentencias del TC descansa en el hecho que éste es el intérprete supremo de la Constitución y su jurisprudencia es de observancia obligatoria por todos los demás órganos jurisdiccionales del Estado. En este sentido, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 28301) dispone que este *“es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”*. Como lo ha señalado el TC, cuando mediante resoluciones judiciales se desconoce su jurisprudencia vinculante, procede presentar una demanda de amparo para la protección objetiva del ordenamiento jurídico constitucional. Al referirse al caso específico del amparo, el TC ha señalado que:

*“Asimismo resulta razonable el uso de un segundo proceso constitucional para restablecer el orden jurídico constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales que pueda verse afectado con una estimatoria de segundo grado, cuando las instancias judiciales actúan al margen de la doctrina constitucional establecida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto: a) las interpretaciones de la Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actuación a través de los procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales; b) las interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo VI del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal; c) las proscripciones interpretativas, esto es las “anulaciones” de determinado sentido interpretativo de la ley realizadas en aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución. Se trata en este supuesto de las sentencias interpretativas, es decir las que establecen que determinado sentido interpretativo de una disposición legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no debe ser usado por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que les corresponde”<sup>92</sup>.*

Por último, en otra oportunidad el TC ha establecido que: *“cuando se establece que determinados criterios dictados por este Tribunal resultan vinculantes para todos los jueces, no se viola la independencia y autonomía del Poder Judicial, reconocidas en el artículo 139º, inciso 2, de la Constitución, sino que, simplemente, se consolida el derecho a la igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico (artículo 2º, inciso 2); máxime, si es a partir del reconocimiento de su supremacía normativa que la Constitución busca asegurar la unidad y plena constitucionalidad del sistema jurídico y su consecuente aplicación (artículos 38º,*

---

<sup>90</sup> Cfr. Luis Castillo Córdova, El Tribunal Constitucional como creador de derecho constitucional. En; Luis Sáenz Dávalos, El amparo contra el amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Cuadernos de análisis y crítica a la justicia constitucional, N° 3, Palestra, Lima 2007, pág. 13 al 17.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> STC 4853-2004-PA/TC, f.j. 15.

45° y 51° de la Constitución). Debe recordarse que ninguna garantía conferida a un órgano constitucional tiene su última ratio en la protección del poder público en sí mismo, sino en asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1° de la Constitución)”<sup>93</sup>.

## **5. La jurisprudencia de la Corte IDH que reconoce derechos a los pueblos indígenas es de cumplimiento obligatorio**

Las sentencias de la Corte IDH son fuente de derecho que vincula a todos los poderes públicos y a los particulares en el Perú. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte IDH también vincula a los jueces peruanos cuando interpreta y desarrolla la Convención Americana de Derechos Humanos. El fundamento de esta en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual ha señalado que *“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”*.

Sobre esa base, el TC ha señalado que: *“al Tribunal Constitucional [...] no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutive, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”*<sup>94</sup>. Añade el TC que *“Tal interpretación [de la Corte IDH] conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos en la Región”*. (Exp. N° 0218-2002-HC, f.j. 2)<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> STC 0030-2005-PI/TC, f.j. 48.

<sup>94</sup> STC exp. N° 00007-2007- PI/TC, f.j. 36. N° es la única vez que lo ha reconocido, “De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos en la Región”. (STC exp. N° 0217-2002-HC/TC, f.j. 2).

<sup>95</sup> En otra oportunidad señaló que “La vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH no se agota en su parte resolutive (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal. [...] La cualidad constitucional de esta vinculación derivada

La consecuencia práctica del reconocimiento que los TIDH tienen rango constitucional y que se incorporan al ordenamiento jurídico, es que los jueces tienen la obligación jurídica de aplicar los TIDH directamente a los casos que resuelven, sin necesidad de ninguna intermediación legislativa o desarrollo legislativo previo. Y esto no solo lo ha reconocido la Corte IDH en su jurisprudencia sino el propio TC en su jurisprudencia vinculante.

Es más, el reciente Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia en material Constitucional y Contencioso Administrativo<sup>96</sup>, publicado el 2 de febrero del 2016 en El Peruano (ver decisión), pues precisamente se pronuncia sobre este tema. Efectivamente, la Corte Suprema, reunida en pleno jurisdiccional ha establecido la obligación de los jueces de todo el país, de realizar el control de convencionalidad cuando realicen el control difuso. Esto significa que al momento de aplicar las normas legales y las normas reglamentarias, los jueces deberán evaluar antes, si éstas y aquéllas son compatibles con los TIDH y con la jurisprudencia de la Corte IDH. Esto implica que, si una norma legal o reglamentaria es violatoria o incompatible con un TIDH o una sentencia de la Corte IDH, aquéllas no deberán ser aplicadas. Esto es lo que señala el Pleno.

## ***B. La violación del derecho de la comunidad de Santa Clara de Uchunya a la propiedad sobre sus territorios ancestrales***

### **1. El derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios**

El derecho a la propiedad se encuentra regulado en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT:

#### *Artículo 14:*

*1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.*

---

directamente de la CDFT de la Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrearán las sentencias condenatorias de la CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de este Tribunal y, en general, de todo poder público, evitar que este negativo fenómeno se reitere [...] En suma, por imperio del canon constitucional que es deber de este Colegiado proteger, se deriva un deber adicional para todos los poderes públicos; a saber, la obligatoria observancia tanto de los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú, como de la interpretación de ellos realizada en todo proceso por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. (2730-2006-AA, f.j. 12, 13 y 14).

<sup>96</sup> Como lo señala el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”.

*2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.*

*3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.*

Esta norma debe ser interpretada de conformidad con el artículo 17 del mismo Convenio, referida a las modalidades de transmisión de propiedad.

*Artículo 17:*

*1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos.*

*[...]*

*3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.*

Finalmente, también deberán de revisarse los artículos 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT que poseen disposiciones referidas al derecho de propiedad:

*Artículo 18:*

*La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.*

*Artículo 19:*

*Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: (a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. (Subrayado nuestro)*

Estas disposiciones del Convenio 169 de la OIT deben ser interpretadas a la luz de lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que reconocen también el derecho de propiedad y de posesión.

*Artículo 26*

*1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.*

*2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.*

*3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.*

*Artículo 27*

*Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se*



*reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.* (Subrayado nuestro)

El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, que es la norma fundamental que desarrolla el derecho de propiedad contiene varias reglas. En primer lugar, el artículo 14.1 reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Según la propia OIT, “*son tierras que los pueblos indígenas habitaron a lo largo del tiempo y que desean transmitir a las generaciones futuras. Es por ello que el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras se basa en la ocupación y en el uso tradicional, y no en el eventual reconocimiento o registro legal oficial de la propiedad de la tierra por parte de los Estados, en virtud de que la ocupación tradicional confiere el “derecho a la tierra en virtud del Convenio... independientemente de que tal derecho hubiera sido reconocido o no [por el Estado]”<sup>97</sup>.* (Subrayado nuestro)

La OIT también nos recuerda la necesidad de interpretar el artículo 14 del Convenio 169 junto con el artículo 7.1 del mismo cuerpo normativo. Esta norma explica que los pueblos indígenas tienen “*derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural*”. (Subrayado nuestro)

En relación con la antigüedad de la ocupación de las tierras por los pueblos indígenas la OIT ha señalado que “Las tierras de los pueblos indígenas pueden incluir en algunos casos aquellas tierras perdidas en forma reciente u ocupadas por los pueblos indígenas en una época más reciente (por lo general después de su desplazamiento de las tierras que ocupaban previamente)”<sup>98</sup>. Según lo expresado por los órganos de control de la OIT, “El hecho de que los derechos de tierras tengan un origen más reciente que el de los tiempos coloniales no es una circunstancia determinante. El Convenio fue redactado para reconocer situaciones en las que existen derechos sobre tierras que han sido tradicionalmente ocupadas, pero también podría abarcar situaciones en las que los pueblos indígenas tienen derechos sobre las tierras que ocupan o utilizan de alguna otra manera, bajo otras consideraciones”<sup>99</sup>.

## **2. Reglas vinculantes fijadas por la Corte IDH en materia de derecho al territorio de propiedad**

La Corte IDH establece las siguientes reglas: “1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial

---

<sup>97</sup> Comisión de Expertos, 73.ª sesión, Observación, Perú, publicación 2003 (párrafo 7). Citado por “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica”, op. Cit., pág. 94.

<sup>98</sup> “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica”, op. Cit., pág. 94.

<sup>99</sup> Consejo de Administración, 276.ª reunión, noviembre de 1999. Reclamación presentada en virtud del Artículo 24 de la Constitución de la OIT, México, GB.276/16/3 (párrafo 37). Citado por “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica”, op. Cit., pág. 94.

de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas”<sup>100</sup>.

### **3. La dimensión objetiva del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios obliga al Estado a titular estos territorios**

Como sabemos, “[l]os derechos fundamentales que la Constitución reconoce son efectivamente derechos subjetivos pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión de los derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes se apliquen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar dichos derechos”. (STC N° 03343-2007-AA, f.j. 6)

Esto implica que en el caso concreto del derecho de propiedad y el derecho a la titulación de las comunidades nativas, independientemente que estas pidan la titulación de su territorio ancestral, el Gobierno está en la obligación jurídica de titularlas. Como se puede apreciar de lo señalado por el TC, el derecho de las comunidades nativas a la propiedad sobre sus territorios ancestrales exige al Estado en concreto dos exigencias: primero aplicar todas las normas, incluso las que legislan de acuerdo con los derechos fundamentales en general, y de acuerdo con este derecho en concreto. En segundo lugar, exige del Estado una labor de protección de este derecho en concreto.

### **4. Las constancias de posesión y la titulación de los mismos en favor de parceleros desconocen la estrecha y singular relación con la tierra y las formas de organización propias**

Para la Corte IDH, siguiendo lo establecido en el artículo 13.1 del Convenio, la relación especial de los pueblos indígenas con la tierra, es una concreción y una manifestación del derecho a la identidad cultural, es decir, del derecho a ser “diferentes” del conjunto o de la mayoría del país. Efectivamente, los pueblos indígenas “*poseen autoridades tradicionales y formas de organización comunitaria propias, centradas en el acuerdo de voluntades colectivas y el respeto. Tienen sus propias estructuras sociales, económicas y culturales*”<sup>101</sup>. En palabras de la Corte IDH esta singularidad, esta especificidad cultural “*se expresa por la*

---

<sup>100</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128.

<sup>101</sup> Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C N°. 116, párr. 85.

*relación espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los recursos y el profundo respeto a la naturaleza*”<sup>102</sup>.

Como señaló con acierto la Corte IDH, *“La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”*<sup>103</sup>.

Es esta conexión entre derecho a la tierra y el derecho a la identidad cultural la que debe respetarse. Lo singular no solo está en la forma de relacionarse con la tierra, *“Las tradiciones, ritos y costumbres tienen un lugar esencial en su vida comunitaria. Su espiritualidad se refleja en la estrecha relación entre los vivos y los muertos, y se expresa a partir de la práctica de los rituales de entierro, como una forma de permanente contacto y solidaridad con sus antepasados. La transmisión de la cultura y del conocimiento es un rol asignado a los ancianos y las mujeres”*<sup>104</sup>.

En otra oportunidad la Corte precisó que *“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”*<sup>105</sup>.

La Corte lo ha dicho con otras palabras, *“La tierra significa más que meramente una fuente de subsistencia para ellos; también es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del pueblo Saramaka. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual. En este territorio, el pueblo Saramaka caza, pesca y cosecha, y recoge agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos”*<sup>106</sup>.

Estos diferentes pronunciamientos ayudan a entender con claridad, por qué se dice que la Corte IDH ha reinterpretado el concepto de derecho de propiedad ante de aplicarlo a los pueblos indígenas. Este concepto ha sido resignificado redimensionado de su concepción individual y privatista. Lo que hay que tener claro es que la relación ente los pueblos

---

<sup>102</sup> Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C N°. 116, párr. 85.

<sup>103</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N°. 125, párr. 135.

<sup>104</sup> Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C N°. 116, párr. 85.

<sup>105</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 149.

<sup>106</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N°. 82.

indígenas y sus tierras tradicionales tiene dimensiones que va más allá de la función meramente material o económica<sup>107</sup>. Como señala Rodríguez Piñero, esta vinculación del derecho de propiedad con la reproducción cultural de estos pueblos termina teniendo implicaciones territoriales que desde luego van más allá y desbordan la concepción “agrarista–distributiva” del derecho a la tierra definido en función de las necesidades de reproducción material<sup>108</sup>.

Nº se trata de pronunciamientos aislados, sino de una sólida línea jurisprudencial vinculante para los operadores del sistema de justicia y en general para los operadores políticos. Efectivamente, el concepto de territorio ha sido utilizado por la Corte IDH en diferentes fallos. Finalmente, la cobertura normativa de la protección de esta especial relación entre los pueblos indígenas la encontramos en el artículo 21 que recoge el derecho a la propiedad y que como sabemos, ha sido reinterpretada por la Corte IDH. Como lo señala la Corte IDH, *“la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana”*<sup>109</sup>.

Estamos entonces ante una interpretación evolutiva del término “bienes”, pues utiliza dicho artículo para entender que su alcance abarca *“los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”*<sup>110</sup>. En palabras de la Corte, “Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”<sup>111</sup>.

Podemos concluir esta parte señalando que el artículo 21 de la Convención Americana garantiza el goce de un bien inmaterial, tal como la “especial relación” que une a los pueblos indígenas con su territorio, que no se refiere meramente a la posesión o al aprovechamiento material sino que es *“un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”*<sup>112</sup>.

Cuando el Gobierno regional dispone de territorios ancestrales de comunidades nativas shipibas, no solo afecta el derecho de propiedad de la comunidad nativa Santa Clara de

---

<sup>107</sup> Luis Rodríguez-Piñero Royo, El sistema interamericano de derechos humanos y los pueblos indígenas, en Mikel Berraondo (Coord.), Pueblos Indígenas y derechos humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, 2006, pág. 187.

<sup>108</sup> *Ibidem*.

<sup>109</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C Nº. 125, párr. 66. Cfr. *Caso Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni*, *supra* nota 176, párr. 144, y *Caso IvcherBronstein*, *supra* nota 176, párr. 122.

<sup>110</sup> Mario Melo, Últimos avances en la justiciabilidad de los derechos indígenas en el sistema interamericano de derechos humanos, en Sur, Revista Internacional de Derechos Humanos, Número 4, Año 3, 2006, pág. 36.

<sup>111</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº. 79, párr. 144.

<sup>112</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº. 79, párr. 149.



Uchunya, sino otros derechos de rango constitucional de esta comunidad, ente los que destaca el derecho a la identidad, a la libertad religiosa, etc.

## **5. Las constancias de posesión y los títulos de propiedad a favor de parceleros desconocen que pueblos indígenas son propietarios de las tierras que tradicionalmente han ocupado**

Una manifestación y una concreción del contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus territorios ancestrales, es la regla que establece que la simple posesión ancestral sustenta su derecho de propiedad, es decir, estamos ante un derecho que no se funda en el reconocimiento del Estado o en su titulación, sino en la simple posesión ancestral.

### *Artículo 14*

*1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.*

*2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. (Resaltado nuestro)*

Sobre el particular, la Corte IDH reconoce que “*el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias – pero que carecen de un título formal de propiedad – la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro*”<sup>113</sup>. La Corte llegó a esa conclusión considerando los lazos únicos y duraderos que unen a las comunidades indígenas con su territorio ancestral. Pero lo que es más importante, a juicio de la Corte IDH, es “*la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica*”<sup>114</sup>. Para tales pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras<sup>115</sup>.

Como apunta Rodríguez Piñero “la posesión de hecho no debe ser entendida como una irregularidad jurídica convalidada por el mero transcurso del tiempo o por razones de justicia distributiva o benevolencia estatal”, no es una “posesión precaria”, sino un acto con implicaciones normativas para los poseedores según sus propios criterios de normatividad. Según la Corte IDH, “Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a

---

<sup>113</sup>Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, párr. 151.

<sup>114</sup> Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, párr. 149.

<sup>115</sup> Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, párr. 149.

vivir libremente en sus propios territorios”<sup>116</sup>, y de que este derecho les sea reconocido íntegramente y para la totalidad del territorio, mas no para algunas porciones minoritarias - dado su carácter agrícola y no forestal.

De otro lado, Corte también ha reconocido que la ocupación tradicional de una comunidad indígena y las tierras circundantes debe bastar para obtener reconocimiento estatal de su propiedad, siempre que así haya sido reconocido y respetado durante años por las otras comunidades vecinas. En tal sentido, los límites exactos de ese territorio, sólo pueden determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas<sup>117</sup>.

Un buen ejemplo de esto es el caso Moiwana. Para la Corte IDH, “debe también aplicarse a los miembros de la comunidad tribal que residía en Moiwana: su ocupación tradicional de la aldea de Moiwana y las tierras circundantes – lo cual ha sido reconocido y respetado durante años por los clanes N’djuka y por las comunidades indígenas vecinas [...] – debe bastar para obtener reconocimiento estatal de su propiedad. Los límites exactos de ese territorio, sin embargo, sólo pueden determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas”<sup>118</sup>.

En otra oportunidad, la Corte IDH en un caso de Nicaragua, luego de reconocer que una determinada comunidad tenía “*un derecho de propiedad comunal sobre las tierras donde actualmente habitan*”<sup>119</sup>, acota que “*los límites del territorio sobre los cuales existe tal derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y demarcados por el Estado. Esta situación ha creado un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la Comunidad AwasTigni en cuanto no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes*”<sup>120</sup>.

Por todas estas razones, la Corte sostendrá que “*los integrantes de pueblos indígenas y tribales deben obtener el título de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra. Este título debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica. A fin de obtener dicho título, el territorio que los miembros del pueblo Saramaka han usado y ocupado tradicionalmente debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con dicho pueblo y con los pueblos vecinos*”<sup>121</sup>. Añade que “*el reconocimiento estrictamente jurídico o*

---

<sup>116</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 149.

<sup>117</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C N°. 124, párr. 133.

<sup>118</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C N°. 124, párr. 133.

<sup>119</sup> Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, supra nota 171, párr. 153.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N°. 172, párr. 115. La Corte observa que en el caso de la *Comunidad Moiwana* se ordenó al Estado crear un mecanismo efectivo para la delimitación, demarcación y titulación del territorio tradicional de la comunidad Moiwana. Cfr. *Caso de la Comunidad Moiwana*, supra nota 77, párr. 209.

*abstracto de las tierras, territorios o recursos de los indígenas pierde verdadero significado cuando no se ha establecido ni delimitado físicamente la propiedad*”<sup>122</sup>.

La Corte IDH ha explicado, que “[c]omo producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”<sup>123</sup>. Agrega la CIDH que dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales “*existen aún sin actos estatales que los precisen*”<sup>124</sup>, o sin un título formal de propiedad<sup>125</sup>. Añade la CIDH que las acciones de reconocimiento oficial “*deben ser consideradas no como meras transferencias sino como procesos de ‘otorgamiento de prueba para que las comunidades pudiesen acreditar su dominio anterior’*”<sup>126</sup>, y no como el otorgamiento de nuevos derechos.

Precisa esta, que la titulación y demarcación territoriales se entienden así como actos complejos que no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos que pertenecen a los pueblos indígenas por razón de su uso consuetudinario<sup>127</sup>. En ese sentido, los órganos del sistema interamericano han explicado que se viola la Convención Americana al considerar las tierras indígenas como tierras estatales por carecer las comunidades de un título formal de dominio o no estar registradas bajo tal título<sup>128</sup>. No es idóneo para la protección de los derechos a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales,

---

<sup>122</sup> Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 75, párr. 143.

<sup>123</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 151. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 127. Citado por CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. cit., pág. 28.

<sup>124</sup> CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de AwasTingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 140(a). Citado por CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. cit., pág. 28.

<sup>125</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128.

<sup>126</sup> CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Capítulo X, párr. 19. Citado por CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. cit., pág. 29.

<sup>127</sup> El ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales no está condicionado a su reconocimiento expreso por el Estado, y la existencia de un título formal de propiedad no es requisito para la existencia del derecho a la propiedad territorial indígena bajo el artículo 21 de la Convención [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128]. La disociación entre el derecho consuetudinario de propiedad indígena y la existencia o no de un título formal de propiedad implica que el acto de titulación por parte de los Estados es un acto de reconocimiento y protección oficiales, que no constitutivo, de derechos. Consecuentemente, la posesión y uso consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser el criterio rector en la identificación y garantía de estos derechos a través de la titulación. Citado por CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. cit., pág. 29.

<sup>128</sup> CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de AwasTingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 140(j).

un sistema jurídico que sujeta su ejercicio y defensa a la existencia de un título de propiedad privada, personal o real, sobre los territorios ancestrales<sup>129</sup>.

Ciertamente, esto implica un cambio absoluto de perspectiva en nuestra manera de razonar jurídicamente, pues de conformidad con la Corte IDH, *“es la legislación nacional la que debe adecuarse al derecho consuetudinario para resolver los conflictos en torno a la propiedad de la tierra y el Estado deberá proveer los mecanismos institucionales y administrativos para hacer efectivo este derecho”*<sup>130</sup>. En otras palabras, las normas jurídicas del código civil y del ordenamiento jurídico deben ser interpretadas de conformidad y en consonancia con esta jurisprudencia, de lo contrario, en caso de ser imposible su interpretación armónica, estas normas deberán de ser dejadas de lado, en aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Todo esto ciertamente se traduce por cierto en la obligación de los Estados de proteger y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas mediante la adopción de recursos efectivos.

En el caso de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya es evidente que el Gobierno Regional está disponiendo de tierras que no le pertenecen, sino que son propiedad de las comunidades nativas shipibas como la de Santa Clara. Condicionar y supeditar la propiedad de las comunidades campesinas o nativas, en su condición de pueblos indígenas, a la existencia de títulos de propiedad escrito, es desconocer e incumplir la jurisprudencia de la Corte IDH

**6. Las constancias de posesión y los títulos de propiedad a favor de parceleros son un obstáculo para que el Estado cumpla con su obligación de demarcación, delimitación y titulación de los territorios de las comunidades nativas**

El derecho de propiedad de las comunidades nativas en su condición de pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, se concreta en el derecho de estos a la delimitación, demarcación y titulación de los territorios de los pueblos indígenas. N°s referimos al derecho de los pueblos indígenas a que se reconozca y se proteja su titularidad<sup>131</sup> sobre las tierras tradicionales, es decir su derecho a inscribir su derecho de propiedad en los registros públicos a efectos de darle seguridad protección y en consecuencia, una mejor y mayor protección jurídica. Se trata en definitiva de un derecho que se desprende del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras.

El fundamento normativo de este derecho es el artículo 14.2 y 14.3 del Convenio 169 de la OIT.

*Artículo 14:*

*2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.*

---

<sup>129</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N°. 172, párr. 111

<sup>130</sup> Claudio E. Nash Rojas, Los derechos humanos de los indígenas en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos. Puede ser revisado en <http://www.cd.h.uchile.cl/articulos/Nash/Ponencia%20UFRO-%20C.%20Nash.pdf>.

<sup>131</sup> Elizabeth Salmón, op. cit., pág. 59.



*3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. (Resaltados nuestros)*

En opinión de la OIT, “[a] fin de proteger de manera eficaz los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los gobiernos deben establecer procedimientos para la identificación de las tierras de los pueblos indígenas y medidas para proteger sus derechos de propiedad y posesión. Estos procedimientos pueden adoptar diversas formas, y en algunos casos, incluir medidas como la demarcación y otorgamiento de títulos y, en otros, puede llegar al reconocimiento de acuerdos de autogobierno o regímenes de coadministración”<sup>132</sup>.

Como lo reconoce este tratado, para la gobernabilidad de pueblos indígenas, es necesaria la titulación de tierras u otras formas de reconocimiento de propiedad, “[e]l proceso de identificación y protección de las tierras forma parte de las medidas coordinadas y sistemáticas del gobierno para garantizar el respeto por la integridad de los pueblos indígenas y asegurar las consultas adecuadas con respecto a las medidas propuestas”<sup>133</sup>.

Ciertamente, “[e]n la mayoría de los casos, la regularización de la propiedad de la tierra es una tarea compleja que abarca a diferentes actores y pasos, entre los que se incluyen la adopción de la legislación pertinente, la definición de los procedimientos adecuados y el establecimiento de los mecanismos institucionales necesarios para la implementación y resolución de reivindicaciones contrapuestas”<sup>134</sup>.

A partir de aquí la Corte deduce dos obligaciones estatales ineludibles: 1) La obligación de delimitar, demarcar y titular el territorio de propiedad de la Comunidad; y 2) la obligación de abstenerse de realizar, “hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”<sup>135</sup>.

En tal sentido, la no delimitación y demarcación de la integralidad de la propiedad del territorio ancestral, implica una violación al derecho de propiedad de la de los pueblos indígenas, tal como lo reconoce la propia Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni<sup>136</sup>. Esta regla jurisprudencial vinculante debe ser interpretada de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 del Convenio 169 que establece que “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

Incluso la Corte IDH, da un paso más adelante, pues señala que “una demora prolongada, [de la titulación de tierras] constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. La falta de razonabilidad, sin embargo, puede ser desvirtuada por el

---

<sup>132</sup> OIT. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica, op. Cit., pág. 95.

<sup>133</sup> Ibidem.

<sup>134</sup> Ibidem.

<sup>135</sup> Ibidem.

<sup>136</sup> Ibidem.

*Estado, si éste expone y prueba que la demora tiene directa relación con la complejidad del caso o con la conducta de las partes en el mismo*<sup>137</sup>. (Subrayado nuestro)

En definitiva pues, la ausencia prolongada de titulación de las tierras de una comunidad supone un claro límite a la efectividad del derecho de propiedad de la misma y frente a pretensiones concurrentes de propiedad por parte de terceros o del propio Estado<sup>138</sup>. Esta afirmación es coherente con lo señalado por la misma Corte cuando sostiene que no delimitar y demarcar ocasiona un clima de incertidumbre toda vez que no se sabrá con certeza hasta dónde se extiende geográficamente la propiedad de los pueblos indígenas, y cuáles serán los mecanismos lícitos para defenderlo<sup>139</sup>.

Todo esto se traduce en obligaciones muy concretas para el Estado, como garante de los derechos humanos, *“el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas”*<sup>140</sup>. Esto también implica que el Estado se debe *“abstener de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad AwasTingni”*<sup>141</sup>.

En relación con la efectividad de los procesos de titulación, la Corte IDH ha tenido una jurisprudencia reiterada y sostenida<sup>142</sup>. Los procedimientos para titular tierras comunales indígenas o tribales deben ser efectivos<sup>143</sup>, atendiendo a las características particulares del pueblo respectivo<sup>144</sup>. La ausencia de procedimientos efectivos, específicos y regulados para la titulación de las tierras comunales indígenas causa una incertidumbre general que no es compatible con los estándares impuestos por el artículo 25 de la Convención Americana<sup>145</sup>.

---

<sup>137</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C N°. 142, párr. 86.

<sup>138</sup> Rodríguez Piñero, op. cit., pág. 191-192.

<sup>139</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 153.

<sup>140</sup> Ibidem, párr. 164. Ver también los párrafos 173, punto 3 y 4 de la parte resolutive.

<sup>141</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 164. Ver también los párrafos 173 puntos 3 y 4 de la parte resolutive.

<sup>142</sup> Cfr. CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, pág. 37.

<sup>143</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 127. En dicha resolución se dice “En razón de lo expuesto, esta Corte considera que en Nicaragua no existe un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales indígenas”.

<sup>144</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párrs. 123. “Sin embargo, considera esta Corte que dicha Ley N°. 14 no establece un procedimiento específico para la demarcación y la titulación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo a sus características particulares.”

<sup>145</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 124. “También del resto del acervo probatorio del presente caso se desprende que el Estado no dispone de un procedimiento específico para la titulación de la

La falta de legislación interna que permita obtener el título sobre los territorios ancestrales indígenas no se suple con la mera disponibilidad de recursos judiciales que potencialmente puedan reconocer esos derechos; la mera posibilidad de reconocimiento judicial no es un sustituto para su reconocimiento y titulación reales: *“se debería hacer una distinción entre la obligación del Estado conforme al artículo 2 de la Convención para efectivizar, mediante legislación interna, los derechos allí consagrados y la obligación conforme al artículo 25 de proporcionar recursos efectivos y adecuados para reparar las presuntas violaciones a dichos derechos. (...) La Corte observa que aunque la llamada legislación judicial puede ser un medio para el reconocimiento de los derechos de los individuos, especialmente conforme a los sistemas de derecho común (common law), la disponibilidad de un procedimiento de este tipo no cumple, en sí mismo, con las obligaciones del Estado de efectivizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Es decir, la mera posibilidad de reconocimiento de derechos a través de cierto proceso judicial no es un sustituto para el reconocimiento real de dichos derechos. El proceso judicial mencionado por el Estado debe, entonces, ser entendido como un medio a través del cual se podrían efectivizar esos derechos en el futuro, pero que aún no ha reconocido, efectivamente, los derechos en cuestión”*<sup>146</sup>.

Las constancias de posesión y los títulos de propiedad a terceros, de territorios ancestrales de la comunidad nativa, constituyen no solo un incumplimiento de la obligación de titular los territorios de las comunidades, sino un desconocimiento de la regla que establece que las tierras que los pueblos indígenas ocupan tradicionalmente son propiedad de ellos. Las comunidades nativas no necesitan de saneamiento para ser propietarias, pues la mera posesión ancestral de ellas constituye título perfecto y suficiente que les atribuye el dominio sobre las mismas. Como suele expresarse, el Estado no titula a los pueblos indígenas para que sean propietarios, “sino porque ya lo son”. Por ello respecto a sus tierras no se puede predicar que no existan derechos perfeccionados. Pero además, el Gobierno no solo desconoce el derecho de propiedad sino que incumple la obligación de abstenerse de disponer de dichos territorios de pueblos indígenas no titulados.

#### **7. Las constancias de posesión y la titulación genera una amenaza a la seguridad jurídica de las comunidades nativas sobre su derecho a la propiedad sobre sus territorios**<sup>147</sup>

Las constancias de posesión en los hechos implican seguir postergando la obligación del Estado de titular los territorios de las comunidades nativas. En efecto, la situación caracterizada por el incumplimiento del Estado de su obligación de titular los territorios de las comunidades campesinas y nativas, ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo en

---

tierra comunal indígena. Varios de los testigos y peritos [...] que comparecieron ante la Corte en la audiencia pública sobre el fondo del presente caso [...] manifestaron que en Nicaragua hay un desconocimiento general, una incertidumbre de qué debe hacerse y ante quién debe gestionarse una petición de demarcación y de titulación”.

<sup>146</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº. 172, párrs. 104, 105.

<sup>147</sup> CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales : normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Disponible en: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf>.

su Informe N°.002-2014-DP/AMASPPI-PPI titulado “*Análisis de la Política Pública sobre Reconocimiento y Titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas*”. En este, reconoce que “*el Estado no cuenta con una política pública adecuada que aborde de manera integral el reconocimiento y titulación*” de tales comunidades en nuestro país debido a problemas que son de su completa responsabilidad.

La CIDH insiste en la necesidad que el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de sus territorios debe tener certeza jurídica. El marco jurídico debe proveer a las comunidades indígenas la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica de sus tierras<sup>148</sup>. Ello implica que el título jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre la tierra “*debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica*”<sup>149</sup>.

Añade que, “*La inseguridad jurídica sobre estos derechos hace a los pueblos indígenas y tribales particularmente vulnerables y proclives a conflictos y violaciones de derechos*”<sup>150</sup>. El derecho a la certeza jurídica de la propiedad territorial requiere que existan mecanismos especiales, rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos existentes sobre el dominio de las tierras indígenas<sup>151</sup>. Los Estados están, en consecuencia, obligados a adoptar medidas para establecer tales mecanismos<sup>152</sup>.

Como añade la CIDH, “*La certeza jurídica de los títulos de propiedad territorial también tiene manifestaciones prácticas que han sido resaltadas por el sistema interamericano de protección. La falta de delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas, aún cuando exista un reconocimiento formal del derecho a la propiedad comunal de sus miembros, causa “un clima de incertidumbre permanente” en el cual los miembros de las comunidades “no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes*”<sup>153</sup>.

Añade que, “*Un sistema legal que no reconoce el derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales en relación con su territorio mediante el otorgamiento de títulos de pleno dominio, sino que les reconoce simples intereses, privilegios, o permisos de uso y ocupación de las tierras a discreción del Estado, pone al Estado correspondiente en*

---

<sup>148</sup> CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 19

<sup>149</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N°. 172, párr. 115.

<sup>150</sup> 2 CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, Capítulo XI, párr. 57.

<sup>151</sup> CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 – Recomendación 3

<sup>152</sup> 5 CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, párr. 66 – Recomendación 4.

<sup>153</sup> Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C N°. 79, párr. 153.

*situación de incumplimiento de su deber de hacer efectivo a nivel interno ese derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención, en conexión con los artículos 1.1 y 2”<sup>154</sup>.*

En definitiva, las constancias de posesión crean las condiciones para seguir postergando la obligación del Estado de titular los territorios ancestrales de las comunidades nativas, y genera inseguridad jurídica en relación con el derecho a la propiedad sobre sus territorios de las comunidades nativas.

## **8. La inconstitucionalidad de las constancias de posesión y la titulación en favor de parceleros por parte de la DRAU**

Esto es lo que le viene ocurriendo con la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en el distrito Nuevo Requena, provincia Coronel Portillo, Región de Ucayali. Los directivos de esta comunidad han solicitado a la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) que les titule sus territorios ancestrales. La respuesta de la DRAU ha sido antes que titularlos, como se lo exige el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT, entregar “constancias de posesión” a colonos y mestizos que no pertenecen a la referida comunidad nativa, dentro del territorio ancestral de aquella.

Pero no todo queda ahí. Luego estos colonos han solicitado a la DRAU la propiedad de estos territorios, la cual se los ha concedido. Posteriormente estos han inscrito en Registros Públicos su propiedad, tal como se ha podido advertir en esta demanda para posteriormente terminar estos territorios en propiedad de la Empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. que se dedica a cultivar palma aceitera en grandes extensiones de terreno. De esta manera, comunidades nativas vienen siendo despojadas de sus territorios ancestrales que el ordenamiento jurídico les reconoce.

### **a. Análisis de las normas jurídicas que sustentan las constancias de posesión**

La pregunta entonces que debemos hacernos, es por la constitucionalidad y por la legalidad de estas “constancias de posesión” y por los títulos de propiedad que han permitido que la empresa Plantaciones de Pucallpa SA se quede con la propiedad de los mismos. Como se puede advertir en la imagen anterior, estas constancias se fundamentan en un acta de inspección ocular, y en tres normas: la Ley General de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ley 27444, el artículo 41.14 del D.S. N° 032-2008-VIVIENDA, y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley N° 27867.

La Ley General de Procedimientos Administrativos, no tiene ninguna norma específica sobre constancias de posesión. La Ley General de Gobiernos Regionales no tiene una norma específica que le faculte a entregar constancias de posesión. Lo que sí reconoce en el artículo 62, es la facultad de administración y adjudicación de tierras de los Gobiernos Regionales, pero solo sobre tierras propiedad de estos gobiernos subnacionales.

---

<sup>154</sup> Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C N°. 172, párr. 116.



*Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado.*

*a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.*

*b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.*

*c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente. (Resaltado nuestro)*

La norma es muy clara, los diferentes Gobiernos Regionales pueden “disponer” de sus territorios, es decir de los territorios que son de su propiedad. Ergo, no pueden disponer de los territorios que son de las comunidades nativas. En este caso, estamos ante territorios de propiedad de la comunidad de Santa Clara de Uchunya sobre la cual la DRAU no tiene derecho.

El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT es muy claro. La simple posesión ancestral de las comunidades nativas sobre sus territorios, el simple uso tradicional de sus territorios, sustenta jurídicamente su derecho de propiedad sobre los mismos. En otras palabras, los Gobiernos Regionales deben titular los territorios de las comunidades nativas, no para que recién sean propietarios, sino porque ya son propietarios. Es decir, la titulación no “constituye” el derecho sino que “reconoce” una realidad que le preexiste, que le antecede. La consecuencia es evidente, la Ley de Gobiernos Regionales no puede dar cobertura normativa y jurídica a las “constancias de posesión” expedidas por los Gobiernos Regionales.

#### *Artículo 14*

*1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.*

*2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.*

*3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.*

La otra norma que cita la DRAU para sustentar las constancias de posesión es el artículo 41.14 del D.S. N° 032-2008-VIVIENDA. Sin embargo, la DRAU incurre en un grave e inexcusable error. Este decreto supremo aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, que estableció el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. ¿Dónde está el problema? En que el artículo 3.1 del D.S. N° 032-2008-VIVIENDA establece de forma clara que ella no se aplica a comunidades nativas

#### *Artículo 3.- Ámbito de aplicación*

Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, sobre formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas en propiedad del Estado, de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos, de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso ocupados por asentamientos humanos, no serán aplicables en:

- 1) Los territorios de Comunidades Campesinas y Nativas;
- 2) Las áreas de uso público, forestales, de protección, las que constituyan sitios o zonas arqueológicas y aquéllas declaradas como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación;
- 3) Los terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos y de irrigación, o cualquier otro proyecto especial creado o por crearse;
- 4) Las áreas eriazas que se encuentran comprendidas en procesos de inversión privada, las declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado. (Resaltado nuestro)

La conclusión es evidente y cae por su propio peso. La DRAU está expidiendo certificados de posesión que tienen un vicio de nulidad, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque está disponiendo de territorios que no son del Gobierno Regional de Ucayali, sino de territorios que son de propiedad de las comunidades nativas, en aplicación del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. Y en segundo lugar, pues las normas que cita la DRAU para fundamentar las constancias de posesión que expide, no se aplican a las comunidades nativas. Y al tener un vicio de nulidad las constancias de posesión, carecen de validez las transferencias de propiedad realizadas sobre la base de constancias de posesión inválidas.

#### **b. La DRAU incumple jurisprudencia de la Corte IDH y Convenio 169 de la OIT**

El Estado en este caso el Gobierno Regional de Ucayali, no solo incumple su obligación de titular, sino que incumple la obligación de abstenerse de entregar y disponer de territorios que no ha titulado previamente como se lo exige la Corte IDH. En efecto, la Corte IDH establece dos obligaciones del Gobierno, que constituyen reglas de naturaleza vinculante<sup>155</sup>. Señala que los miembros de los PPII tienen derecho a que el Estado haga lo siguiente:

1. delimite, demarque y tittle el territorio de propiedad de la Comunidad; y
2. se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad<sup>156</sup>. (Resaltado nuestro)

Estamos ante una estructura montada desde el DRAU, que evidentemente tiene como objetivo, despojar a las comunidades nativas de sus territorios ancestrales de forma ilegal e inconstitucional, valiéndose para ello, del desconocimiento de las normas legales, de las comunidades nativas, a pesar de la expresa prohibición del artículo 17.3 del convenio 169 de la OIT prohíbe aprovecharse de este desconocimiento.

#### *Artículo 17*

---

<sup>155</sup> Ver artículo V del Título Preliminar del Código procesal Constitucional aprobado por Ley N° 28237.

<sup>156</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awast'ingni Vs. Nicaragua Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 153.

[...]

3. *Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.*

Es más, es el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de los Estados de sancionar la invasión de terceros en los territorios de los pueblos indígenas, así como el aprovechamiento de los recursos que hay en estos territorios.

#### *Artículo 18*

*La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.*

### **c. La invalidez de las constancias de posesión y de los títulos de propiedad**

Estamos en consecuencia antes constancias de posesión y ante títulos de propiedad que tienen un vicio de nulidad, es decir que son materialmente inválidas. Debemos recordar a los funcionarios de la DRAU el principio de legalidad, reconocido en la Ley N° 27444. Según el artículo IV inciso 1 numeral 1.1 del Título Preliminar, *“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”*. Las constancias de posesión, que no son otra que actos administrativos, solo serán válidas en la medida que sean compatibles con la Constitución Política y con las normas de rango constitucional como el Convenio 169 de la OIT. Como señala el Tribunal Constitucional (TC), *“el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales”*<sup>157</sup>.

## **9. El derecho de los pueblos indígenas a la restitución de sus territorios ancestrales**

Muchas comunidades campesinas y nativas han sido despojadas de sus territorios ancestrales, terminando estos, en manos de colonos, empresas extractivas y hasta del gobierno. Un buen ejemplo de esto lo constituye la comunidad de Santa Clara de Uchunya de Ucayali, la cual acaba de ser despojada de parte importante de su territorio ancestral, a través de *“constancias de posesión”* en favor de colonos, expedidas por el Gobierno Regional de Ucayali, apelando a normas que prohibían expresamente utilizar esta figura en tierras de comunidades nativas<sup>158</sup>. A través de estas constancias de posesión, las tierras ancestrales de estas comunidades nativas, han terminado en propiedad de Plantaciones de Pucallpa SAC, dedicada a la explotación de palma aceitera. ¿Existe un derecho constitucional de los pueblos indígenas (pueblos indígenas) a la restitución de sus territorios ancestrales?, ¿En qué casos o en que supuestos surge este derecho? ¿Cuál es la cobertura normativa o jurisprudencial de

---

<sup>157</sup> STC N° 3741-2004-AA, f.j. 15.

<sup>158</sup> Constancias de posesión un instrumento ilegal para el despojo. Disponible en: <http://www.servindi.org/actualidad-noticias/24/04/2016/constancias-de-posesion-un-instrumento-ilegal-para-el-despojo>

derecho?, ¿Cuál es el plazo para ejercer ese derecho, luego que han sido despojados? ¿Es oponible este derecho respecto de los tercetos que adquirieron de buena fe? ¿Procede la demanda de amparo contra los actos de despojo públicos o privados si pasaron 60 días luego de la ocurrencia de estos?

**a. ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho a la restitución integral?**

El derecho de los pueblos indígenas a la restitución del territorio integral es parte del contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus territorios<sup>159</sup>. Según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), forman parte del contenido del derecho de propiedad de los pueblos indígenas, *“la obligación de reconocimiento, delimitación, demarcación y protección efectiva del territorio, el derecho a la restitución del territorio ancestral; el derecho a la consulta previa, libre e informada, y en su caso, al consentimiento frente a decisiones que les afecten”*<sup>160</sup>. Añade la Comisión IDH que *“la jurisprudencia del sistema interamericano ha considerado, como parte esencial del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, el derecho a la restitución de las tierras y territorios ancestrales de los cuales se han visto privados por causas ajenas a su voluntad”*<sup>161</sup>.

**b. ¿Cuál es la cobertura constitucional del derecho a la restitución?**

Como sabemos, el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales, ha sido ampliamente desarrollado por la Corte IDH, a partir del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). En tal sentido, en lenguaje jurídico constitucional el derecho a la restitución sería una posición *ius fundamental*<sup>162</sup> del derecho a la propiedad de los PPII sobre sus territorios. No se trata de un derecho innominado sino de la manifestación innominada de un derecho constitucional expresamente reconocido en la CADH. También tiene cobertura normativa jurisprudencial,

---

<sup>159</sup> Este derecho ha sido ampliamente desarrollado en CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 128. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>, y en menor medida en CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC, 2015. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf>, párrafo 232.

<sup>160</sup> CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC, 2015. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf>, párrafo 232.

<sup>161</sup> CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC, 2015. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf>, párrafo 235.

<sup>162</sup> “Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas que (...) presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo”. Alexy, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático, D&L, Nro. 8, 2000, pág. 12 y ss.

en la sentencia de la Corte IDH en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay<sup>163</sup>. El fundamento del carácter vinculante de esta sentencia de la Corte IDH, está en el artículo V del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237 y la obligación de análisis de convencionalidad, según Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de la República<sup>164</sup>.

**c. ¿Cuál es el contenido del derecho constitucional a la restitución del territorio integral?**

Según la Corte IDH, *“el derecho a la restitución de las tierras y territorios ancestrales de los cuales se han visto privados por causas ajenas a su voluntad. Esto supone que los pueblos indígenas que pierdan la posesión total o parcial de sus territorios, mantienen sus derechos de propiedad sobre los mismos, y tienen un derecho preferente a recuperarlos, incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas”*<sup>165</sup>. La CIDH ha destacado la importancia de que los Estados adopten medidas dirigidas a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales<sup>166</sup>, y ha considerado que la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria<sup>167</sup>.

La Corte IDH ha insistido en que hayan sido privados de su posesión y/o propiedad contra su voluntad señalando que *“los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe”*<sup>168</sup>. Pero ha afirmado que, incluso en este supuesto, *“los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”*<sup>169</sup>.

---

<sup>163</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146.

<sup>164</sup> Corte Suprema establece obligación de los jueces de aplicar control de convencionalidad. Disponible en: <http://www.justiciaviva.org.pe/blog/corte-suprema-establece-obligacion-de-los-jueces-de-aplicar-control-de-convencionalidad/>

<sup>165</sup> CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC, 2015. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf>, párrafo 235.

<sup>166</sup> CIDH, Informe N°. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115..

<sup>167</sup> CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc.59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 16.

<sup>168</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128.

<sup>169</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128.



**d. ¿En qué casos surge el derecho a la restitución del territorio integral?**

Según la Comisión IDH, *“En los casos en que los gobiernos han efectuado grandes adjudicaciones de tierra o vendido territorios indígenas, a menudo con la gente todavía viviendo en tales tierras, los receptores difícilmente pueden considerarse adquirentes inocentes de buena fe, por su conocimiento de la existencia y reclamos de las comunidades indígenas. En efecto, tales colonos no indígenas a menudo han usado a los miembros de las comunidades como trabajadores mal remunerados o forzados. La validez de tales títulos es, por lo tanto, cuestionable como mínimo”*<sup>170</sup>. La Corte IDH insiste en que no es condición para ejercer el derecho a la restitución acreditar la posesión cuando precisa que *“la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas”*<sup>171</sup>. Añade la Corte IDH que *“los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal”*<sup>172</sup>. En palabras de la CIDH, *“ni la posesión material ni la existencia de un título formal de propiedad son condiciones para el derecho a la propiedad territorial indígena, como tampoco condicionan el derecho a la restitución de las tierras ancestrales, bajo el artículo 21 de la Convención”*<sup>173</sup>.

**e. ¿Es una condición para el ejercicio del derecho a la restitución haber tenido relación con el territorio ancestral?**

Una condición para que exista este derecho es que un PPII mantenga el contacto o relación con estos territorios ancestrales de alguna u otra manera. A juicio de la Corte IDH, la relación única con el territorio tradicional *“puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura”*<sup>174</sup>. Como señala la CIDH, *“Cualquiera de estas modalidades está protegida por el derecho a la propiedad protegido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y otorga el derecho a la restitución territorial a los pueblos indígenas y tribales correspondientes”*<sup>175</sup>.

---

<sup>170</sup> CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 124. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>.

<sup>171</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128

<sup>172</sup> Ibidem.

<sup>173</sup> CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 125. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>.

<sup>174</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 131.

<sup>175</sup> CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 128. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>, párrafo 128.

Hay que insistir en un punto sobre el cual acabamos de hablar, y es cuando la relación especial indígena con la tierra no pueda llevarse a cabo por razones ajenas a los PPII. Según la Corte IDH, esta relación *“se manifiesta entre otras en actividades tradicionales de caza, pesca y recolección, si los indígenas realizan pocas o ninguna de estas actividades dentro de las tierras que han perdido, por causas ajenas a su voluntad que se lo han impedido, el derecho a la restitución subsiste, hasta que dichas causas desaparezcan y se haga posible el ejercicio del derecho”*<sup>176</sup>. Es decir, estos *“se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que impliquen un obstáculo real de mantener dicha relación, como violencias o amenazas en su contra, se entenderá que el derecho a la recuperación persiste hasta que tales impedimentos desaparezcan”*<sup>177</sup>. Por lo tanto, *“ni la pérdida de la posesión material, ni las prohibiciones de acceso al territorio tradicional por los propietarios formales son obstáculos para la continuidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En suma, ni la pérdida de posesión ni la reducción o eliminación del acceso a la tierra hacen caducar el derecho a la restitución de las tierras ancestrales perdidas”*<sup>178</sup>.

#### **f. ¿Hay un plazo para ejercer el derecho a la restitución?**

La Corte IDH ha establecido que este derecho a la restitución de tierras no tiene un *“límite temporal”*, es decir, *“permanece indefinidamente en el tiempo”*<sup>179</sup>. Ha concluido que el derecho permanece, es decir subsiste, mientras subsista la relación fundamental con el territorio ancestral<sup>180</sup>, en sus propias palabras *“Mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá vigente, caso contrario, se extinguirá”*<sup>181</sup>.

#### **g. ¿Qué obligaciones le establece a los estados el derecho a la restitución del territorio integral?**

La Corte IDH ha precisado que *“una vez que se ha demostrado que el derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corresponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo indígena que las reclama”*<sup>182</sup>. El Estado tiene la obligación de adoptar *“acciones para efectivizar el*

---

<sup>176</sup>Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 132. Citado por CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, párrafo 127.

<sup>177</sup>Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 132.

<sup>178</sup>364 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 133, 134. Citado por CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, párrafo 127

<sup>179</sup>CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 128. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>,

<sup>180</sup>Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párrs. 126-131.

<sup>181</sup>Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 131. Ver en el mismo sentido: Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena XákmokKásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C N°. 214, párr. 112.

<sup>182</sup>Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 135. Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena

*derecho de los miembros de la comunidad sobre sus tierras tradicionales*”<sup>183</sup>. Para hacer efectivo el derecho a la restitución territorial, “los Estados deben proveer a los pueblos indígenas y tribales de recursos administrativos y judiciales efectivos e idóneos, que les presenten una posibilidad real de restitución material de sus territorios ancestrales”<sup>184</sup>. Esta obligación debe ser leída en consonancia con lo establecido en la Corte IDH cuando establece “el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 166)

**h. ¿Es oponible el derecho a la restitución del territorio ancestral a ante el tercero que adquiere de buena fe?**

La Corte IDH parte de una premisa, y es que “el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias”<sup>185</sup>.

Sobre esa base, la Corte IDH, reconociendo que en este tipo de conflictos habrá que ir de caso en caso, esta abre la posibilidad de limitar este derecho cuando estamos ante un tercero que de buena fe adquirió este derecho, siempre que haya adquirido legítimamente, es decir legalmente. No obstante, no se trata de una regla inflexible, es decir, que siempre el tercero que haya buena fe y legalmente las tierras de los PPII prevalecerán en su derecho, pues la Corte IDH, admite incluso en estos casos la posibilidad que los PPII recuperen su territorio. En palabras de la Corte IDH, que “los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe [...] los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido

---

XákmokKásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C N°. 214, párr. 122.

<sup>183</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 135 – subtítulo (iii)

<sup>184</sup> CIDH Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, pág. 128. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf>, párrafo 131.

<sup>185</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 138.

*trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”*<sup>186</sup>.

**i. ¿Procede el amparo para proteger el derecho a la restitución una vez vencido el plazo?**

Según el artículo 44 del Código Procesal de Constitucional, aprobado por Ley 28237, solo procede demanda de amparo antes de los 60 días luego de la ocurrencia del hecho lesivo. Una aplicación literal sugiere que luego de vencido ese plazo ya no podría exigirse el derecho a la restitución del territorio ancestral. En el caso de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, los contratos de posesión y las posteriores ventas de sus territorios ocurrieron largamente hace más de 60 días, en consecuencia, una posible demanda debería ser desestimada. No obstante, si se analiza bien se podrá advertir que estamos ante un derecho de naturaleza positivo, prestacional, que se concreta cuando el Estado “restituye” la propiedad al PPI del cual fue despojado. Tiene que hacer algo para que el derecho sea restituido. En palabras de la Corte IDH, *“una vez que se ha demostrado que el derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corresponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo indígena que las reclama”*<sup>187</sup>. Insistimos, se trata de una obligación prestacional pues el Estado tiene la obligación de adoptar *“acciones para efectivizar el derecho de los miembros de la comunidad sobre sus tierras tradicionales”*<sup>188</sup>. En consecuencia, estamos ante un derecho cuyo hecho lesivo es de naturaleza omisiva, con lo cual es de aplicación el inciso 5 del artículo 44 antes mencionado, el cual precisa que cuando el hecho lesivo es omisivo, no opera la regla general del plazo de 60 días, abriéndose la posibilidad de recurrir al amparo para la protección de este derecho constitucional.

**C. El derecho de las comunidades nativas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a la vida**

**1. El derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado: algunas aproximaciones a su reconocimiento jurídico**

La Constitución Política, en su artículo 2.22, consagra el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado en los siguientes términos:

*«Toda persona tiene derecho:*

*A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida» [resaltado nuestro].*

---

<sup>186</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 128.

<sup>187</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 135. Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena XákmokKásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C N°. 214, párr. 122.

<sup>188</sup> Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 135 – subtítulo (iii)

Igualmente, en términos generales, el derecho al medio ambiente ha sido reconocido en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así, el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, en su artículo 12.2.b, el *Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales*, en su artículo 11, y el *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*<sup>189</sup>, en su artículo 4.1 –que han sido debidamente suscritos y ratificados por el Estado peruano– señalan lo siguiente:

**«Artículo 12**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
  2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
    - b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente [...]
- [resaltado nuestro].

**«Artículo 11: Derecho a un Medio Ambiente Sano**

1. **Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.**
2. **Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente**» [resaltado nuestro].

**«Artículo 4**

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y **el medio ambiente de los pueblos interesados**» [resaltado nuestro].

Así, resulta claro que el derecho a gozar de un medio ambiente que sea adecuado y equilibrado ostenta rango constitucional, pues así lo ha consagrado no solo la Constitución Política, sino distintos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto, es oportuno señalar que la interpretación de los derechos constitucionales (o fundamentales) se realiza de conformidad con los tratados internacionales en materias de derechos humanos debidamente suscritos por el Estado peruano, en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, por lo que los mismos forman parte del derecho nacional.

Asimismo, no debemos desligarnos de los fines cardinales que persigue nuestro Estado (que también son plasmados en estos tratados internacionales), establecidos por la sociedad a través la voluntad del poder constituyente y que se consolidó en la carta constitucional: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Aunado a esto, debe leerse el conjunto de principios rectores de la actuación del Estado consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, a los que someteremos a mayor análisis posteriormente:

---

<sup>189</sup> Cabe señalar que este tratado internacional en materia de derechos humanos es plenamente válido para la valoración de los hechos en el caso concreto, pues la demandante es una comunidad nativa que constituye un pueblo indígena.



*Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.*

Es oportuno tomar en cuenta que la existencia digna de la persona humana exige como presupuesto material necesario un medio natural adecuado al logro del pleno desarrollo como sujeto con una dignidad que es, en el marco de un Estado constitucional y democrático de Derecho, como el Tribunal Constitucional ha precisado en los siguientes términos:

*En el Estado Democrático de derecho de nuestro tiempo ya no solo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables<sup>190</sup>.*

En relación con la justificación de este derecho, el Tribunal ha optado por «considerar al medio ambiente, equilibrado y adecuado, como un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de derechos humanos»<sup>191</sup>.

Sin embargo, llegados a esto punto corresponde preguntarnos: **¿qué entendemos por el medio ambiente?** La respuesta resulta importante, pues sobre lo que entendamos por medio ambiente deberá recaer la protección que le garantiza la Constitución Política. Al respecto del concepto de *medio ambiente*, el diccionario de la lengua española –obra de referencia de la Real Academia Española– incluye dos definiciones. En primer lugar, lo define como el «conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona»; de igual forma, le define como el «conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo».

A consideración del Tribunal Constitucional, el medio ambiente puede definirse como «el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven, de tal forma que en la noción de medio ambiente debe comprenderse tanto el entorno globalmente considerado –espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza, como son el aire, agua, suelo, flora, fauna– como el entorno urbano»<sup>192</sup>. De igual forma, este señala que «el medio ambiente, así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros»<sup>193</sup>. Además, el Tribunal indica que «[a] todo ello, habría que sumar los elementos sociales y culturales aportantes del grupo humano que lo habite. Tales elementos no deben entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, vale decir, en referencia a cada uno de ellos considerados individualmente, sino en armonía sistemática y preservada de grandes cambios»<sup>194</sup>.

---

<sup>190</sup>STC N.º 0964-2002-AA/TC, f.j. 9

<sup>191</sup>STC N.º 0964-2002-AA/TC, f.j. 8

<sup>192</sup> STC N.º 03448-2005-AA/TC, f.j. 2

<sup>193</sup>*Ibídem*

<sup>194</sup>*Ibídem*

En sentido similar, el Tribunal ha señalado que *«[e]l ambiente se entiende como un sistema; es decir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por ende, implica el compendio de elementos naturales –vivos o inanimados– sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los derechos humanos»<sup>195</sup>*.

En esta misma sentencia, bajo una novedosa visión ecocentrista, el Tribunal subraya que *«[e]l ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás seres vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del mundo exterior que rodean a los seres vivos y que permiten –de una manera directa o indirecta– su sana existencia y coexistencia»<sup>196</sup>* [subrayado nuestro].

Seguidamente, el Tribunal establece ciertamente que *«el medio ambiente, entendido sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, encuentra en el comportamiento humano una forma de acción y de creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana»<sup>197</sup>*.

Finalmente, con una mayor precisión biológica sobre su concepto, el Tribunal ha señalado que en el medio ambiente *«se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, los componentes bióticos, como la flora y la fauna, y los abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo, los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico»<sup>198</sup>* [resaltado nuestro].

A nivel del Derecho Comparado, revisten importancia los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español, el mismo que a través de la sentencia 102/1995, de 26 de junio de 1995, señaló entre otras cosas que el medio ambiente *«no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física sino un entramado complejo de las relaciones entre todos esos elementos»<sup>199</sup>*. En tal sentido, el alto tribunal español sostiene un concepto dinámico de medio ambiente, es decir, **como entorno vital conformado más que por los elementos considerados aisladamente, por las relaciones entre los distintos factores y elementos ambientales.**

## **2. La eficacia y el contenido constitucional protegido del derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado**

En este contexto, nos encontramos frente a un derecho exigible frente al Estado. Así corresponde observar que el derecho al medio ambiente, por su naturaleza prestacional (que

---

<sup>195</sup> STC N.º 0018-2001-AI/TC, f.j. 6

<sup>196</sup> *Ibidem*

<sup>197</sup> *Ibidem*

<sup>198</sup> STC N.º 0964-2002-AA/TC, f.j. 8

<sup>199</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional español, 102/1995, f.j. 6

genera obligaciones de hacer al Estado a favor de la población), es un derecho económico, social y cultural (DESC). N° obstante, este no constituye «una norma carente de contenido jurídico vinculante, compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos»<sup>200</sup> –como se presumió cuando la Constitución era entendida como una mera norma política– sino una norma jurídica; es decir, «una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto»<sup>201</sup>. Este es el fundamento teórico del principio de supremacía normativa de la Constitución.

Las normas constitucionales, a la luz de la doctrina constitucional, pueden dividirse en dos tipos: reglas y principios. Estas, normas-regla y normas-principio, se distinguen por diversos criterios, entre los que destacan el estructural y el cualitativo, según señala el profesor Landa Arroyo<sup>202</sup>. Así, las primeras están compuestas de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica y representan mandatos definitivos (se les sigue o no, no existen fórmulas intermedias); mientras tanto, en las segundas no es factible identificar un supuesto de hecho o una consecuencia jurídica y representan *mandatos de optimización*. Esto quiere decir que las normas-principio generan la obligación de dar cumplimiento a una regla jurídica en la mayor medida posible, tomando en consideración las posibilidades jurídicas y reales existentes, debiendo dársele cumplimiento en forma gradual.

En ambos casos, el Estado –cuando es el sujeto activo de la relación jurídica constitucional– no podrá evadirse de su obligación dar cumplimiento a las normas constitucionales, sin interesar su naturaleza, pues, incluso cuando se trate de normas que contienen derechos de carácter prestacional, existe cierto espacio de su contenido constitucional protegido que es de exigibilidad inmediata a los poderes públicos.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en consonancia con la doctrina expuesta por Ronald Dworkin y Robert Alexy, ha señalado que «[l]a distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre normas regla y normas principio. Mientras que las primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización»<sup>203</sup>.

En forma similar, como señalamos, el Tribunal ha señalado que incluso los derechos que requieren asistencia legal para la delimitación de su contenido constitucional protegido deben ser cumplidos mínimamente por el Estado a través de medidas concretas, en aras de la protección de la persona humana, pese a no tratarse de derechos de aplicación inmediata. Así, el Tribunal ha indicado lo siguiente:

*Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una*

---

<sup>200</sup> STC N.º 05854-2005-AA/TC, f.j. 3

<sup>201</sup> *Ibidem*

<sup>202</sup> Landa Arroyo, César (2014). *Naturaleza jurídica de los recursos forestales y de fauna silvestre: marco legal-administrativo y análisis de los vacíos y contingencias legales*. Lima: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, p. 7

<sup>203</sup> STC N.º 01417-2005-AA, f.j. 11

*interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental*<sup>204</sup>.

Una vez analizados la naturaleza y la eficacia de los derechos fundamentales, nos corresponde referirnos al derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de su vida. Evidentemente, este es una norma-principio, pues persigue la realización de un estado ideal de cosas<sup>205</sup>: un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de la persona, lo que significa un mandato de optimización para el Estado, quien ha asumido el deber de garante de su vigencia.

Acto seguido, debe delimitarse el contenido constitucional protegido de este derecho. Al respecto, el Tribunal, a través de su jurisprudencia<sup>206</sup>, ha señalado que este se compone de dos elementos: **a) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.**

En relación con el primer componente, el Tribunal ha precisado que *«el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1º de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido»*<sup>207</sup>.

En relación con el segundo componente de este derecho, el Tribunal hace referencia a la obligación del Estado de protegerlo en forma efectiva, en su rol de garante; así, *«[e]l derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente»*<sup>208</sup>.

En este contexto, la obligación del Estado no se materializa en acciones dispersas y aisladas, sino que le impone al Estado la obligación de establecer una política nacional en favor del medio ambiente, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política. Según esta norma, *«[e]l Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales»*.

Para el Tribunal, *«[e]l artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones*

---

<sup>204</sup> STC N.º 01417-2005-AA, f.j. 12

<sup>205</sup> Landa Arroyo, *op. cit.*, p. 7

<sup>206</sup> STC N.º 03510-2003-AA/TC, f.j. 2.d

<sup>207</sup> *Ibidem*

<sup>208</sup> *Ibidem*

*que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia»<sup>209</sup>.*

Esta obligación estatal: la de preservar el medio ambiente, supone dos obligaciones; la primera, abstenerse de adoptar acciones que afecten el medio ambiente (es otras palabras, la dimensión subjetiva del derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado para la vida) y; la segunda, el deber de adoptar todas las medidas necesarias para su protección (en otras palabras, la dimensión objetiva de este derecho).

En relación con la primera de estas obligaciones, el Tribunal Constitucional ha precisado que *«[en] su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana»<sup>210</sup>.*

Sobre la segunda de las obligaciones, el Tribunal ha señalado inteligentemente que *«[e]n su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado»<sup>211</sup>.*

### **3. Los bosques como objeto de protección constitucional en el Perú**

El 57% del territorio nacional está cubierto por bosques; lo cual significa la existencia de 73'280,424 millones de hectáreas de bosques en el Perú<sup>212</sup>. Estos bosques albergan vida y representan buena parte de la reserva ambiental que soporta el equilibrio ecológico de nuestro país, motivo por el que son objeto de protección constitucional, la más relevante que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

#### **a. La cobertura normativa de la protección a los bosques en el Perú**

La Constitución Política del Estado, en su artículo 66, hace referencia al régimen jurídico al que pertenecen los recursos naturales. Al respecto, la disposición constitucional señala: *Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.* En tal sentido, los recursos naturales dentro del territorio nacional se someten a la soberanía del Estado, a quien corresponde su dominio eminente<sup>213</sup>.

---

<sup>209</sup> STC N.º 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.f

<sup>210</sup> STC N.º 0018-2001-AI/TC, f.j. 10

<sup>211</sup> STC N.º 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.c

<sup>212</sup> Ver la Memoria Descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal del Perú – MINAM 2012.

<sup>213</sup> Hundskopf Exebio, Oswaldo (2006). *La Constitución Comentada*, tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, p. 919.



Cabe señalar que el dominio eminente no implica que la propiedad de los recursos naturales peruanos corresponda al Estado, sino que estos pertenecen a la Nación en general y que es el Estado quien vela por su correcta administración. Al respecto, el profesor Landa Arroyo señala: «[E]n el régimen de dominio eminente no hay propiedad, los bienes de dominio eminente pertenecen a la Nación en su conjunto, correspondiéndole al Estado en nombre de la Nación, según lo establecido en la propia Constitución, fijar las reglas, vía ley orgánica, para su aprovechamiento sostenible»<sup>214</sup>.

Esta precisión es relevante, en tanto orienta la actuación estatal para con la administración de nuestros recursos naturales, dado que la circunscribe a la búsqueda del favorecimiento de los intereses generales de los ciudadanos en un marco que debe privilegiar las formas de su aprovechamiento sostenible. Que los recursos naturales no sean objeto de dominio público, sino eminential, hace esto posible.

La noción de recursos naturales, según señala el profesor Hundskopf, se distingue de la que concierne a los elementos naturales<sup>215</sup>. La relación entre ambas es de género-especie. Es decir, todos los recursos naturales son elementos naturales, empero no todos los elementos naturales constituyen recursos naturales. Los primeros reúnen el conjunto de cosas que se encuentran presentes en la naturaleza, mientras que los segundos son únicamente aquellas cosas que sirven, por su utilidad, al ser humano en la satisfacción de sus necesidades<sup>216</sup>. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional (TC), como intérprete supremo del texto constitucional, ha definido el término de *recursos naturales* de la siguiente forma:

*Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar*<sup>217</sup>.

La Constitución Política ofrece protección a los recursos naturales. Evidentemente, estos engloban a los bosques, los que son recursos naturales forestales. Sin embargo, la Constitución no se agota en esta norma, pues también consagra el deber estatal de promoción del uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica en el país. Así, las disposiciones contenidas en sus artículos 67 y 68 señalan, respectivamente: *El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.*

---

<sup>214</sup> Landa Arroyo, César (2014). *Naturaleza jurídica de los recursos forestales y de fauna silvestre: Marco legal, administrativo y análisis de los vacíos y contingencias legales* [en línea]. Revisado el 28/4/2016. Disponible en: <http://goo.gl/JH0ACS>, p. 15.

<sup>215</sup> Hundskopf Exebio, *op. cit.*, 918.

<sup>216</sup> *Ibidem*.-ñ' {-

<sup>217</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0048-2004-AI/TC, fundamento 28.

En el caso de la Amazonía, dada su importancia ecológica, el artículo 69 de la Constitución Política ha señalado muy especialmente lo siguiente, con respecto a los deberes estatales para con el medio ambiente y los recursos naturales: *El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.*

Llegados a este punto, es claro que los bosques, en tanto recursos naturales, constituyen un bien jurídico de relevancia constitucional. Consecuentemente, estos son susceptibles de protección por parte del Estado mediante los propios mecanismos previstos en la Constitución Política. La empresa Plantaciones de Pucallpa SAC ha deforestado miles de hectáreas de bosques primarios, y seguirá haciéndolo si es que no se le detiene.

#### **b. Los bosques y el medio ambiente como bien y derecho constitucional**

Los bosques representan ecosistemas en sí mismos; es decir, estos conforman el medio ambiente. Su presencia resulta indispensable para el desenvolvimiento normal de la vida, especialmente la humana. En palabras del profesor Landa Arroyo: *«[E]s indudable que estos bienes constitucionales, los recursos forestales y de fauna silvestre, integran lo que se denomina el medio ambiente, es decir, el medio en el cual el ser humano se desarrolla y desenvuelve. Este, como tal, constituye otro bien constitucional de suma importancia, ya que es indelegable del ser humano el medio, el espacio de la realidad que ocupa»*<sup>218</sup>.

En este sentido, el profesor refiere además que, en tanto bien constitucional, existe una dimensión subjetiva con respecto a los recursos forestales y de fauna silvestre (lo cual, por supuesto, agrupa a los bosques)<sup>219</sup>. Esta dimensión subjetiva se materializa en un derecho fundamental y es, precisamente, aquel consagrado en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política: *el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida*. La forma idónea de proteger los bosques, y en general los recursos naturales forestales y de fauna silvestre, se circunscribe a la defensa constitucional del medio ambiente.

Cabe señalar que este derecho fundamental corresponde al grupo de los llamados *derechos prestacionales*, que representan normas-principio y constituyen, según el profesor Robert Alexy, mandatos de optimización que se sujetan a su cumplimiento gradual. N° obstante, poseen un núcleo duro e irreductible que garantiza un ámbito de protección mínimo, pues, de lo contrario, debiéramos reconocer de forma intrínseca que la Constitución es una norma de valor eminentemente jurídico, y no político, pues es incapaz de desplegar sus efectos normativos directamente sobre situaciones concretas.

A este respecto, el TC ha señalado que *«[l]a distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre normas regla y normas principio. Mientras que las primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos*

---

<sup>218</sup> Landa Arroyo (2014), *op. cit.*, p. 17.

<sup>219</sup> *Ibidem*.

*de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización<sup>220</sup>».*

De esta forma, la Constitución, al ofrecer protección a los bosques, como parte del medio ambiente, de la más importante trascendencia, ofrece protección de sus dos componentes que conforman su contenido constitucional protegido, delineado mediante su jurisprudencia pacífica: a) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.

En conclusión, los bosques, al formar parte del medio ambiente, representan un objeto de protección constitucional, en tanto son un bien y también un derecho constitucional. Esta protección, reforzada y de la más elevada posición jerárquica, permite la posibilidad de su judicialización mediante procesos constitucionales. Este es un hecho de suma importancia, especialmente en este caso, donde la protección de los bosques hasta ahora no ha funcionado de forma idónea, a pesar de la depredación que viene ocurriendo en el caso de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, donde se viene violando y amenazando los ecosistemas.

#### **4. La ejecución de actos de depredación de bosques y superficies boscosas es una vulneración del derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado**

El Tribunal Constitucional ha precisado cuando estamos ante la violación de este derecho. Precisa que esta se verifica cuando hay una “alteración sustantiva” entre los diferentes elementos que componen el medio ambiente. Es decir, cuando sus elementos se dejan de interrelacionar de manera natural y armónica. Según este:

*«el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente»<sup>221</sup>. (Resaltado nuestro)*

En el caso del territorio ancestral de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, no solo han alterado la interrelación sino, que han deforestado, es decir, han desaparecido el bosque, y todo ecosistema que ahí existía incluyendo flora y fauna. En este caso, como el MINAGRI lo ha reconocido, se ha deforestado grandes extensiones de bosques primarios, se viene realizando actividad de explotación de palma aceitera, a pesar de los graves impactos que esta genera, y a pesar de que no cuenta con los permisos necesarios, a tal punto, que el MINAGRI ordenó suspender sus actividades.

En el caso concreto, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya demanda ante el juzgado que preside, la afectación de sus derechos fundamentales a partir de los actos de depredación progresiva de bosques y superficies boscosas ejecutados por la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C dentro de sus territorios ancestrales. De igual forma, también los realizan en áreas colindantes a sus territorios y cuyas consecuencias les perjudican muy directamente. El

---

<sup>220</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01417-2005-AA, fundamento 11.

<sup>221</sup> *Ibidem*

sustento de la ejecución de estos actos se encuentra en los contratos de compraventa celebrados entre la empresa y 222 colonos, *parceleros*, quienes previamente habían obtenido certificados de posesión y conversiones a propiedad, por los cuales se enajenó irregularmente la propiedad comunal de la comunidad nativa demandante.

Además, el contrato fue suscrito con el propósito expreso de realizar monocultivos de palma aceitera. Esto significa que los colonos, *parceleros*, consintieron la plantación de cultivos de palma aceitera en áreas cubiertas por bosques y otras formaciones boscosas, donde existe un alto porcentaje de bosques primarios o nativos –también denominados *bosques vírgenes*–; es decir, «bosques intactos y con un alto grado de naturalidad que nunca ha sido explotado, fragmentado, o influenciado directa o indirectamente por el hombre».

Al respecto, no debe dejar de observarse el deber estatal de protección de los recursos naturales, como son los bosques, que forman parte del patrimonio de la Nación, y cuya entrega a particulares para su explotación irresponsable, mediante la plantación de cultivos como la palma aceitera, supone el incumplimiento de este deber, puesto que se destruye la diversidad biológica del área de explotación agroindustrial. De igual forma, esto significa el incumplimiento del deber estatal de promoción de la Amazonía, que ha merecido una protección especial y adicional por parte de nuestro legislador constituyente en la Constitución Política.

En este caso, MINAGRI ha acreditado el daño ambiental que está generando Plantaciones de Pucallpa SAC. Esto se puede advertirse de la lectura de la Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA.

La conclusión es evidente. Está probado que existen actos de depredación de bosques y superficies boscosas, que suponen la destrucción de recursos naturales y ecosistemas, lo cual la puesta en riesgo de la supervivencia de distintas especies animales y vegetales.

De igual forma, además de encontrarnos frente al incumplimiento de deberes del Estado de conservación ecológica y promoción del desarrollo sostenible, los hechos significan una gravísima afectación al medio ambiente, que es un bien jurídico consagrado en la Constitución Política, pues se reemplazan bosques enteros para, en su lugar, cultivar palma aceitera; para esto, se deforesta, mediante la tala e incluso la quema, miles de hectáreas de bosques amazónicos y así poner en marcha un tipo de agroindustria no sostenible, que destruye la flora y fauna locales (en perjuicio evidente contra el hábitat de la comunidad nativa demandante), como ocurre en el Sudeste Asiático, donde el cultivo de palma aceitera ha dejado una huella profundísima de deforestación, extinción de especies animales y vegetales y esclavitud.

Así, el cultivo irresponsable de palma aceitera, como ocurre en el caso concreto, es una amenaza nociva que se cierne paulatinamente sobre la Amazonía, cuyos efectos en el mediano y largo plazo habrán de generar daños irreparables en el medio ambiente nacional y que harán peligrar la estabilidad ecológica del país, arriesgando temerariamente el bienestar de las generaciones próximas de peruanos y peruanas y, tratándose del bosque tropical más extenso del mundo, de una de sus áreas con mayor biodiversidad y la que posee la mayor cantidad de agua dulce en estado líquido, el bienestar de la propia humanidad.

En tal sentido, y tratándose de afectaciones que pueden ser reparadas mediante la acción célere y eficaz del Estado –y de la empresa, pues fue quien materialmente realizó los actos que han afectado derechos fundamentales– solicitamos a su despacho ordenar a los demandados la restauración ambiental inmediata del área depredada en el mayor grado de lo posible, procurando la *restitutio in integrum*, pues solo esta permitirá garantizar en forma plena la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la comunidad nativa demandante. Al respecto, la jurisprudencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tajante:

*La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral*<sup>222</sup>[resaltado nuestro].

En el caso concreto, la comunidad nativa demandante –como parte de las medidas de reparación que disponga tomar su despacho– le solicitan ordenar que el medio ambiente local afectado sea restaurado, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales, como dispone el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, acerca de la propia finalidad del proceso constitucional de amparo.

En conclusión, en el caso concreto, ocurrió la celebración de 222 contratos de compraventa entre colonos, *parceleros*, y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. Cabe señalar que estos obtuvieron irregularmente sus *derechos* sobre las tierras que enajenaron en base a certificados de posesión y conversiones a propiedad inconstitucionales, por darse sobre el territorio ancestral de la comunidad nativa demandante.

En la superficie ilegítimamente arrebatada a la comunidad, sobre el cual se había solicitado sin éxito su reconocimiento formal, se viene desarrollando actividad de monocultivos de palma aceitera sobre bosques primarios.

La palma aceitera, para su aprovechamiento agroindustrial, exige tierras aptas para cultivos; no obstante, esta se ha realizado en bosques y superficies boscosas, entre los que se encuentran grandísimas extensiones de bosques primarios. Esta decisión es un desastre ecológico, pues la deforestación de bosques y la consiguiente destrucción de hábitats naturales y puesta en riesgo de la supervivencia de especies animales y vegetales suponen indudablemente un rompimiento trágico del equilibrio ambiental en dicho sector de la Amazonía.

Esto, sumado al grave clima de precariedad en la realización de las actividades económicas de la empresa y de las condiciones de vida locales, supone la violación del derecho fundamental al medio ambiente adecuado y equilibrado. Asimismo, el hecho de haber

---

<sup>222</sup> Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. Reparaciones y costas. Sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 26



enajenado la propiedad privada comunal de las comunidades nativas injustificadamente supone una violación al derecho a la propiedad comunal, la posesión ancestral y el territorio.

Asimismo, se vulnera el derecho fundamental a la identidad cultural, pues los elementos componentes del ecosistema (como el río y el bosque), lesionados enormemente por la actividad de la empresa, representan figuras importantes en su cosmovisión, propia de los pueblos indígenas amazónicos, como los shipibo-conibo. Evidentemente, la cosmovisión de un pueblo indígena es parte integrante de su identidad cultural, que se encuentra tutelada por el orden constitucional peruano.

Adicionalmente, los hechos lesivos suponen el incumplimiento de las obligaciones del Estado referidas a la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía y a la promoción del desarrollo de la biodiversidad, pues, evidentemente, la indiferencia del Estado frente a actividades que depredan el medio ambiente y causan la destrucción de la Amazonía quebranta la voluntad del legislador constituyente consagrada en el texto constitucional. Por lo tanto, se han vulnerado además del deber de protección de los sectores que sufren cualquier exclusión –pues los pueblos indígenas han sido históricamente poblaciones vulnerables– y del principio de garantía de la plena vigencia de los derechos humanos.

**10. Los informes de órganos técnicos especializados en materia ambiental, como el MINAGRI, son idóneos para determinar la existencia de amenaza o de violación del derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida**

Según la propia jurisprudencia del TC los órganos estatales especializados en materia ambiental son los “*órganos auxiliares*” encargados de emitir opinión técnica acerca de la existencia de violación o de la amenaza cierta e inminente de la violación del derecho a disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Es decir, la opinión técnica de estos órganos del Estado especializados en materia ambiental tiene fuerza probatoria suficiente para acreditar la violación del mencionado derecho.

En efecto, de conformidad con la regla desarrollada por la línea jurisprudencial del TC fijadas en las sentencias 01939-2011-PA/TC, 04223-2006-AA y 00921-2003-AA/TC, y reiterada en el fundamento jurídico 35 de la sentencia 00470-2013-AA, “*es claro que en un proceso constitucional como el de autos, el auxilio de organismos técnicos especializados en materias cuyo conocimiento le es ajeno a los integrantes del Colegiado, resulta indispensable ser desvirtuado, sino que requiere que el juez pueda otorgarle un alta valoración probatoria en lo que a su especialidad re refiere, salvo, claro está, que no haya reunido los requisitos formales y materiales que precisamente generan su legitimidad*”. (STC 00470-2013-AA, f.j. 39)

Añade el TC en relación con un informe presentado por el SERNANP en el caso específico que resuelve el TC, “*Que dichos informes los presente el colegio emplazado no significa que sean de parte, pues los ha presentado, justamente, en cumplimiento de las disposiciones legales que establecen que el SERNANP es el órgano competente, tal y como lo denunciaban a fojas 121 al plantear la demanda y, máxime cuando el informe determinante ha sido el requerido por el juez de primera instancia*”. (STC 00470-2013-AA, f.j. 40)

En el caso que nos ocupa existe un informe del Ministerio de Agricultura que da cuenta de la violación al medio ambiente por parte de Plantaciones de Pucallpa SAC, el cual es el órgano del Estado competente en el sector.

## **V. ANEXOS**

Adjuntamos a la presente demanda la siguiente documentación:

1. Copia de los DNI de los demandantes (Anexo N° 1);
2. Copia de Resolución N° 145-75-OAE-ORAMS-V con fecha 27 de agosto de 1975. (Anexo N° 2);
3. Copia de Resolución Ministerial N° 733-86/AG/DR/XIII-UC. (Anexo N° 3);
4. Captura de la web de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura (Anexo N° 4);
5. Copia de mapa del *Plan del curso del Río Huallaga y Ucayali y de la pampa del Sacramento* elaborado por el P. Fray Manuel Sobreviela, guardián del colegio Ocopa en el año 1799 (Anexo N° 5);
6. Copia de carta de 25 de setiembre de 2015, donde las autoridades de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya solicitan la ampliación de su titulación al GRU (Anexo N° 6);
7. Copia de Resolución Directoral Regional N° 591-2015-GRU-DRA (Anexo N° 7);
8. Copia del Informe N° 955-14-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA/AHR-ACF-TAW-95350-13 (Anexo N° 8);
9. Copia de Informe N° 1207-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA/REA-95350-13. (Anexo N° 9);
10. Copia de Resolución Directoral N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA que suspende actividades de Plantaciones Ucayali SAC (Anexo N° 10);
11. Copia de Resolución Directoral N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAA ordena suspender las actividades de la Empresa Cacao del Norte (Anexo N° 11);
12. Carta de la RSPO a Plantaciones de Pucallpa SAC exigiendo que suspenda sus actividades de explotación mientras no acredite el cumplimiento de buenas prácticas, con traducción de la misma (Anexo N° 12);
13. Copia de resolución de fecha 4 de marzo de 2016, emitida por el 9° Juzgado Constitucional de Lima que concede medida cautelar en el Expediente 14476-2015-63-1801-JR-CI-09 (Anexo N° 13);

14. Copia del mapa de la comunidad con sus diferentes sectores (Anexo N° 14-A);
15. Copia del mapa de la comunidad en territorio indígena, según fuentes históricas (Anexo N° 14-B);
16. Copia de los mapas son producidos por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) (Anexo N° 15);
17. Copia de Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA (Anexo N° 16);
18. Copias de las fichas registrales que acreditan primero la posesión, propiedad y venta de los 222 colonos a Plantaciones de Pucallpa S.A.C (Anexo N° 17);
19. Informe *Deforestación por definición*, por parte de la institución Environmental Investigation Agency (Anexo N° 18); y
20. Comunicado de la opinión pública por el SERFOR, donde denuncia la actividad depredatoria de la empresa (Anexo N° 19).

## **VI. MEDIOS PROBATORIOS**

Adjuntamos a la presente demanda, en calidad de medios probatorios:

1. Copia de mapa del *Plan del curso del Río Huallaga y Ucayali y de la pampa del Sacramento* levantado por el P. Fray Manuel Sobreviola, Guardián del Colegio Ocopa del año 1799 (Anexo N° 5);
2. Copia de Resolución Directoral N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAA que suspende actividades de Plantaciones de Pucallpa, luego de acreditar el daño que esta ocasiona al medio ambiente. (Anexo N° 16); y
3. Copias de las fichas registrales que acreditan primero la posesión, propiedad y venta de los 222 colonos a Plantaciones de Pucallpa SAC (Anexo N° 17).

### **POR LO EXPUESTO:**

A usted, señor juez, pedimos **admitir** la presente demanda, **tramitarla** conforme a su naturaleza y, en su oportunidad, **declararla fundada**. En consecuencia, le pedimos ordenar a las demandadas dar cumplimiento a lo solicitado en nuestro petitorio y en los términos señalados por este.

### **PRIMER OTROSÍ DECIMOS:**

Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 80 y 74 del Código Procesal Civil, otorgamos facultades generales de representación a nuestros abogados patrocinadores: **Juan Carlos Ruiz Molleda**, con registro CAL N° 28423, **Maritza Quispe Mamani**, con registro CAC N° 4434, y **Hilder Riki Jumanga Jacinto**, con Registro CAU N° 679.

### **SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS:**

Que, designamos a **Robert Guimaraes Vásquez**, ciudadano peruano, identificado con DNI N° 09668129 y **presidente de FECONAU**, a efectos de que, en nuestra representación, pueda recoger cualquier tipo de documentación, tales como oficios, partes y anexos desglosados, producida o presentada durante el presente proceso judicial.

Coronel Portillo, 23 de mayo de 2016